C O R T E S

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

COMISION DE CONSTITUCION

PRESIDENTE: Don José Federico Carvajal Pérez

Sesión número 7

celebrada el martes, 29 de agosto de 1978

SUMARIO

Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.

Antes de entrar en el orden del día, el señor Presidente pronuncia unas palabras condenando los asesinatos cometidos en el día de ayer en las personas de cuatro servidores del orden público. Después de rendirles un emocionado homenaje y testimoniar la condolencia de la Cámara a sus familias, dice que el mejor homenaje que se puede rendir a estos hombres que han caído en el cumplimiento de su deber «es cumplir nosotros con el nuestro».

A continuación expresa, en nombre propio y en el de toda la Cámara, la condolencia por el fallecimiento de la madre del Senador señor Benet Morell.

Seguidamente pide al señor Letrado que dé lectura a la lista de los miembros de la

Comisión, a efectos de comprobar la existencia de quórum y conocimiento de las sustituciones que se producen. Así lo hace el señor Letrado.

Proyecto de Constitución (VII).

Artículo 26, apartado 1.—Intervienen los señores Unzueta Uzcanga (en nombre del señor Bandrés Molet), Villar Arregui, Vida Soria, Iglesias Corral, Gamboa Sánchez-Barcaiztegui (quien presenta una enmienda «in voce», a la que da lectura el señor Secretario), Matutes Juan, Satrústegui Fernández, Azcárate Flórez, Olarra Ugarte-mendía, Xirinacs Damians y Pérez Puga (quien formula una enmienda «in voce»). Nuevas intervenciones de los señores Gamboa Sánchez-Barcaiztegui, Villar Arregui, Vida Soria y Pérez Puga. El señor Portabella Rafols presenta una enmienda «in voce». A continuación se procede a las votaciones de las distintas enmiendas, con los

siguientes resultados: la del señor Bandrés Molet fue rechazada por 14 votos en contra y tres a favor, con seis abstenciones; la del señor Monreal Zia fue rechazada por 20 votos en contra, con tres abstenciones; la del Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes (modificada «in voce») fue rechazada por 13 votos en contra y cinco a favor, con seis abstenciones; la de Entesa del Catalans fue rechazada por 13 votos en contra y siete a favor, con tres abstenciones; la del señor Gamboa Sánchez-Barcaiztegui fue rechazada por ocho votos en contra, con 15 abstenciones; la del señor Matutes Juan fue rechazada por 21 votos en contra, con dos abstenciones; la del señor Satrústegui Fernández fue rechazada por tres votos en contra y dos a favor, con 17 abstenciones; la del señor Olarra Ugartemendía fue rechazada por 19 votos en contra y uno a favor, con tres abstenciones; la del señor Xirinacs Damians fue rechazada por 19 votos en contra, con cuatro abstenciones; la del señor Pérez Puga fue rechazada por siete votos en contra y tres a favor, con 13 abstenciones. Se vota a continuación el texto del proyecto, que fue aprobado por 10 votos a favor, con 13 abstenciones.

Apartado 2.—Intervienen los señores Royo-Villanova y Payá, Pedrol Rius (en nombre del señor Cacharro Pardo), Olarra Ugartemendía, Pérez Puga, Villar Arregui, Vida Soria, Pérez Puga, Olarra Ugartemendía, Satrústegui Fernández y Vida Soria. Seguidamente se votan las distintas enmiendas con los resultados siguientes: las de los señores Satrústegui Fernández y Carazo Hernández son rechazadas por siete votos en contra, con 17 abstenciones; las de los señores Cacharro Pardo, Royo-Villanova y Payá y Olarra Ugartemendía fueron rechazadas por ocho votos en contra y uno a favor, con 13 abstenciones; la del señor Bandrés Molet fue rechazada por 18 votos en contra, con cinco abstenciones; la del Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes fue rechazada por 12 votos en contra y cuatro a favor, con nueve abstenciones; la otra enmienda del señor Carazo Hernández fue rechazada por 22 votos en contra, con una abstención. A continuación

se vota el texto del proyecto, que fue aprobado por unanimidad con 24 votos. El señor Secretario lee el texto aprobado.

Se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión.—Apartado 3 (nuevo).—

Intervienen los señores Sánchez Agesta (en nombre del señor Prado y Colón de Carvajal) y Vida Soria. Nueva intervención del señor Sánchez Agesta para rectificar. Se vota la enmienda del señor Prado y Colón de Carvajal, que fue rechazada por 23 votos en contra, con dos abstenciones.

Artículo 27, apartado 1.—Intervienen los señores Martín-Retortillo Baquer, Portabella Rafols y Enciso Recio. Se vota la enmienda del señor Martín-Retortillo Baquer, que fue aprobada por 18 votos a favor, con seis abstenciones. El señor Secretario lee la nueva redacción de este apartado.

Apartado 2.—Intervienen los señores Xirinacs Damians y Cela y Trulock. Se vota la enmienda del señor Xirinacs Damians, que fue rechazada por 23 votos en contra, con dos abstenciones. La enmienda del señor Cela y Trulock fue aprobada por unanimidad, con 25 votos. El señor Secretario da lectura a la nueva redacción de este apartado.

Artículo 28, apartado 1.—Intervienen los señores Gamboa Sánchez-Barcaiztegui, Cela y Trulock y Villar Arregui. Se vota la enmienda del señor Gamboa Sánchez-Barcaiztegui, que fue rechazada por 10 votos en contra, con 15 abstenciones. La enmienda del señor Cela y Trulock fue aprobada por 19 votos a favor y dos en contra, con cuatro abstenciones. El señor Secretario da lectura al nuevo texto de este apartado. El señor Villar Arregui retira su enmienda.

Apartado 2.—Intervienen los señores Xirinacs Damians, Gamboa Sánchez-Barcaiztegui, Cela y Trulock, Fernández-Galiano Fernández, Pedrol Rius, Villar Arregui y Sánchez Agesta (quien formula una enmienda «in voce»). Se vota la enmienda del señor Xirinacs Damians, que fue rechazada por 21 votos en contra, con cuatro abstenciones; la del señor Gamboa Sánchez-Barcaiztegui fue rechazada por nueve votos en contra, con 16 abstenciones; la del señor Gutiérrez Rubio fue rechazada por 23 votos en contra, con dos abstenciones.

A continuación el señor Secretario lee la enmienda del señor Sánchez Agesta, que fue rechazada por seis votos en contra y tres a favor, con 16 abstenciones. Se vota el texto del proyecto, que fue aprobado por unanimidad, con 25 votos. El señor Secretario lee el texto aprobado.

Se suspende la sesión a las dos y veinticinco minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

Artículo 28, apartado 3.—Intervienen los señores Martín-Retortillo Baquer, Azcárate Flórez y Gamboa Sánchez-Barcaiztegui. Se votan las distintas enmiendas con los resultados siguientes: la del Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes fue rechazada por 16 votos en contra y dos a favor, con cuatro abstenciones; la de la Agrupación Independiente fue rechazada por cuatro votos en contra y uno a favor, con 10 abstenciones, y la del señor Gamboa Sánchez-Barcaiztegui fue rechazada por 10 votos en contra y tres a favor, con ocho abstenciones. Se vota el texto del proyecto, que fue aprobado por 21 votos a favor, con dos abstenciones. El señor Secretario da lectura al texto aprobado.

Apartado 4 (nuevo).—Intervienen los señores Pérez-Maura Herrera y Xirinacs Damians. La enmienda del señor Pérez-Maura Herrera fue aprobada por ocho votos a favor y cinco en contra, con 11 abstenciones. La del señor Xirinacs Damians fue rechazada por 20 votos en contra, con cuatro abstenciones. El señor Secretario da lectura al texto del apartado 4 (nuevo).

Artículo 29, apartado 1.—Intervienen los señores Fuentes Quintana, Martín-Retortillo Baquer y Villodres García. La enmienda del señor Fuentes Quintana fue aprobada por unanimidad, con 25 votos. El señor Secretario da lectura al texto aprobado.

Apartado 2 (nuevo).—Intervienen los señores Fuentes Quintana, Ramos Fernández-Torrecilla, Jiménez Blanco y Sánchez Agesta. La Comisión se muestra conforme con la enmienda del señor Fuentes Quintana para la adición de este apartado, a cuyo texto da lectura el señor Secretario.

Apartado 3 (nuevo).—El señor Cela y Trullock defiende su enmienda, que fue apro-

bada por unanimidad, con 25 votos. El señor Secretario lee el texto aprobado.

A continuación se abre debate sobre una enmienda «in voce» del señor Ramos Fernández-Torrecilla en la que solicita que el artículo 23 pase a figurar en su lugar primitivo. Intervienen los señores Ramos Fernández-Torrecilla, Jiménez Blanco, Sánchez Agesta y Villar Arregui. Nuevas intervenciones de los señores Ramos Fernández-Torrecilla, Jiménez Blanco y Sánchez Agesta. El señor Secretario lee la enmienda «in voce» del señor Ramos Fernández-Torrecilla, que consiste en que habiendo pasado el artículo 22 a otro lugar, se mantenga el 23 en su lugar originario. Fue aprobada por 21 votos a favor y tres en contra, con una abstención.

El señor Secretario lee a continuación la primera de las enmiendas del Grupo de Unión de Centro Democrático proponiendo que el actual artículo 11 bis (que debería ser el 12 del dictamen) pase a ser apartado 2 del artículo 11. Fue aprobada por 23 votos a favor, con dos abstenciones.

Seguidamente el señor Secretario da lectura a la segunda enmienda del Grupo de Unión de Centro Democrático proponiendo que el actual artículo 24 se desglose en dos artículos diferentes. Fue aprobada por 23 votos, con dos abstenciones.

Se pasa a debatir la enmienda del señor Sánchez Agesta, quien pasa a defenderla. Intervienen a continuación los señores Villar Arregui, Ramos Fernández-Torrecilla, Azcárate Flórez y Pérez Puga, quien acepta la petición hecha a la Presidencia en el sentido de que se demore este tema de la sistemática. El señor Presidente anuncia que se demore la votación de esta enmienda en espera de una propuesta de los portavoces.

Artículo 30.—El señor Gamboa Sánchez-Barcaiztegui defiende su enmienda a la totalidad del artículo. Fue rechazada por 19 votos en contra, con dos abstenciones.

Apartado 1.—Intervienen los señores Xirinacs Damians, Sánchez Agesta (en nombre del señor Osorio García), Cela y Trullock (quien formula una enmienda «in voce»), Fernández-Galiano Fernández, Villar Arregui, Vicente Domínguez (quien presenta

una enmienda «in voce»), Sánchez Agesta, Landáburu González (señora), Martín-Retortillo Baquer y Ramos Fernández-Torre-cilla. Nuevas intervenciones de los señores Fernández-Galiano Fernández, Vicente Domínguez, Landáburu González (señora) y Calatayud Maldonado.

Se suspende la sesión.

Se reanuda la sesión.—El señor Presidente pide al señor Secretario que dé lectura a la nueva enmienda presentada a la Mesa como refundición de las enmiendas «in voce» anteriormente formuladas en relación con el apartado 1. Así lo hace el señor Secretario. A la vista de la nueva redacción que recoge esta enmienda, son retiradas las anteriormente presentadas «in voce», y se aprueba aquélla por unanimidad.

Apartado 2.—El señor Ramos Fernández-Torre-cilla plantea una cuestión de orden en el sentido de que las enmiendas que no sean defendidas por sus autores se entiendan decaídas. El señor Pedrol Ríus sugiere una fórmula en relación con esta cuestión. El señor Presidente recoge las sugerencias hechas y anuncia que la Mesa estudiará el tema y tomará una resolución.

El señor Xirinacs Damians defiende sus enmiendas. Lo mismo hacen los señores Calatayud Maldonado y Azcárate Flórez. Se votan a continuación las distintas enmiendas con los siguientes resultados: las del señor Xirinacs Damians fueron rechazadas por 13 votos en contra y tres a favor, con nueve abstenciones la primera, y por 19 votos en contra y dos a favor, con tres abstenciones, la segunda; la del señor Osorio García fue rechazada por 10 votos en contra, con 14 abstenciones; la del señor Calatayud Maldonado fue rechazada por siete votos en contra y cuatro a favor, con 13 abstenciones; la de la Agrupación Independiente fue rechazada por 16 votos en contra y seis a favor, con dos abstenciones. Se vota a continuación el texto del proyecto, que fue aprobado por 22 votos a favor, con dos abstenciones. El señor Secretario lee el texto aprobado.

Artículo 31, apartado 1.—Intervienen los señores Olarra Ugartemendía y Vida Soria. Se vota la enmienda del señor Olarra Ugartemendía, que fue rechazada por nueve vo-

tos en contra, con 13 abstenciones. Se vota a continuación el texto del proyecto, que fue aprobado por 22 votos a favor y uno en contra. El señor Secretario lee el texto aprobado.

Apartado 2.—Se vota la enmienda del señor Carazo Hernández, que fue rechazada por 20 votos en contra, con tres abstenciones. El texto del proyecto fue aprobado por 22 votos a favor, con dos abstenciones. El señor Secretario da lectura al texto aprobado.

Apartado 3.—Intervienen los señores Olarra Ugartemendía, Sánchez Agesta, Villar Arregui, Iglesias Corral, Ribera Rovira, Unzueta Uzcanga, Sainz de Varanda Jiménez y Villodres García (quien formula una enmienda «in voce»). Nueva intervención del señor Unzueta Uzcanga y a continuación el señor Martín-Retortillo Baquer. Se votan conjuntamente las enmiendas de los señores Olarra Ugartemendía, Iglesias Corral y Cacharro Pardo, que fueron rechazadas por nueve votos en contra y 16 abstenciones. La del señor Carazo Hernández fue rechazada por 24 votos en contra y una abstención. El señor Secretario lee la enmienda «in voce» del señor Villodres García, que, sometida a votación, fue rechazada por siete votos en contra y seis a favor, con 11 abstenciones. Por último, se vota la enmienda del señor Martín-Retortillo Baquer, que fue rechazada por 12 votos en contra y siete a favor, con seis abstenciones. Se vota seguidamente el texto del proyecto con la modificación introducida, que fue aprobado por 22 votos a favor, con tres abstenciones. El señor Secretario lee el texto aprobado.

Artículo 32, apartado 1.—Intervienen los señores Xirinacs Damians, Jiménez Blanco, Azcárate Flórez, Martín-Retortillo Baquer y López Pina, quien formula una enmienda «in voce». Se vota la enmienda del señor Xirinacs Damians, que fue rechazada por 11 votos en contra y dos a favor, con 10 abstenciones. La de la Agrupación Independiente fue rechazada por nueve votos en contra y uno a favor, con 13 abstenciones. Por último, se vota la enmienda del señor López Pina, que fue aprobada por 23 votos. Se vota a continuación el tex-

to del proyecto con la modificación introducida, que fue aprobado por unanimidad, con 24 votos. El señor Secretario lee el texto aprobado.

Apartado 2.—Intervienen los señores Vida Soria, Pérez Puga, Sánchez Agesta, Pedrol Rius (quien formula una enmienda «in voce»), Villar Arregui y nuevamente el señor Vida Soria. Se vota la enmienda del Grupo Socialistas del Senado, que fue rechazada por 12 votos en contra y 11 a favor, con una abstención. Se vota a continuación el texto del proyecto, que fue aprobado por 20 votos a favor, con cuatro abstenciones. El señor Secretario lee el texto aprobado.

Apartado 3 (nuevo).—Se vota la enmienda del señor Xirinacs Damians, que fue rechazada por 18 votos en contra, con siete abstenciones.

Apartado 4 (nuevo).—Se vota la enmienda del señor Xirinacs Damians, que fue rechazada por 13 votos en contra y siete a favor, con cuatro abstenciones.

Artículo 32 bis.—El señor Presidente lee la enmienda del señor Pedrol Rius. Turno a favor del señor Sainz de Varanda Jiménez. Se vota esta enmienda, que fue aprobada por 21 votos a favor, con una abstención.

El señor Presidente da cuenta del acuerdo a que ha llegado la Mesa en relación con el tema planteado por el señor Ramos Fernández-Torrecilla sobre la anulación de las enmiendas que no sean defendidas por sus autores. Se entiende que la delegación habrá de ser expresa, escrita y comunicada a la Mesa en el momento de iniciarse la sesión, recogiendo así las sugerencias hechas. Anuncia que esta norma entrará en vigor pasado mañana para que los enmendantes tengan tiempo de hablar con los portavoces y sepan a qué atenerse.

Se levanta la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.

Se abre la sesión a las diez horas y cuarenta minutos de la mañana.

El señor PRESIDENTE: Señores Senadores, hoy hemos de comenzar la sesión en la tristeza de saber que cuatro servidores del orden público han vuelto a caer en manos

del asesino alevé. Hombres locos y feroces que ignoran que, si no es con la palabra, no van a poder convencer con el plomo de las metralletas.

En un día memorable, don Miguel de Unamuno dijo aquello de «venceréis, pero no convenceréis». Estos ni siquiera van a tener la tristeza de una victoria, sino la del asesinato inútil, la del asesinato por la espalda. A pesar de ello esta Presidencia amparará en lo posible el uso de la palabra y en la palabra y en la expresión a todos los señores Senadores que intervengan, pues tiene la esperanza y el anhelo de que cada palabra que aquí se diga desarmará una metralleta en otro lugar de España.

He de rendir homenaje a estos servidores del orden público y a la vez exigir con firmeza, con energía, creo que en nombre de toda la Comisión, que estos hechos no queden impunes, que estos hechos se esclarezcan, que estas causas —las causas que los motivan—, se averigüen por quienes correspondan. Creo, señores Senadores, que el mayor homenaje que podemos rendir a estos hombres que han caído en el cumplimiento del deber, es cumplir nosotros con el nuestro.

Antes de entrar en el debate tenemos también que dar una triste noticia, y es el fallecimiento de la madre del Senador señor Benet, a quien expresamos nuestra condolencia y la de toda la Comisión. (Asentimiento.)

El Letrado señor Pérez Serrano va a dar lectura, a efectos de quórum y sustituciones, a los nombres de los miembros de la Comisión. (Así lo hace el señor Letrado.)

PROYECTO DE CONSTITUCION (VII)

El señor PRESIDENTE: Entramos, señores Senadores, en el debate del artículo 26. No hay enmiendas a la totalidad del artículo. Enmienda número 294, del señor Bandrés, al apartado 1. El señor Bandrés tiene la palabra. Artículo 26

El señor UNZUETA UZCANGA: Momentos antes de salir del hotel para dirigirme a la Cámara he recibido aviso del Senador señor Bandrés de que, por algún problema de viaje, no podía llegar a tiempo y me rogada

que defendiera por sus propios términos la enmienda, a efectos de que después pasara al Pleno si se consideraba oportuno. Si la Presidencia quiere, cumplo con el rito de descender a los escaños.

El señor PRESIDENTE: No hace falta.

¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

La enmienda siguiente es la número 1.096, del señor Monreal.

El señor UNZUETA UZCANGA: Ocurre lo mismo, señor Presidente, que con el señor Bandrés.

El señor PRESIDENTE: ¿También se reserva el derecho de defensa en el Pleno?

El señor UNZUETA UZCANGA: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.)

Pasamos, pues, a la tercera enmienda, la número 15, del Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes. El representante del Grupo tiene la palabra.

El señor VILLAR ARREGUI: Señor Presidente, señoras y señores Senadores... (Se enciende la luz amarilla de la mesa de la Presidencia.) Señor Presidente, ruego que se apague la luz.

El señor PRESIDENTE: Perdón, la impaciencia de la Presidencia es manifiesta. Puede continuar en el uso de la palabra.

El señor VILLAR ARREGUI: El texto de nuestra enmienda adolece de una errata mecanográfica, cual es la de haber omitido en ella la expresión «y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos». Ruego que a todos los efectos se tome nota.

El señor PRESIDENTE: Habida cuenta de la longitud de la errata mecanográfica, la Presidencia sugiere al señor Villar Arregui que la formulemos para cumplir los trámites reglamentarios como enmienda «in voce».

El señor VILLAR ARREGUI: Es del texto del Congreso. La enmienda persigue que, bajo el equívoco «los demás cuerpos sometidos a disciplina militar», no puedan integrarse trabajadores que prestan servicio en entidades, como puede ser, «ad exemplum», el Instituto Nacional de Técnica Aeronáutica u otros establecimientos cuya estructura en la cúspide es militar, pero cuya base es eminentemente laboral.

La ambigüedad de la situación de estos trabajadores exige su clarificación y, por consiguiente, exige la clarificación del texto constitucional concerniente a la regulación del derecho de huelga. Por eso la propuesta que nuestro Grupo formula es la de sustituir la expresión que emplea el texto del Congreso: «la ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar», por esta otra que dice: «La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados, o a los demás cuerpos cuyos miembros estén sujetos con carácter permanente al fuero militar». Y reitero que por omisión se había excluido el párrafo: «y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos».

En síntesis, por consiguiente, lo que nuestro Grupo pretende es, puesto que se trata de un precepto limitativo de un derecho que como derecho humano se reconoce en la Constitución, definir el tipo de la limitación en estos términos: «o a los demás cuerpos cuyos miembros estén sujetos con carácter permanente al fuero militar». Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

A continuación pasamos a la enmienda 1.050, del Grupo Socialista. El portavoz de este Grupo tiene la palabra para defenderla.

El señor VIDA SORIA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, nuestra enmienda propone concretamente, según se puede leer, la supresión en este artículo del párrafo que dice: «y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos». Se trata de una enmienda que está en línea

con los textos, o que intenta poner en línea el artículo 26 de nuestra Constitución con los textos internacionales y, sobre todo, con las realidades de la dinámica sindical internacional y, desde luego, de la dinámica sindical en España. Concretamente, mantener este párrafo en el artículo 26 va en contra de lo que hoy día el mismo Estado español ha firmado, ratificando los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo. Convenios, repito, ratificados el año pasado por el Estado español y, en consecuencia, una vez que la Constitución entre en vigor formarían parte del ordenamiento jurídico español, según dispone el artículo 90.

Esos convenios 87 y 98, fundamentalmente, hacen una referencia a especialidades en la regulación jurídica del derecho de sindicación respecto al personal militar y a las fuerzas de orden público, lo cual significa «a sensu contrario», y así se dice en todos los Tratados, y así se dice, incluso, en recomendaciones posteriores de la Organización Internacional del Trabajo, que el íntegro ejercicio, tanto estructural como funcional, del derecho sindical debe ser reconocido a toda clase de empleados públicos.

Para acomodar, en consecuencia, la postura o la posición de nuestro texto constitucional con los textos internacionales ya ratificados por España, es por lo que nosotros intentamos que se acepte esta enmienda de supresión de este párrafo, al que nosotros venimos refiriéndonos.

Este sería, digamos, el razonamiento o la base técnica de la enmienda que nosotros presentamos. Desde el punto de vista práctico hay también otro matiz que apoya nuestra enmienda y que realmente no es de descuidar.

Pretendemos con la supresión de este párrafo ser, o que nuestra Constitución sea realista; realista en el sentido de que no ignore que la sindicación de los funcionarios públicos, en su aspecto funcional, hoy día está prácticamente equiparada a la sindicación, en su aspecto funcional también, de los trabajadores por cuenta ajena, sin más calificativos. Digo que la razón de intentar la supresión de este párrafo es práctica porque, eliminando esta frase del artículo, evitaríamos, en suma, que la legislación o incluso que la

Constitución del Estado fuera sistemáticamente incumplida.

Esta restricción, no nos engañemos, en el ámbito del Derecho sindical va a ser incumplida desde el momento en que se ponga en vigor. No nos engañemos, repito, la dinámica sindical es mucho más fuerte, es mucho más sutil que cualquier precepto restrictivo, y lo hemos estado viendo en otros aspectos durante cuarenta años, donde con toda clase de prohibiciones, una sobre otra, las prohibiciones han fracasado y se ha tenido que recurrir a procedimientos verdaderamente de urgencia, a procedimientos que no podían, por otra parte, estar amparados por la legislación porque la legislación era prohibitiva; se ha tenido que recurrir a procedimientos de urgencia que no decían nada en favor de esa integración de fenómenos sociales que toda norma pretende integrar en el ordenamiento jurídico del fenómeno social.

La supresión del párrafo a que nos estamos refiriendo no significaría nada más que el hecho de que la Constitución va a respetar la esencia de la legislación sindical, no sólo ya para los trabajadores, sino para los funcionarios públicos. Y esa esencia no es otra que la autonomía, que el reconocimiento de la autonomía de los interlocutores sociales. Eso no quiere decir que a partir de ahora la huelga vaya a ser aceptada sin ninguna discriminación respecto a los funcionarios públicos; podrá haber determinadas peculiaridades, pero esas peculiaridades vendrán, más que por una restricción «a priori» del ordenamiento constitucional, y en su caso del ordenamiento ordinario, por la propia dinámica, esencia y peculiaridades del movimiento sindical. En razón de eso y en razón fundamentalmente, recuerdo, de ese principio técnico inicial tan querido para algunos grupos de la Cámara, como es el de respeto a los textos internacionales, por eso, digo, y para acomodar fundamentalmente nuestra Constitución a unos textos internacionales que ya han sido ratificados por España, pedimos la supresión de este artículo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vida Soria. ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

El señor PEREZ PUGA: Para indicar a la Presidencia que al final, por economía de tiempo, intervendré en el turno de portavoces.

El señor PRESIDENTE: El señor Iglesias tiene la palabra para defender la enmienda número 119.

El señor IGLESIAS CORRAL: Esta enmienda concuerda con otra que presenta el señor Pedrol, mi compañero Senador y además Presidente del Consejo General de la Abogacía española, por lo que retiro la mía, que queda incorporada con todo su espíritu a la del señor Pedrol.

El señor PEDROL RIUS: Sólo para manifestar mi agradecimiento...

El señor PRESIDENTE: Ya tendrá el señor Pedrol tiempo de hacerlo en el momento oportuno.

Queda retirada la enmienda del señor Iglesias.

Pasamos a continuación a la enmienda número 150, del señor Cela, que tiene la palabra para defenderla.

El señor CELA Y TRULOCK: Queda retirada, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Por retirada, señor Cela.

Pasamos a la enmienda número 175, del señor Gamboa, que tiene la palabra para defenderla.

El señor GAMBOA SANCHEZ-BARCAIZ-TEGUI: Señor Presidente, quiero presentar una enmienda «in voce» a mi enmienda a este artículo 26, en el sentido de que después de decir «las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos» se agregue «y el personal civil al servicio de la Administración militar».

El señor PRESIDENTE: Ruego al señor Gamboa que haga entrega del escrito a la Mesa. *(El señor Gamboa hace entrega a la Mesa del texto de la enmienda.)*

El Senador señor Unzueta dará lectura al texto íntegro de la enmienda cuya discusión vamos a comenzar y que sustituye a la 175.

El señor SECRETARIO (Unzueta Uzcanaga): Con su permiso, señor Presidente, voy a suprimir el preámbulo porque consta ya la identidad del enmendante.

El texto dice: «El Estado garantiza el derecho a la libre sindicación de todos los españoles, excepto a los miembros de las fuerzas o institutos armados y demás cuerpos sometidos a disciplina militar, y regulará por ley las limitaciones y peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos y el personal civil al servicio de la Administración militar. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones o a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato».

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Unzueta. Tiene la palabra el señor Gamboa.

El señor GAMBOA SANCHEZ-BARCAIZ-TEGUI: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, la razón de esta enmienda, cuya gravedad ha debido escapar a la consideración de los señores Diputados, estriba en el reconocimiento que el proyecto constitucional efectúa del derecho de sindicación a los militares, aunque después remita a la legislación ordinaria la posibilidad —y quiero recalcar esta palabra—, la posibilidad de limitar o efectuar el ejercicio de este derecho.

Las Fuerzas Armadas, por su propia naturaleza, son incompatibles con la sindicación de sus miembros, cuyas relaciones se mueven ineludiblemente dentro de la subordinación a la jerarquía que imprime la disciplina militar.

Las consecuencias que derivarían del eventual reconocimiento del derecho a la sindicación dentro de las Fuerzas Armadas, en orden al resquebrajamiento de la disciplina militar, aun a su desintegración, me obliga a solicitar encarecidamente la aprobación de esta enmienda.

La segunda modificación que se propone se refiere a incluir en este artículo la posibilidad de limitar el derecho de sindicación a los funcionarios civiles, dentro de los cuales pienso fundamentalmente en los funcionarios civiles

al servicio de la Administración Militar, incluso el personal no funcionario que presta sus servicios en dicha Administración; y en otro plano los miembros de las carreras judicial y diplomática, por entender que la peculiar naturaleza de sus respectivas misiones justifica la autorización a la ley ordinaria para el establecimiento, en su caso, de limitaciones en el derecho de sindicación.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gamboa. ¿Algún turno a favor? *(Pausa.)* ¿Algún turno en contra? *(Pausa.)* ¿Señores portavoces? *(Pausa.)*

El señor Matutes tiene la palabra para defender su enmienda número 217.

El señor MATUTES JUAN: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, pretendo mi enmienda, simple y sencillamente, exceptuar a las Fuerzas Armadas del derecho de sindicación, haciéndoles objeto de un estatuto especial por ley orgánica y dejando intacto el resto del artículo. Se basa el enmendante en el hecho de que las más importantes centrales sindicales existentes en España parten del principio de la lucha de clases, principio que, aunque yo no comparto, es importante señalarlo aquí por cuanto las Fuerzas Armadas, por otra parte, son una institución en cuya estructuración el concepto de jerarquía de clase juega un papel importante como uno de los soportes básicos en que se apoya el principio de disciplina que, a su vez, constituye un principio esencial a toda concepción eficaz de la organización militar y principio inamovible de la misma, como ya destacó en su día nuestro insigne Calderón, en unos versos ya clásicos, pero vigentes, que todavía figuran en las paredes de algunos cuarteles: «Aquí la más principal hazaña es saber obedecer».

Evidentemente, mal pueden compaginarse el principio de lucha de clases, al que nos referíamos, con el principio de obediencia ciega al mando personificado en las distintas clases militares. No quiero extenderme en el chiste fácil del jefe consultando a los enlaces sindicales si puede dar la orden de ataque o de si las guardias deben remunerarse como horas extraordinarias, pero lo que sí es evidente es que existe una contradicción clara

entre el principio de disciplina militar y la posible sindicación de sus miembros, por lo que es necesario que la Constitución corte de raíz tal posibilidad sin dejar que ello dependa del Partido que esté en el Gobierno, como se pretende en el texto del proyecto.

A mayor abundamiento, si afirmamos por una parte que las Fuerzas Armadas tienen como misión, entre otras, la de defender el ordenamiento constitucional, para lo cual es aconsejable que mantengan su apoliticismo y su neutralidad política, y no ignoramos, por otra parte, las especiales vinculaciones existentes entre las grandes centrales sindicales y determinados partidos políticos, tenemos otra razón para excluir tal posibilidad de que se sindiquen las Fuerzas Armadas, que deben ser objeto, como propone mi enmienda, de un planteamiento específico a través de una ley orgánica, que, tal como establece el artículo 8.º del actual proyecto de Constitución, regulará las bases de la organización militar, así como el Estatuto personal de sus componentes.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Algún turno a favor? *(Pausa.)* ¿Algún turno en contra? *(Pausa.)* ¿Señores portavoces? *(Pausa.)*

Tiene la palabra el señor Satrústegui para defender la enmienda número 238.

El señor SATRUSTEGUI FERNANDEZ: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, SS. SS. saben mejor que yo que los pactos europeos a que han llegado las naciones que están conformando este Continente están presididos por dos pensamientos progresistas: un pensamiento progresista de raíz socialista, y otro progresista de raíz liberal. Pues bien, socialistas y liberales han llegado a unos textos que, concretamente en lo que se refiere al artículo 26 en relación con el artículo 33 del proyecto de Constitución, demuestran que los legisladores del Congreso no han tenido muy en cuenta lo que ya se ha acordado en ese ámbito europeo. Yo diría que estos dos artículos son de lo menos felices del proyecto de Constitución.

La Carta Social Europea regula estas cuestiones, la cuestión sindical y la cuestión de la negociación colectiva, en dos artículos: el

artículo 5.º y el artículo 6.º, y he de recordar que la Carta Social Europea es un texto muy posterior a todas las Constituciones que hemos venido manejando para fundamentar nuestro proyecto.

Por tanto, creo que es la Carta Social Europea la que debe presidir la redacción de nuestra Constitución, porque si esto no fuera así, se daría el contrasentido de que ahora podríamos aprobar unos artículos, pero como España ya ha firmado la Carta Social y próximamente la ratificará, es evidente que en los artículos de esta Carta a que me refiero, los artículos 5.º y 6.º, no va a hacer reserva alguna, resultaría que estaríamos redactando una Constitución que va a ser rectificada dentro de unos días o unos meses por la ratificación de la Carta Social por el Gobierno, las Instituciones o los poderes públicos de España.

Concretamente, voy al caso. El artículo 26 del proyecto de Constitución no contempla más que el derecho de sindicación. Es verdad que no se refiere al derecho de sindicación de los trabajadores, y podría entenderse que la palabra «sindicarse» es aplicable a los trabajadores y a los empresarios. Pero en el lenguaje político esto no es verdad. En el lenguaje político se entiende que la sindicación afecta a los trabajadores. Y aquí, en el artículo 26 del proyecto, parece que no se habla más que del derecho a sindicarse de los trabajadores.

Nos encontramos con que el artículo 5.º de la Carta Social se refiere a la libertad de los trabajadores y de los empresarios para constituir organizaciones locales, nacionales o internacionales para la protección de sus intereses económicos y sociales y para adherirse a esas organizaciones. Luego viene la salvedad desde siempre, a que se ha aludido antes, de las Fuerzas Armadas.

Pues bien, yo propongo que en el artículo 26 nos atengamos a esa redacción del artículo 5.º de la Carta Social y, por tanto, se diga: «Todos tienen derecho a sindicarse o a asociarse libremente para la protección de sus intereses económicos y sociales. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos Armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar. La libertad sindical o de asociación comprende el

derecho a fundar sindicatos de trabajadores y asociaciones empresariales, y a afiliarse a los de su elección, así como el derecho de unos y otras a formar confederaciones y a fundar organizaciones internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato de trabajadores o a una asociación empresarial».

No estoy, por tanto, discutiendo el derecho evidente de los trabajadores a sindicarse tal como se proclama en el proyecto, pero me parecería a estas alturas (después de que existe el texto de la Carta Social) que sería un desprecio a los empresarios el no mencionar su derecho a asociarse en las mismas condiciones en que los trabajadores pueden hacerlo en su sindicato. Con esta redacción yo terminaría el artículo, porque el artículo 5.º de la Carta Social no dice más. Lo único que hace es proclamar el derecho sindical, que lo refiere tanto a los trabajadores como a los empresarios.

Y no hay en ese artículo ninguna referencia a un derecho de huelga. El derecho de huelga, con arreglo a la Carta Social, debe estar relacionado con la negociación colectiva. Por eso, en mi enmienda, yo propongo que se suprima el número 2 de este artículo 26, y el derecho de huelga se traslade al artículo 33, en el que la ley garantizará «el derecho a la negociación colectiva laboral y de los representantes de los trabajadores y empresarios, así como la fuerza vinculante de los convenios».

Yo, ateniéndome a la redacción exacta del artículo 6.º de la Carta Social Europea, propongo como número 2 el siguiente texto: «Se reconoce el derecho de los trabajadores y empresarios a acciones colectivas en caso de conflicto de intereses, incluido el derecho de huelga, condicionado a las obligaciones que pudieran resultar de los convenios colectivos en vigor». He traducido literalmente la Carta Social Europea. Y añado conforme al proyecto del Congreso que «La ley que regule el ejercicio de este derecho, sin perjuicio de las limitaciones que pueda establecer, incluirá las garantías precisas para asegurar el funcionamiento de los servicios esenciales en una sociedad democrática».

A mí me parece que con estas enmiendas que propongo queda perfectamente garantiza-

do ese derecho fundamental que tienen todos los trabajadores a sindicarse, a poder promover acciones colectivas, incluido el derecho de huelga. Pero tal como está redactado el proyecto, al no contemplarse en el artículo 26 más que el derecho de sindicación que, políticamente —repito— se refiere siempre a la sindicación de los trabajadores, y al añadirse en el punto segundo el derecho a la huelga, se da la impresión de que aquí se está constitucionalizando el derecho a la huelga política, y esto, señores Senadores, ya saben que desde el punto de vista del pensamiento progresista-socialista y progresista-liberal que impera en Europa es inadmisibile.

Creo, por consiguiente, que tanto los socialistas como los liberales que hay en esta Cámara estarán de acuerdo en que, como antes ha dicho el señor Vida, tenemos que acomodar nuestra Constitución a lo que ya está establecido en los Pactos internacionales, y si hay un Pacto importante en Europa, es el de la Carta Social Europea.

A mí me cabe el honor, como miembro del Consejo de Europa, de pertenecer a la Comisión de Asuntos Sociales y de la Salud, que se encarga, precisamente, de la Carta Social Europea. En este momento las reuniones que estamos teniendo son para reformar la Carta Social Europea, pero he de decirles que en este punto no se reformará nada; seguirán las cosas como están. Por eso yo insisto en que debemos acoplar esos dos artículos a la Carta Social Europea, porque, si no, dentro de unos días o de unos meses esa Carta Social va a modificar nuestra Constitución.

Me adhiero, por tanto, a la postura del señor Vida de acomodar nuestros textos a los textos internacionales.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Satrustegui.

Hemos escuchado su intervención y hemos estudiado las enmiendas a los apartados 1 y 2 del artículo 26. En este último se dice pura y simplemente «se suprime». El resto es ya la justificación. No dice que se traslade a otro artículo; no dice nada más.

El señor SATRUSTEGUI FERNANDEZ: Eso lo digo en la justificación.

El señor PRESIDENTE: La justificación no es la enmienda. Tenemos que votar «se suprime». No se dice en la enmienda lo que interesa, que es que por cuestión de sistemática se cambie de sitio.

El señor SATRUSTEGUI FERNANDEZ: Yo he dicho «Se suprime», y en la justificación añadido que la supresión consiste en que ese derecho de huelga se traslade al artículo 33, de manera que los señores Senadores saben que cuando llegue el artículo 33 yo voy a apoyar plenamente el derecho de huelga en dicho artículo.

El señor PRESIDENTE: ¿Pero hay una enmienda en el artículo 33?

El señor SATRUSTEGUI FERNANDEZ: Naturalmente que sí, con la redacción que he leído.

El señor PRESIDENTE: Es lo que esta Presidencia quería saber. Gracias, señor Satrustegui.

¿Hay petición de palabra para un turno a favor? (Pausa.) ¿Para un turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.) El señor Azcárate tiene la palabra.

El señor AZCARATE FLOREZ: La Agrupación Independiente quiere declarar expresamente el apoyo que da a la enmienda que acaba de explicar el señor Satrustegui, y a la serie de argumentos que ha presentado. Lo consideramos más que suficiente, y, por lo tanto, no deseamos consumir más tiempo.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Satrustegui desea hacer uso de la palabra para rectificar?

El señor SATRUSTEGUI FERNANDEZ: No, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: El señor Olarra tiene la palabra para defender la enmienda número 360.

El señor OLARRA UGARTEMENDIA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, en principio voy a defender mi enmienda, aun-

que personalmente me adheriría a lo que con anterioridad ha manifestado el Senador señor Satrústegui. No obstante, la enmienda está ya presentada, y para el supuesto de que la propuesta del señor Satrústegui no prospere, voy a defenderla.

En el marco de una sociedad democrática como la que estamos configurando, entiendo que hemos de poner un cuidado exquisito en defender los derechos de los ciudadanos al máximo, siempre que dicha defensa no vaya a conculcar las libertades y los derechos de los demás. Esta regla de oro aplicada al campo sindical, que es el que ahora nos ocupa, significa que la Constitución debe proteger los intereses de los trabajadores independientes de la misma forma que lo hace con los diferentes grupos que representan las centrales sindicales.

La Constitución, a mi juicio, debe tener en cuenta la realidad del país en el momento presente, ya que no se puede establecer una norma suprema de manera abstracta y no basándose en la realidad del momento. En la actualidad, el grado de sindicación existente entre los trabajadores es pequeño y la experiencia nos demuestra que hasta en los países más avanzados de Occidente y con una muy larga tradición sindical este grado de afiliación a los sindicatos es minoritaria. Por añadidura, en España existen multitud de centrales sindicales con un diverso pluralismo ideológico y que, además, mantienen vínculos claros y concretos con partidos políticos en la mayoría de los casos.

Es evidente que un grado de politización excesivo no contribuye, precisamente, a defender los legítimos intereses profesionales de los trabajadores. A estas razones, yo añadiría que la estructura sociológica de muchas empresas españolas, con una organización laboral muy diferenciada, hace que no quepa establecer esquemas simplistas ni hablar de un interés común de todos los trabajadores.

El que no vive una empresa íntimamente y de cerca, puede no comprender esta realidad y aferrarse a viejos esquemas dogmáticos aprendidos en los anaqueles de las bibliotecas o quizá a través de escritos, cuya finalidad conocemos. En cuántas ocasiones en estos últimos años hemos podido comprobar que los auténticos derechos de los trabajadores eran

conculcados y pisoteados por una minoría violenta manejada desde el exterior y que obedecía consignas de tipo político o, por lo menos, de orden extraeconómico o extralaboral.

Todas estas peculiaridades sólo se comprenden estando dentro de la empresa por los hombres que viven día a día su realidad y sus problemas, con todos los variados matices.

Estas razones abogan precisamente en favor de la defensa de mi enmienda y de los derechos de los representantes independientes o de los no afiliados. No hacerlo así puede suponer dos alternativas: o que el número de independientes sea tan elevado y de tan fuerte peso específico que haya que contar con ellos para cualquier pacto de negociación que acuerden los sindicatos o, por el contrario, que los derechos de estos trabajadores independientes se vieran pisoteados.

Por ello es tan importante que la Constitución reconozca que los no afiliados no serán objeto de discriminación o de pérdida de derechos. Por supuesto, cuando yo sostengo esta tesis no estoy en absoluto en contra de unos sindicatos fuertes y representativos, sino todo lo contrario. Estamos convencidos de que el progreso económico y la estabilidad laboral en las empresas depende en una gran medida de la existencia de unos sindicatos sólidos, responsables y socialmente exigentes. Pero esta meta resulta ideal y no se consigue, a mi juicio, más que con el transcurso del tiempo y, desde luego, a través del convencimiento progresivo, por parte de todos, de que el sindicato es el firme apoyo de las legítimas reivindicaciones y el que mejores servicios de todo tipo puede prestar.

Mucho nos tememos que el grado de consolidación democrática no haya llegado en España a una cota tal como para suponer que se va a utilizar el convencimiento y no la coacción, directa o indirecta, para conseguir determinados fines ajenos, muchas de las veces, a los intereses que se dice defender. En definitiva, se trata de obtener garantías complementarias para que los sindicatos no se transformen en auténticos órganos de presión para la misma clase a la que dicen defender.

Simplemente propugno que los representantes laborales elegidos proporcionalmente al peso específico, a la representatividad y al

prestigio que tengan dentro de cada empresa, tengan iguales garantías sin que tengan que estar necesariamente afiliados a ningún sindicato o detentar un determinado matiz ideológico.

España ha suscrito la Carta de los Derechos Humanos que, por supuesto, es consustancial con la democracia. Pues bien, un derecho humano elemental es el estar protegido en el trabajo y el de sentirse legítimamente representado sin ningún género de presiones y de amenazas vengan éstas de donde vinieren. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarra.

¿Para un turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

Pasamos a la enmienda siguiente, número 461, del señor Xirinacs. El señor Xirinacs tiene la palabra para defender su enmienda.

El señor XIRINACS DAMIANS: Se trata en ella de suprimir únicamente el punto segundo de este primer apartado: «La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos». La supresión del punto que limita el derecho sindical de los cuerpos sometidos a disciplina militar y regula el mismo derecho para los funcionarios públicos está hecha con la única intención de fondo que guía todas las enmiendas de este Senador: la democratización de la vida ciudadana y el no hacer compartimientos estancos con desigualdad de trato.

Es necesario un cambio de mentalidad en este sentido, y deberíamos todos hacer un esfuerzo por eliminar estos «ghettos» no democráticos, estos feudos que hemos heredado y que pugnan por mantenerse.

En general, el Estado, cuando es de fuerza y no de derecho, es un cuerpo extraño a la sociedad e incluso, a veces, opuesto a la sociedad. Su fuerza se arranca a la sociedad y se usa contra la sociedad. Es la alienación estatal o política definida por Hegel y Marx. Los funcionarios de un Estado no democrático participan, contra su voluntad, de la mala con-

ciencia del Estado en su conjunto. Se ven como forzados a pasar por parásitos privilegiados, capataces mejor pagados y tratados que el pueblo trabajador, encargados de mantener a raya a una sociedad levantisca por explotada.

En un Estado democrático los funcionarios públicos son, en cambio, los servidores de la sociedad, amados por la sociedad. Se sienten identificados y compenetrados con sus necesidades; se sienten mantenidos con los esfuerzos tributarios de todos y quieren correr su misma andadura; no quieren discriminaciones como esta discriminación sindical que ahora nos ocupa; y si un día, ante una situación de emergencia, se requiere, por el bien de la sociedad, alguna excepción o recorte de sus derechos, lo aceptarán gustosos sin necesidad de recortes constitucionales. Estos recortes más bien parecen pertenecer a un Estado que no quiere acabar de ser democrático y no tiene la confianza ni de su sociedad ni de sus funcionarios.

Lo mismo podría decirse en lo referente a recortes para proteger la disciplina militar. Nuestra sociedad, después de un divorcio de cuarenta años, está ansiosa de que se permeabilicen los Ejércitos y consigamos un Ejército íntimamente identificado con el pueblo.

Pensemos que en este mismo artículo 26, en el párrafo segundo, se ponen las garantías para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales en la comunidad. Esto vale tanto para los servicios de defensa como para los servicios de la Administración, para evitar que una huelga pueda yugular estos servicios.

Además, pensemos que el artículo 50, que trata de la suspensión de las libertades y derechos fundamentales —y en el que, por cierto, se habla del estado de excepción y del estado de sitio, pero no del estado de guerra—, dice que incluso en estas situaciones de estado de excepción y de estado de sitio queda suspendido el artículo 26, apartado 2, que es el referente a la huelga. Por consiguiente, queda evitada la posibilidad de que estos servicios de defensa y de la Administración queden colapsados por una huelga inoportuna. Por tanto, sería reduplicar las garantías, y me parece que necesitamos hacer una Constitución lo más concisa posible.

Para el caso de guerra, repito lo que ya

apareció cuando el asunto de la pena de muerte, en que tuve alguna diferencia con el señor Pedrol Rius. En mi opinión, habría que poner también, en el capítulo quinto, artículo 50, las suspensiones en tiempo de guerra, y no las pone porque en la guerra se suspende lo que se tenga que suspender. Por tanto, me parece que queda clarísimo que si quedan garantizados los servicios básicos en tiempo de estado de excepción y de sitio, mucho más sentido tiene referido al estado de guerra. Como, aparte de esto, el estado de guerra (¡ojalá no ocurra nunca!), si ocurre, es de cuando en cuando, es triste que tengamos que someter a los trabajadores de la defensa y de la Administración a un trato discriminatorio por tantísimo tiempo como esperamos que dure la paz en nuestro país; que no pasen a ser precisamente estos trabajadores, que son los que realizan los servicios de mayor trascendencia social, una especie de ciudadanos de segunda.

Nada más. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xirinacs. ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

Pasamos a la última de las enmiendas de este apartado, la número 711, de Unión de Centro Democrático, cuyo representante tiene la palabra.

El señor PEREZ PUGA: Pretendo en este momento de la intervención retirar la enmienda presentada por UCD al apartado 1 del artículo 26 y transformarla en enmienda «in voce» del Senador que habla.

El señor PRESIDENTE: ¿Está conforme el portavoz en retirarla?

El señor JIMENEZ BLANCO: Sí.

El señor PRESIDENTE: Se da por retirada esta enmienda y rogamos al señor Senador que formule la enmienda «in voce».

El señor PEREZ PUGA: Muchas gracias. Consiste en añadir un párrafo a continuación para los funcionarios públicos, que diga: «... y para el personal civil de la Administración militar». (El señor Pérez Puga entrega la enmienda a la Mesa.)

El señor PRESIDENTE: Es parecida a la del señor Gamboa. Tiene la palabra el señor Pérez Puga para defender la enmienda.

El señor PEREZ PUGA: Consideramos que es importante esta matización que hacemos a la enmienda, toda vez que quedarían completadas las posibles limitaciones que se podrían producir en el desarrollo de esta norma constitucional en el ordenamiento jurídico, que lógicamente deben producirse desarrollando este precepto.

Nosotros sostenemos la tesis, en contra de las argumentaciones que aquí se han sustentado, de que determinados funcionarios al servicio de la Administración pública, bien sea la Administración civil o bien sea la Administración militar, tienen unas características peculiares que les llevan a que en nuestro ordenamiento constitucional se pueda restringir o modificar de alguna manera ese principio de la libertad sindical. Para nosotros, la libertad sindical pasa por el derecho de libre sindicación, pasa por la autonomía sindical y, en cierto modo, también por una pluralidad sindical. Recordarán los señores Senadores que estos principios se establecieron ya en el artículo 7.º, en el Título Preliminar, en el cual tanto las organizaciones sindicales de trabajadores como las asociaciones profesionales de empresarios se instalaban como piezas importantes de la organización del Estado.

Este precepto, que parecería a primera vista una redundancia y una duplicidad de lo que ya se estableció en el artículo 7.º, tiene una justificación, y es el desarrollo del derecho de sindicarse libremente. Este derecho de sindicarse libremente tiene unas connotaciones muy específicas, que aquí se han citado también, que pasan por el derecho de huelga y también por la negociación colectiva. La libertad sindical y el derecho de sindicarse libremente no son la simple incorporación a una entidad profesional, el derecho a participar o no, el derecho a formar coaliciones de carácter internacional o confederaciones nacionales, sino que pasan necesariamente por el derecho de huelga y por la negociación colectiva.

Pues bien, si esto es así, los funcionarios de la Administración del Estado, bien de la Administración civil o de la Administración

militar, deberán ser sometidos a unas normativas peculiares en función de las características que ellos tienen.

A nadie se nos oculta, y todos lo conocemos perfectamente, que el «status» jurídico del funcionario público no es la relación jurídico-laboral del trabajador por cuenta ajena. Su retribución viene fijada de distinta manera, su estabilidad en el empleo es permanente y no puede ser despedido, sino que ha de ser destituido. La responsabilidad de su función no sólo se incorpora al propio trabajo de la Administración, sino que genera consecuencias directas para el interés general y para la comunidad de los ciudadanos. Por tanto, no trata de restringir un derecho, sino de establecerlo en la justa medida en que él tiene que operar en su función. No es lo mismo prestar un servicio al Estado que a una empresa con ánimo de lucro. Las matizaciones podrían ser muchas y yo quiero hacer gracia a los señores Senadores de un relato que todos conocen, sobre todo algunos representantes muy especializados en estas materias.

Pero si esto es así para los funcionarios de la Administración civil del Estado, para los funcionarios de la Administración militar lo es mucho más. Esto no rompe la libertad y no afecta a los derechos fundamentales de la persona humana, sino que viene a poner a cada ciudadano en el papel y con las prerrogativas y las funciones que le corresponden en la sociedad.

No nos olvidemos que también se ha instalado, en el Título Preliminar de esta Constitución que estamos debatiendo, a las Fuerzas Armadas en el mismo título precisamente que a las organizaciones sindicales como piezas básicas de la organización del Estado, con una responsabilidad grande, también con un protagonismo importante. Lo que hay que tratar, en este caso, es de neutralizar políticamente a las Fuerzas Armadas y a las sometidas a la disciplina militar. La neutralidad de la Constitución tiene que ser total y absoluta, tiene que ser la máxima garantía para situar a estos funcionarios de la Administración civil en el ejercicio responsable, de grave responsabilidad, que tienen en la Administración militar. Todos conocemos hoy los

avances de la técnica que se han puesto de manifiesto cuando se ha hablado de la informática, de los procedimientos técnicos de autocontrol, las grandes posibilidades existentes de generalizar una serie de informaciones y conocimientos que pueden afectar de manera importante a la paz de los ciudadanos. Pues bien, estos ciudadanos no es que vayan a estar al margen de cualquier derecho o libertad fundamental que les reconoce la Constitución, sino que, exclusivamente en ese papel que juegan como funcionarios responsables de la Administración militar, tendrán unas peculiaridades en el desarrollo de determinadas libertades que vienen a garantizar esa independencia que tienen que tener en el ejercicio de su función.

Es muy significativo que la propia Organización Internacional del Trabajo, tantas veces citada (y que, como es omnicompreensiva para contemplar las situaciones más diversas no sólo de los Estados democráticos, sino de aquellos otros Estados del mundo que no han alcanzado esos niveles de democracia y de organización y de garantía de la libertad y de los derechos fundamentales, tiene que ser muy amplia y no puede matizar), diga de una manera expresa, en la discusión de la 64 reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo, que los empleados públicos, al igual que los demás trabajadores, gozarán de los derechos civiles y que se podrán poner condiciones en razón de la naturaleza del ejercicio de sus funciones.

Por tanto, nosotros consideramos que no se conculca ningún principio de libertad sindical, entendida en esa amplia dimensión que aquí se le concede, porque, si no, no tendría sentido establecer unos derechos y unos principios básicos en el Título Preliminar, en el artículo 7.º, y después la libertad de sindicarse para los trabajadores, si es que esto no se adecua a las específicas funciones que tienen los funcionarios públicos y, de manera muy peculiar, los funcionarios de la Administración militar.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Puga.

¿Para un turno a favor? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Gamboa.

El señor GAMBOA SANCHEZ-BARCAIZ-TEGUI: Únicamente para adherirme a las palabras que acaba de pronunciar el Senador señor Pérez Puga sobre los funcionarios civiles al servicio de la Administración militar, dada su peculiar función, que en muchas ocasiones llegan a estar en posesión de información de los Estados Mayores, porque hay mucho personal administrativo civil que presta servicio en los Estados Mayores, en las bases navales, en los hospitales, esto debe tener alguna peculiaridad especial en la ley.

El señor PRESIDENTE: Entiende la Presidencia que el señor Gamboa ha retirado su enmienda.

El señor GAMBOA SANCHEZ-BARCAIZ-TEGUI: No, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Había entendido que estaba adhiriéndose a lo expresado por el señor Pérez Puga.

El señor GAMBOA SANCHEZ-BARCAIZ-TEGUI: Es que mi enmienda tiene una parte primera que no está comprendida en la enmienda del señor Pérez Puga.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Villar Arregui.

El señor VILLAR ARREGUI: Para consumir medio minuto en decir que no se está tratando aquí de los funcionarios afectos a la Administración militar. La Administración militar, allí donde emplea obreros, lo hace a través de organismos autónomos que están regidos por la Ley de 1958, ley que distingue entre funcionarios de la Administración, funcionarios de organismos autónomos y obreros.

Lo que hemos pretendido excluir con nuestra enmienda es la limitación al ejercicio del derecho de libertad sindical que corresponde a esos obreros, que el pleno ejercicio de ese derecho contradiga o contravenga el deber del secreto profesional que, evidentemente, les afecta. Creo que no hay que confundir dos cuestiones harto distintas: el derecho de sindicación con el deber de secreto que afec-

ta, reitero, no sólo a los obreros que trabajan al servicio de la Administración militar, sino a todo trabajador por cuenta ajena, a todo funcionario público.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Vida.

El señor VIDA SORIA: Solamente para señalar que, según he oído —puedo estar equivocado—, la defensa de la enmienda del Senador Pérez Puga se ha referido a las peculiaridades de sindicación de los funcionarios públicos, tanto civiles como militares. Sin embargo, la enmienda se refería al personal civil no funcionario de la Administración militar; es decir, que parece que hay una disfunción entre la defensa realizada y el texto defendido.

En cualquier caso, quiero señalar que el señor Pérez Puga ha hablado de un párrafo del proyecto de Convenio elaborado en la 64 reunión de la Conferencia Internacional de Trabajo, pero no ha citado el artículo 7.º, donde dice: «Deberán adoptarse, de ser necesario, medidas adecuadas a las condiciones nacionales para estimular y fomentar el pleno desarrollo y utilización de procedimientos de negociación entre las autoridades públicas y competentes y las organizaciones de empleados públicos». Esto, por lo que se refiere a la sindicación de funcionarios.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Puga, para rectificar.

El señor PEREZ PUGA: En relación con la intervención del señor Villar Arregui, queremos decirle que entendemos que en la redacción de la enmienda «in voce» propuesta se distingue perfectamente cuáles son las relaciones de sindicación que deben tener los trabajadores de empresas militares o de organismos autónomos militares, reguladas por la Ley de 1958, que hoy aquí de alguna manera se vienen a constitucionalizar. No es el ánimo del Senador que habla tratar de limitar esos derechos.

Por otra parte, el derecho de secreto no sólo está en las disposiciones que regulan los deberes de los funcionarios públicos, sino también en el texto refundido de la Ley de

Contratos de Trabajo. Pero habrá que convenir que el secreto profesional establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos de Trabajo de 1944 no es el mismo que el secreto de los funcionarios públicos y no tiene el mismo rango ni la misma categoría que el secreto de aquellos que trabajan para la Administración militar.

Por lo que se refiere a las indicaciones del señor Vida Soria, he de decirle que nosotros entendemos que con este párrafo que pretendemos introducir se cubre a aquel personal de la Administración que no es el mismo exactamente que el de las empresas u organismos autónomos que podrían circular por el ámbito de aplicación personal de la disposición del año 1958 para el personal civil, sea o no funcionario. No vamos a entrar aquí en la denominación de funcionario, en la condición de funcionario de carrera, funcionario de empleo, funcionario sometido a relación laboral, etc., sino que nos referimos al término omnicomprendivo y con el carácter restrictivo de esta limitación, como todas las limitaciones, para el personal civil de la Administración militar. *(El señor Ramos Fernández-Torrecilla pide la palabra.)*

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ramos.

El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECI-LLA: Para retirar la enmienda 1.050, de mi Grupo. *(El señor Portabella Rafols pide la palabra.)*

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Portabella.

El señor PORTABELLA RAFOLS: No sé si éste es el momento, antes de entrar en las votaciones, pero pensábamos presentar una enmienda con el mismo texto de la que presentaron los Socialistas del Senado. No lo hicimos en razón de que ellos la presentaban. En vista de que la retiran, mi Grupo desearía mantenerla «in voce» y que fuera sometida a votación, en todo caso, en los mismos términos en que fue presentada por los Socialistas del Senado.

Quiero insistir en que siempre nos guía el deseo de evitar la presentación de muchas

enmiendas, para facilitar el trabajo de la Comisión, pero en ocasiones, no sólo en este caso, nos vemos remitidos a las enmiendas de otros Grupos.

El señor PRESIDENTE: La Presidencia admite la enmienda, pero la da por defendida.

El señor PORTABELLA RAFOLS: Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: En primer lugar, vamos a votar la enmienda número 294, del señor Bandrés.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 14 votos en contra y dos a favor, con seis abstenciones.

El señor UNZUETA UZCANGA: En virtud de la delegación concedida, el señor Bandrés desea convertirla en voto particular y nuestro Grupo, en principio, la apoya.

El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a votar la enmienda 1.096, del señor Monreal.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 20 votos en contra, con tres abstenciones.

El señor UNZUETA UZCANGA: Quiero decir exactamente lo mismo que en la enmienda anterior.

El señor PRESIDENTE: A continuación se vota la enmienda número 15, del Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes, modificada «in voce», por lo que la vamos a leer.

El señor SECRETARIO (Unzueta Uzcan-ga): Dice así: «Enmienda “in voce” del Grupo Progresistas y Socialistas Independientes. Adicionar el primer inciso de la enmienda con las palabras del texto del Congreso: “y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos”».

El señor VILLAR ARREGUI: Es que así no se entiende. ¿Se podía leer entera?

El señor PRESIDENTE: ¿Quedan impuestos los señores Senadores del contenido de la enmienda? (Asentimiento.)

Perfectamente. Si los señores Senadores comprenden el contenido de la enmienda número 15, vamos a pasar a votarla.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 13 votos en contra y cinco a favor, con cinco abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Villar Arregui mantiene su derecho para defenderla en el Pleno?

El señor VILLAR ARREGUI: Sí, lo mantengo.

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a votar la enmienda de Entesa dels Catalans, que tiene el texto idéntico a la del Grupo Socialista.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 13 votos en contra y siete a favor, con tres abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Portabella la mantiene?

El señor PORTABELLA RAFOLS: Sí, la mantengo.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la enmienda número 175, del señor Gamboa.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por ocho votos en contra, con 15 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Gamboa la mantiene?

El señor GAMBOA SANCHEZ-BARCAIZTEGUI: La mantengo para defenderla en el Pleno.

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a votar la enmienda 216, del señor Matutes.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 21 votos en contra, con dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Matutes la mantiene?

El señor MATUTES JUAN: Sí, la mantengo.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún señor Senador miembro de la Comisión la apoya?

El señor PEDROL RIUS: Yo, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la enmienda del señor Satrústegui.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por tres votos en contra y dos a favor, con 17 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Satrústegui la mantiene?

El señor SATRUSTEGUI FERNANDEZ: Sí, la mantengo.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún señor Senador miembro de la Comisión la apoya?

El señor VILLAR ARREGUI: Yo la apoyo.

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a votar la enmienda del señor Olarra.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 19 votos en contra y uno a favor, con tres abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Olarra la mantiene como voto particular?

El señor OLARRA UGARTEMENDIA: No, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a votar la enmienda número 461, del señor Xirinacs.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 19 votos en contra, con cuatro abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿Desea mantenerla el señor Xirinacs?

El señor XIRINACS DAMIANS: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún señor Senador miembro de la Comisión la apoya?

El señor PEDROL RIUS: Yo la apoyo, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: La siguiente enmienda, como es «in voce», la leerá el señor Unzueta.

El señor SECRETARIO (Unzueta Uzcanaga): Dice así: «Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos Armados o a los demás cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos y para el personal civil de la Administración militar. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato».

El señor PRESIDENTE: Vamos a votar esta enmienda «in voce».

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por siete votos en contra y tres a favor, con 13 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿Se mantiene para el Pleno?

El señor PEREZ PUGA: Sí, se mantiene, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún señor Senador miembro de la Comisión la apoya?

El señor JIMENEZ BLANCO: La apoyo, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar el texto del Congreso.

Efectuada la votación, fue aprobado el texto del proyecto por 10 votos a favor, con 13 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Vamos a continuar con el apartado 2 de este artículo. Figura, en primer lugar, una enmienda número 671, de la Agrupación Independiente, que en realidad no es tal enmienda, porque no formula ningún texto alternativo.

¿El señor portavoz de la Agrupación Independiente tiene texto alternativo?

El señor AZCARATE FLOREZ: Lo que tengo es el propósito de retirarla, que es mucho más sencillo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azcárate. Entonces pasamos a debatir la enmienda número 849, del señor Royo-Villanova, que tiene la palabra para defenderla.

El señor ROYO-VILLANOVA Y PAYA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, me ha movido a presentar esta enmienda observar cómo, en las explicaciones de voto sobre el contenido del derecho de huelga referido en este artículo 26, 2, las interpretaciones de los Diputados representantes del Partido Socialista y del Comunista en el Congreso diferían total, absoluta y radicalmente de la del representante de Unión de Centro Democrático.

En un tema como el de la huelga, de máxima trascendencia para la convivencia política, social y económica de un Estado, es absurdo redactar un artículo ambiguo que se presta a dos interpretaciones tan diametralmente opuestas por quienes lo han confeccionado y que, según fuese el criterio final del Tribunal de Garantías Constitucionales, cambiaría el contenido de la convivencia política y social en la España del futuro, según aceptase la interpretación de Unión de Centro Democrático o la del PSOE y PCE.

Aclaremos en el Senado el contenido del derecho de huelga y si incluye o no, como afirmó el portavoz de Unión de Centro Democrático en el Congreso, la huelga política.

La huelga, como recurso de equilibrio social, constituye un rasgo básico de las relaciones laborales en los sistemas de economía de mercado. La experiencia nos muestra que el progreso de estos sistemas resulta compatible con el fenómeno de las huelgas, siempre

que esté encauzado dentro de un régimen de limitaciones establecidas, precisamente para asegurar esa compatibilidad. El arma de la huelga es un instrumento vital para el quehacer de los sindicatos libres, típicos de las democracias industrializadas y hasta esencial para el buen funcionamiento de las relaciones laborales en esos sistemas.

Sin embargo, la experiencia empírica nos demuestra que la total libertad de huelga no resulta compatible con el buen funcionamiento de los sistemas de economía de mercado avanzada, ni tampoco con el de sistemas que, como el español, se encaminen hacia ese modelo real de organización económica, propia del mundo occidental.

La Constitución que estamos haciendo es la de un país europeo, englobado dentro de los países libres de Occidente, con los que aspira a integrarse más profundamente, y el conjunto de libertades y derechos que queremos para nuestros ciudadanos es el que gozan y disfrutan los de esas naciones.

Por ello, en base a un realismo político, he considerado fundamental contemplar la regulación constitucional del derecho de huelga en Inglaterra, Alemania, Bélgica, Holanda, Suecia, Francia, Noruega, Italia, Grecia, etc.; y, sobre todo, las orientaciones de la Carta Social Europea, la Convención Europea de los Derechos Humanos y las Resoluciones de la OIT, para acomodarnos a ese mundo que es y debe seguir siendo el nuestro.

El panorama que nos ofrece el Derecho comparado en la Europa occidental es el de un amplio reconocimiento de la huelga laboral como huelga-derecho y una prohibición, tácita o expresa, de la huelga política, salvo en la Constitución socialista portuguesa de 2 de abril de 1976.

Para no cansar a SS. SS., me voy a abstener de hacer el desglose, país por país, del tratamiento constitucional de la huelga, ya que un resumen del mismo viene recogido en el debate del Congreso sobre este artículo. Pero sí voy a referirme a la Carta Social Europea y a la doctrina de la OIT, por no venir recogidos en dicho debate.

La Carta Social Europea, aprobada en Turín el 18 de octubre de 1961, indica en su artículo 6.º —como ya ha explicado antes el Senador Satrustegui— que «para asegurar el

ejercicio efectivo del derecho de negociación colectiva las partes constituyentes se comprometen a respetar el derecho de los trabajadores y empresarios a acciones colectivas en caso de conflictos de intereses, con inclusión del derecho de huelga, a reserva de las obligaciones que pudieran resultar de los Convenios colectivos en vigor». Recordemos que la incorporación de la Carta Social Europea al Derecho interno de distintos países europeos es importante, especialmente en el caso de la República Federal Alemana.

El Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT ha efectuado una serie numerosa de decisiones sobre el derecho de huelga. Ofrecen, en 1978 y aquí en España, una referencia fundamental, en cuanto corresponden a lo que es el derecho de huelga en la realidad de los sistemas de economía de mercado avanzada. Así, la Decisión 292 especifica literalmente: «En la mayor parte de los países europeos se reconoce que el derecho de huelga constituye un derecho legítimo al que pueden recurrir los trabajadores y sus organizaciones en defensa de sus intereses profesionales».

La Decisión 293 señala: «El derecho de huelga de los trabajadores y sus organizaciones constituye uno de los medios esenciales de que disponen para promover y defender sus intereses profesionales».

La 300: «El Comité considera que las huelgas de carácter puramente político y las huelgas decididas sistemáticamente mucho tiempo antes de que las negociaciones se lleven a cabo no caen dentro del ámbito de los principios de libertad sindical».

La 302 especifica: «El Comité estima que la prohibición de huelgas que no revistan un carácter profesional, o que tienen por objeto ejercer presión al Gobierno en materia política, o que van dirigidas contra la política del Gobierno sin que su objeto sea un conflicto de trabajo, no constituye una violación de la libertad sindical». Y así, sucesivamente, las Decisiones 305, 306, 309, 311, 312, 313, 314, 317, 318, 322, 323, 328, 338 y 341.

Como resumen de la doctrina de la OIT, habrá de destacarse la exclusión de las huelgas políticas del ámbito de la huelga-derecho protegida por esa institución, el silencio de las huelgas mixtas (las que tienen finalidades

profesionales y políticas), que equivale a la exclusión anterior, y la reiterada atención a la prestación de servicios esenciales para la comunidad.

Podemos afirmar, pues, que la expresión «defensa de intereses profesionales» es la única utilizada por OIT, que la emplea una y otra vez como justificación del derecho de huelga, dejándose la interpretación de su alcance, en cada caso concreto, a los órganos competentes, como ocurre con casi todos los derechos y deberes regulados por una Constitución.

Existen numerosas clasificaciones de los tipos de huelga, pero me limitaré a seguir la de Martín Valverde, que las reduce a tres: primero, el modelo contractual, en el que el derecho de huelga sirve como instrumento de equilibrio de fuerzas en la negociación colectiva del trabajo; segundo, el modelo laboral, en el que la huelga es un medio de autodefensa colectiva en todos los aspectos de las relaciones de trabajo y, tercero, el modelo polivalente, o huelga política, en el que la huelga se concibe como un medio de expresión y acción directa de las clases trabajadoras en todos los ámbitos de la vida social.

En las dos primeras concepciones (modelo contractual y laboral), se parte de que el interés tutelado por el derecho de huelga es el interés profesional de una colectividad parcial dentro de la sociedad (los trabajadores de una empresa o de un sector), que contrasta con el de otra colectividad parcial (el empresario o grupo de empresarios), pero sin conexión con el ámbito de la sociedad global.

Se delimita como ámbito del conflicto obrero la empresa o el sector de producción, enfocándolo exclusivamente como «conflicto industrial» y no como manifestación estructural de la lucha de clases. Estas dos modalidades de huelga son las contempladas y admitidas por la OIT.

La tercera concepción, la huelga política, se define por el propio Martín Valverde como «medio de autotutela de los trabajadores en todos los ámbitos de la vida social en que se adoptan decisiones sobre sus intereses, y no sólo en el ámbito de las relaciones de trabajo». Esta huelga no tiene como destinatario únicamente la otra parte de la relación laboral, sino que puede ejercitarse «erga omnes»,

frente a todas las instancias del poder —Gobierno, Parlamento, etc.—, cuyas decisiones puedan afectar a los intereses de los trabajadores y no sólo frente al empresario.

Esta clase de huelga sirve para defender no sólo los intereses específicamente laborales, sino cualquier clase de reivindicaciones que afecten a los intereses de clase de los trabajadores, por ejemplo lucha por las reformas, política de viviendas, de transportes colectivos, exenciones fiscales, política económica, etc. La huelga política configurada como un derecho subjetivo público significa, sin más, la legalización de la lucha de clases, aunque sea por medios pacíficos; significa la anulación o mediatización de las instituciones de la democracia política (partidos políticos, elecciones generales, Cortes y Gobierno), como fuerza de presión respecto a la política que cualquier Gobierno o Parlamento, del color que sea, realice de conformidad con un resultado electoral que, en definitiva, es lo que ese pueblo, en esa coyuntura histórica, ha querido.

No pretendo ahora extenderme más, sino llamar la atención de SS. SS. al hecho de que, de no añadirse el adjetivo «profesionales» a los intereses protegidos por el derecho de huelga del artículo 26, 2, de la Constitución, limitando con ello claramente el ámbito del derecho de huelga a la huelga contractual y a la laboral, vamos a ser el primer país de Europa que reconozca constitucionalmente, de conformidad con la interpretación socialista, la huelga política, a excepción de la Constitución socialista portuguesa, que no parece sea precisamente el modelo más adecuado para España.

El señor PRESIDENTE: Le queda un minuto, señor Royo-Villanova.

El señor ROYO-VILLANOVA Y PAYA: Considero, pues, que la inclusión del derecho de huelga política en la Constitución nos haría entrar en el pequeño club de naciones que la admiten, compuesto exclusivamente por Portugal, Guinea y Méjico.

Señores Senadores, en el momento en que más necesita España de la paz social, de la estabilidad política y del afianzamiento de la economía para poder superar felizmente la

crisis económica y consolidar la democracia, la aceptación constitucional de la huelga política puede acarrear tal cúmulo de conflictos políticos, sociales y económicos que ojalá Sus Señorías no tengan que recordar este momento en años venideros.

Me llena de pesimismo, sobre el uso de este derecho, tal y como figura en su actual redacción, el abuso que estamos haciendo del Real Decreto de mayo de 1977, regulador de la huelga, que nos ha situado en cabeza, y con enorme ventaja, en volumen de huelgas laborales respecto del resto de Europa. Me llena de pesimismo la interpretación que hizo del artículo 26, 2, como reconocedor de la huelga política, el representante del Partido Socialista en el Congreso, idéntica a la interpretación personal que acabo de hacerles, que citaba además como ejemplo glorioso la huelga general francesa de mayo de 1968, e idéntica interpretación del representante del Partido Comunista y, por último, los acuerdos del PSOE, recogidos en sus dos últimos Congresos y en el documento ideológico de fusión del PSOE-PSP, de utilizar los movimientos de masas en la calle como complemento de la política parlamentaria.

Démonos cuenta, pues, de lo que estamos haciendo y no vayamos, en este punto vital de la convivencia política y social, a alejarnos del resto de los países del Occidente europeo, constitucionalizando la huelga política y aceptando, en consecuencia, la legalización de la lucha de clases.

Para evitarlo, ya que el espíritu de la Constitución no va por ese camino ni por la aclaración del voto representante de UCD en el Congreso, ése es el contenido que se pretendía en el acuerdo sobre su actual redacción, aclaremos que el ámbito que defiende la huelga es el de los intereses profesionales, expresión, como hemos visto, acuñada para el derecho de huelga por la propia OIT, de conformidad con la Carta Social Europea.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Royo-Villanova retira la enmienda de supresión o la hace alternativa con esta última de añadir la palabra «profesionales»?

El señor ROYO-VILLANOVA Y PAYA: He retirado la de supresión.

El señor PRESIDENTE: Como la enmienda del señor Royo-Villanova es igual a la del señor Cacharro y a la del señor Olarra, se van a debatir todas conjuntamente.

Tiene la palabra el señor Cacharro para defender su enmienda. (Pausa.)

El señor PEDROL RIUS: El señor Cacharro, que no está presente, ha delegado en mí y, por tanto, defiende su enmienda por los propios fundamentos expuestos.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olarra.

El señor OLARRA UGARTEMENDIA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, el reconocimiento de la huelga es un derecho que está admitido en la práctica en la casi totalidad de las naciones más progresistas y desarrolladas de Occidente.

La democracia no sólo es el derecho al voto y a nombrar la mayoría que gobierna un país, sino que afecta a otras muchas facetas de la vida y, por supuesto, a la de defender las reivindicaciones que se consideren justas. De ahí la necesidad de la huelga en determinadas ocasiones, aun teniendo en cuenta que la huelga en sí supone un hecho que no beneficia a la sociedad, al disminuir el nivel de producción del país, afectando a los mismos protagonistas de la misma, tanto a la empresa como a los trabajadores que ven, durante un periodo de tiempo, disminuidos o anulados sus ingresos.

Por ello, la huelga tiene que ser la «ratio» última a la que hay que recurrir, cuando las demás instancias han fracasado ya.

Las negociaciones previas son indispensables y, por ello, ésta es una práctica común y obligatoria en todos los países civilizados y desarrollados.

Estas premisas, sin lugar a dudas, son tan elementales que, en principio, no habría ni que enumerarlas, porque se dan por supuestas. Sin embargo, en estos últimos tiempos estamos asistiendo en España al triste espectáculo de las llamadas «huelgas preventivas», que son un instrumento de presión para obtener ventajas adicionales en el momento concreto de la negociación colectiva.

Si a este fenómeno añadimos la gran canti-

dad de huelgas desencadenadas en estos últimos tiempos en España por motivos políticos y sociales, que nada tienen que ver con las empresas, comprenderemos por qué tenemos el triste honor de figurar a la cabeza de los países de la OCDE en cuanto a número de horas de trabajo perdidas por persona. Hasta fechas recientes, existía el pretexto de que no había en España libertades políticas y que, por lo tanto, había que utilizar a las empresas como campo de batalla para alcanzar objetivos políticos. De ahí que las empresas hayan constituido un auténtico yunque en el que iban a estrellarse toda clase de reivindicaciones políticas y sociales. Cuántas veces hemos tenido que escuchar la misma explicación de que determinadas huelgas no iban contra la empresa, sino que eran una manifestación de protesta contra un sistema político.

Pues bien, todas estas razones han desaparecido ya. El pueblo español puede ejercer su plena soberanía y nombrar sus representantes en el Parlamento, en donde, al existir auténtico pluralismo ideológico, deben someterse a debate las más variadas facetas de la vida nacional.

En los próximos meses elegiremos a nuestros legítimos representantes en los municipios, provincias o regiones y con ello habremos avanzado o culminado la tarea democrática.

Nos parece muy sospechoso el querer mantener como norma de rango constitucional el derecho a la huelga por razones que no sean estrictamente profesionales. Es sospechoso y antidemocrático, porque proporciona a determinados grupos políticos, que no pueden conseguir la mayoría en las urnas, una auténtica arma de presión para imponerse a esa mayoría utilizando la paralización de la estructura productiva del país, el malestar social y la algarada callejera.

Malos vientos correrían para nuestra incipiente democracia si es utilizado este recurso de la huelga como instrumento político y, por ello, los legisladores tenemos la obligación moral de prevenirlo, no aceptándolo en una norma de rango constitucional. No nos rasguemos falsamente las vestiduras y cerremos los ojos ante la realidad de estos últimos años y del momento actual, ya que la huelga por motivos políticos se ha producido y se está

produciendo en el país y es una auténtica espada de Damocles que pende sobre todos.

Pero la huelga política no sólo resulta nefasta para el porvenir del sistema democrático, sino que es gravemente perjudicial para la estructura productiva y para el nivel de vida del país. En estos últimos tiempos parece haberse olvidado algo tan elemental como es el concepto de productividad, que resulta la clave del arco de cualquier sistema económico. Nadie se preocupa en concienciar al país de que los futuros logros sociales sólo pueden conseguirse con incrementos mayores de la productividad. Es cierto que hemos cruzado el umbral de nación desarrollada, o casi desarrollada, pero nos queda aún un largo camino por recorrer. Hemos de tener muy en cuenta que en el año 1975, si la productividad general del sistema económico español la comparáramos con un índice igual a 100, la de la media de la Comunidad Económica Europea era 150 y en algunas naciones como Francia llegaba a 180. En la República Federal Alemana a 225 y en el caso de Estados Unidos a 250.

Desde el año 1975, la productividad permanece en España estancada y los salarios han experimentado crecimientos importantes, lo cual ha supuesto profundas modificaciones estructurales y auténticas descapitalizaciones empresariales que, desgraciadamente, a la postre transformarán en espejismo muchas de las mejoras sociales obtenidas.

Solamente se puede evitar este peligro si somos capaces de dotar a las empresas de una mayor estabilidad social, de impulsarlas a nuevos planes de inversión, de mejorar sus estructuras productivas y de conseguir un más alto nivel tecnológico. Todo esto exige un clima de confianza y de estabilidad que se rompe trágicamente con la huelga política y con la algarada callejera.

Sigamos el ejemplo de los países más prósperos del mundo, en donde la huelga se utiliza «in extremis» y solamente por motivos profesionales. Vayamos por el camino de lograr una comunidad próspera y libre, huyendo de la sociedad conflictiva y pobre en donde la misma libertad termina siendo coartada. Ejemplos tenemos suficientes y están a la vista de todos y muy próximos,

Por ello, propongo la modificación en el sentido de la enmienda presentada.

El señor PEDROL RIUS: Para una cuestión de orden, señor Presidente. Antes he oído que se iba a discutir la enmienda del señor Cacharro y la del señor Carazo, pero sólo he oído que se invitaba a la defensa de la del señor Cacharro. Al no haber hablado del señor Carazo...

El señor PRESIDENTE: En su momento, señor Pedrol, daremos la palabra al señor Carazo para este tema.

¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? Tiene la palabra el señor Pérez Puga.

El señor PEREZ PUGA: Después de las intervenciones sobre este tan controvertido párrafo 2 del artículo 26, en primer lugar pretendo hacer una puntualización en relación con la enmienda formulada por el señor Royo-Villanova, compañero de Grupo Parlamentario.

Se pone en evidencia, aunque pudiera parecer una contradicción, una intervención del señor Royo-Villanova con la actitud que va a adoptar colectivamente el Grupo. Esto viene a poner de manifiesto muy claramente el sentido de democracia interna de nuestro Grupo Parlamentario, en donde los miembros que lo componen tienen libertad para mantener la defensa de aquello que consideran ellos adecuado, que consideran oportuno y que, sin llegar a la cláusula de conciencia, consideran que deben defender.

Como se trata de un artículo trascendental, el Grupo no sólo ha ratificado y avalado este derecho del señor Senador, sino que de alguna manera, en el fondo, está identificado con el tema, pero queremos clarificarlo.

La enmienda del señor Royo-Villanova trata de incluir las palabras «intereses profesionales» para establecer una delimitación correcta y exacta de lo que pudiera significar el trasladar este fenómeno de la huelga, este hecho de la huelga, que quizá más que un derecho, como decía Carnelutti en estos tres tomos sobre la huelga, es un hecho sociológico, aunque tiene connotaciones jurídicas por ser un hecho volitivo y querido, pues in-

dudablemente viene a replantearnos este gran tema de tratar de encajar este derecho de los trabajadores para modificar sus condiciones de trabajo por medio de la presión, a través de la coalición o de la organización en sindicatos y restablecer esa armonía laboral que ellos pretenden, pero que, sin duda, cuando estas huelgas proliferan, cuando estas huelgas trasvasan este campo más o menos estricto de las relaciones laborales y pueden afectar a los fines fundamentales del Estado y distorsionar el ordenamiento jurídico total.

De ahí que convendría precisar que las huelgas que alcanzasen este nivel, que afectarían a la propia entidad de la Constitución y que pudieran subvertir el orden constitucional, indudablemente deberían ser prohibidas y postergadas. Pero entendemos que éste no es el caso. Creemos que llegar, no a esa sutileza jurídica, sino a esa definición clara y concreta de lo que es una huelga que va a subvertir y a afectar a fines del Estado, y por tanto al ordenamiento constitucional, y esa otra huelga legítima, esa otra huelga profesional, esa otra huelga necesaria en esta economía de mercado para restablecer y poder actuar con mayor equidad en las relaciones laborales, difícilmente se podría instalar en un texto constitucional.

Nuestro texto constitucional hay que contemplarlo, como ya el señor Herrero de Miñón puso de manifiesto en el debate del Congreso, no sólo a la luz del artículo 26, apartado 2, sino también, como hemos dicho ya aquí, a la luz del artículo 7.º, en donde se habla de la libertad de constituir asociaciones sindicales y también empresariales para la defensa de los intereses económicos y sociales que le son propios.

Indudablemente, el legislador, cuando tenga que desarrollar los preceptos que han de regular la huelga, en caso de que lo haga, o el Tribunal Constitucional cuando tuviera que definir si unos actos determinados afectan al orden constitucional, o por el contrario están legitimados, tendrán que referirse, necesariamente, a estos dos preceptos que hemos citado y seguramente, si se mantiene, al apartado correspondiente del artículo 33.

Nosotros entendemos que el compromiso de las organizaciones sindicales y empresariales de formar parte de la organización básica

del Estado como pieza de esa arquitectura que es la Constitución tiene una autolimitación, y es que no puede afectar a los fines del Estado. Por otra parte, al hablar de la defensa de sus intereses, se da por sentado que sus intereses son los intereses económicos y sociales, también llamados, quizá mejor, profesionales, que van a ser los que van a suponer una limitación de esta última «ratio» que podría ser una huelga desencadenada con fines no estrictamente de encontrar la armonía en esas relaciones industriales.

Todo esto, por otra parte, también tiene que estar muy relacionado, y aquí se dijo de alguna manera por el señor Olarra, con la fórmula de solución de estos conflictos colectivos de trabajo. Aunque se pretenda hacer una distinción entre conflicto colectivo y huelga, realmente sería más bien una disquisición doctrinal. Pero nosotros entendemos que las formas que se adopten en su momento para resolver estos conflictos (la gestión directa, la mediación, el arbitraje libremente aceptado, la conciliación libremente aceptada por las partes) serían unos mecanismos importantes que ya se pusieron de manifiesto en el primer Congreso Iberoamericano, celebrado precisamente en Madrid, en donde está contemplado el hecho de la huelga como fórmula de solución.

Esas huelgas de que se habla en este país, esas huelgas preventivas a que se refería el señor Olarra, todo ese marasmo entendemos que arranca de que el texto constitucional no está aprobado, no se ha tomado conciencia política y social del alcance que deben tener las huelgas y tampoco se han desarrollado esos mecanismos libres y democráticos, pero realmente eficaces para la oposición de esas situaciones de conflicto que se producen.

Por último, queremos decir que este precepto de la ley tiene también una garantía importante, o que o bien ha pasado inadvertida o se les ha olvidado a quienes en un momento u otro han entrado en la controversia de este artículo, y es el párrafo último que dice: «La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad». Aquí es donde puede estar la clave de esa justa limitación del alcance de la huelga para que no subvierta el

orden social, para que no afecte a los fines propios del Estado y también para que garantice de manera clara y rotunda esos efectos muchas veces no queridos, pero directamente afectados, relativos a los servicios esenciales en la comunidad.

Por tanto, yo querría decirles a los señores Senadores Royo-Villanova y Olarra que entendemos que aquí no se constitucionaliza la huelga política. Si así fuera, Unión de Centro Democrático votaría rotundamente en contra de este precepto, pero creemos que tal y como están establecidos estos preceptos se refieren a la huelga profesional.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Puga.

¿El señor Royo-Villanova desea hacer uso de la palabra para rectificar?

El señor ROYO-VILLANOVA Y PAYA: No, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Olarra desea rectificar?

El señor OLARRA UGARTEMENDIA: Sí, señor Presidente.

Yo comprendo y entiendo perfectamente los argumentos del señor Senador Pérez Puga. Si cuanto ha dicho resultara así, yo me daba por satisfecho. Pero es cierto, como decía el señor Royo-Villanova, que en los propios debates del Congreso se establecieron otros precedentes; se plantearon cuestiones en las que se dejaba claro que la huelga política había de tener cabida, y se pusieron ejemplos.

Yo me pregunto (y es lógico que si la huelga política se institucionaliza UCD no estuviese de acuerdo, si verdaderamente contemplamos la huelga por motivos puramente profesionales, qué razón puede haber para que el término «profesionales» no se incluya en el artículo o en el párrafo, si con ello no vamos a alterar ninguna de las otras posibilidades, si con ello no vamos a restringir la posibilidad de la huelga por motivos profesionales, sino, al contrario, lo que vamos a hacer es delimitarla y concretarla.

Yo me atrevo a decir que sí, realmente, ese término no se incluye, va a ser objeto de muchos problemas en tiempos venideros. Tengo

que decir que en estos momento en los que estamos hablando de la falta de inversión, del paro, de la falta de puestos de trabajo para la juventud, que no encuentra empleo, que si este artículo queda así muy pocas inversiones va a haber, muy pocos puestos de trabajo se van a crear, y esos problemas de los cuales nos quejamos se irán acrecentando sin duda.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a discutir las enmiendas números 294 y 461, de los señores Bandrés y Xirinacs.

El señor XIRINACS DAMIANS: Retiro mi enmienda, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Como quiera que el señor Bandrés no está en la sala, el señor Unzueta tiene la palabra para defender su enmienda.

El señor UNZUETA UZCANGA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, por las mismas razones expresadas anteriormente, ante la imposibilidad material de que el señor Bandrés haya podido llegar, defiendo la enmienda por sus propios fundamentos.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

Pasamos a la enmienda número 15, del Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes. El portavoz del citado Grupo tiene la palabra para defender su enmienda.

El señor VILLAR ARREGUI: Señor Presidente, sólo dos palabras, una para entrar, desde nuestro punto de vista, en el interesante debate que se ha desarrollado sobre la especificación de la naturaleza de los intereses de los trabajadores que puede dar origen al derecho de huelga que este precepto constitucionaliza.

La postura restrictiva, brillantemente defendida por el Senador señor Royo-Villanova, yo diría que de algún modo amenazadoramente mantenida por el Senador señor Olarra, excluye, al parecer, que la defensa de los derechos de los trabajadores pueda obedecer a intereses que no sean estrictamente profesionales.

Sí pienso que el artículo excluye el derecho a la huelga revolucionaria, y tal vez el mejor argumento que se me ocurre para mantener esta tesis sea el texto, recientemente aprobado por esta Cámara, mediante el cual se adicionó al artículo 10 del proyecto de Constitución elaborado por el Congreso un número 2 con arreglo al cual cuantos derechos y libertades fundamentales se consagran, se reconocen o se garantizan en el proyecto de Constitución han de ser interpretados a la luz de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y de los demás acuerdos o tratados ratificados por España en materia de derechos humanos. Así, pues, no sería nuestro país un islote en el concierto de un contexto geopolítico donde los derechos que aquí se proclaman son interpretados o ejercidos con arreglo a una finalidad diversa.

Pero no es sobre este tema sobre el que versa nuestra enmienda. Nuestro Grupo entiende que la expresión utilizada en el último inciso del número 2 del artículo 26, concretamente «... asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad», es una expresión demasiado ambigua y, anticipándose a lo que más tarde había de ser una posición ampliamente compartida por los miembros de la Comisión, sugirió en su enmienda la introducción de una expresión empleada, por ejemplo, en el artículo 11 de la Convención de Salvaguarda de Derechos del Hombre y Libertades Fundamentales, suscrita en Roma en 1950.

Concretamente, la propuesta que nuestro Grupo formula se ciñe a solicitar la sustitución del segundo inciso del párrafo 2 del artículo 26 por la siguiente frase: «La ley habilitará los medios necesarios para prevenir y reducir los perjuicios que el ejercicio de este derecho pueda ocasionar en el funcionamiento de los servicios públicos indispensables en una sociedad democrática».

Los señores Senadores que me hacen el honor de escucharme y son profesionales del Derecho conocen bien el juego jurisprudencial que ha dado la figura del buen padre de familia como paradigma acuñado por el Derecho civil en referencia a determinadas conductas. Se echan en falta paradigmas análogos en el Derecho público y, sobre todo, en la situación española en que la Constitución marca un

hito fundamental o, si se prefiere, la frontera que separa a un régimen autocrático de un régimen democrático.

Pienso que traer a este texto paradigmas acuñados en viejas democracias consolidadas puede ser un elemento enormemente positivo a la hora de la interpretación del texto por el Tribunal Constitucional o por aquel de los poderes públicos a quien su interpretación o su aplicación compete.

Añadiría, por último, que el empleo de un lenguaje internacional en este texto puede contribuir a la convergencia de criterios entre los miembros de la Comisión, incluyendo en ellos al señor Royo-Villanova, puesto que se acerca más, se aproxima más en el texto a lo que en materia de huelga o en materia de sindicación han venido a establecer aquellos pactos.

Defendemos, por tanto, la inclusión de un paradigma de Derecho público, que sería el de los servicios indispensables en una sociedad democrática. Hago gracia a los señores Senadores acerca de qué pueda entenderse por ello, pero es obvio que ahí la imaginación se abre a una serie de servicios cuyo mantenimiento debe compatibilizarse con el legítimo ejercicio de una serie de derechos.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno a favor? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Vida Soria.

El señor VIDA SORIA: Quisiera anunciar que hemos reservado el uso de la palabra en este último turno para resumir un poco nuestra posición respecto al conjunto de las enmiendas.

El señor PRESIDENTE: Quedan dos enmiendas más, señor Vida, las de los señores Carazo y Cela.

El señor VIDA SORIA: En cualquier caso, hemos considerado oportuno hacer el resumen ahora, digo, para ahorrar tiempo en este debate, siguiendo las instrucciones y deseos manifiestos de la Presidencia.

Frente al grupo de enmiendas que se han presentado al apartado 2 del artículo 26 nosotros pensamos que se han levantado, una

vez más, los fantasmas, sobre todo el fantasma de la desconfianza. Decía hace unos días aquí el profesor Sánchez Agesta que el reconocimiento de derechos en la Constitución cobraba su último significado cuando estos derechos se niegan por la realidad y entonces hay que empezar a pedirlos a nivel constitucional. Y ponía el ejemplo del derecho a respirar.

En este caso, respecto al derecho de huelga, yo añadiría algo a esta brillante y bonita idea del profesor Sánchez Agesta. Se trata ahora no sólo de reconocer un derecho que se niega por otro sector de la sociedad, sino de admitir e integrar en el ordenamiento jurídico un derecho que no hay más remedio que reconocer: el derecho a la huelga. Ahora bien, en los sectores más reaccionarios del país el reconocimiento del derecho de huelga es realmente escandaloso y desencadena inevitablemente reacciones de defensa como las que aquí acabamos de oír, incluso en un sentido amenazador.

Estas reacciones de defensa, estas reacciones de desconfianza frente a la constitucionalización del derecho de huelga, están extraordinariamente claras en el conjunto de las enmiendas que tenemos a la vista, enmiendas que, con independencia de que hayan sido o no retiradas o defendidas, se pueden agrupar en cuatro órdenes.

Hay una enmienda muy concreta, que defiende el profesor señor Ollero, relativa a la ordenación sistemática de este derecho constitucional de huelga, alegando que no se puede reconocer un derecho a no trabajar antes de haber reconocido el derecho a trabajar. Esto supone, quizá, una falta de conocimiento o de atención sobre cuáles son los elementos o las materias concretas que se regulan en los artículos 33 y 26. Ahorro a la Comisión las consideraciones sobre el tema, aunque podamos volver sobre él más adelante.

El resto de las enmiendas se concretan en tres puntos fundamentales. Hay una enmienda que, a la hora de no tener más remedio que reconocer el derecho constitucional a la huelga, lo conecta inmediatamente con el derecho al cierre patronal o «lock-out», procedimiento pintoresco por cuanto que no es de uso común en ningún país civilizado, y en cualquier caso el reconocimiento del derecho

al «lock-out» por parte de los empresarios vendría a neutralizar y, en consecuencia, a suprimir materialmente el derecho de huelga reconocido constitucionalmente.

Otras enmiendas, con bastante más despropósito y desconocimiento del tema, intentan conectar el derecho constitucional a la huelga con un derecho al libre despido de los trabajadores, olvidando que el libre despido de los mismos está institucionalizado en el Derecho español y que va a seguir estándolo; pero desde luego lo que no va a haber ni hay en ningún país es el despido gratuito de los trabajadores. Una cosa es despedir libremente a los trabajadores y otra despedirlos gratuitamente.

Finalmente, viene el famoso tema de la palabra «profesionales». A mí me ha servido de mucha instrucción lo que acabo de oír aquí. He oído a un Senador real, sin representación popular de ningún tipo, un Senador real que va a desaparecer dentro de poco, cuando la Constitución se apruebe, que amenazaba con que como este artículo se apruebe así va a producir una desinversión o una retracción de la inversión en la economía privada española. Tomamos nota de la amenaza y nos encargaremos de que la gente lo sepa.

Por otra parte, he oído una referencia al «Diario de Sesiones», a las discusiones que se celebraron en el Congreso de los Diputados, sobre la interpretación que éstos daban a la discusión entre intereses profesionales o intereses pura y simplemente. Yo tengo que decir que, o he leído mal, o lo que aquí se ha dicho no es exactamente lo que está escrito en el «Diario de Sesiones» del Congreso. El único que defendió en el Congreso de los Diputados que el mantener la palabra «intereses» sólo posibilitaba el ejercicio de una huelga política en el sentido mismo de la palabra fue el señor Fraga; los demás Diputados vinieron todos a mantener una postura parecida a la que aquí ha mantenido el señor Pérez Puga.

Respecto al tema de la adición o no de la palabra «profesionales», quería manifestar simplemente una cosa. Dice el señor Olarra: si la palabra «profesionales» no aporta nada, ¿por qué no la ponemos? Y yo digo: si no aporta nada, ¿por qué la metemos? Si ante una frase ya consagrada por el Congreso de

los Diputados para la defensa de sus intereses se quiere introducir ahora el término «profesionales», es porque detrás de «profesionales» viene algo: viene la desconfianza. Y lo que yo quiero precisamente es que no haya desconfianza.

Quisiera llegar a convencer a los señores Senadores que me escuchan de cuál es el último significado de la constitucionalización del derecho de huelga y acabar así con su desconfianza. La constitucionalización del derecho de huelga es una enorme concesión que la clase obrera hace a la burguesía, una vez que admite y propugna su integración en el ordenamiento jurídico.

La huelga, como ha dicho el señor Pérez Puga, es un hecho; esté o no en la Constitución, se va a ejercer. En el contexto de una Constitución con libertades públicas y personales nadie podría ir contra el ejercicio libre de un derecho de huelga que consiste simplemente en no trabajar. Aceptar por parte de la clase obrera, e incluso propugnar, que el derecho de huelga se constitucionalice es una manifestación clara de la madurez del movimiento obrero, ya que integra su arma principal —el derecho de huelga— dentro del ordenamiento jurídico, a sabiendas de que de esa manera el ejercicio de su derecho a la huelga va a estar limitado por el conjunto del ordenamiento jurídico.

Ni siquiera tendríamos que poner «intereses»; con sólo poner la palabra «huelga» en el texto constitucional ya introducimos el derecho de huelga en el ordenamiento jurídico.

Repito que eso es un fenómeno de colaboración, una manifestación de colaboración, de madurez del movimiento obrero frente a posibles acciones que serían, desde luego, para el movimiento obrero mucho más fáciles si no estuviese su fenomenología...

El señor PRESIDENTE: Le recuerdo el tiempo a Su Señoría.

El señor VIDA SORIA: ... O su dinámica integrada en este ordenamiento jurídico. No vayamos a colarnos ahora con la desconfianza y volvamos a lo que dije antes: a poner puertas al campo y a mantener un texto constitucional que vaya a ser violado sistemáticamente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Puga.

El señor PEREZ PUGA: En primer término, para formular una puntualización al señor Villar Arregui en relación con la enmienda formulada.

Entendemos que el texto del anteproyecto es mucho más clarificador y que la propuesta del señor Villar Arregui —y no pretendo entrar en una polémica jurídica en donde él tendría notorias ventajas sobre el que habla— no trata tanto de habilitar los medios necesarios para prevenir o reducir las consecuencias de esto, sino que más bien trata de que la ley regule el ejercicio de este derecho en función de la salvaguarda de esos intereses esenciales de la comunidad.

No querríamos aventurar que si se redactara el precepto como el señor Villar Arregui propone —aunque, sin duda, no es ésa su intención— se modificaría lo que nosotros pretendemos instalar en el texto constitucional. Se sustituiría un derecho con unas determinadas limitaciones por un derecho inalienable, como algunos han pretendido a través de la doctrina jurídico-laboral, estableciendo así un derecho de huelga que no ha sido querido por el legislador.

En cuanto a lo que aquí se ha dicho en relación con el tratamiento propuesto por los distintos señores Senadores que han formula enmiendas al texto constitucional, querría puntualizar algunas cosas. En primer término, que las enmiendas que se han formulado han sido muy concretas. Las primeras se refieren a introducir la palabra «profesionales». Creo que estaban en su derecho de hacerlo como Senadores, dado el mandato constitucional que todos tenemos. Yo no me atrevería en este momento a hacer ninguna discriminación sobre este tema, porque todos estamos legitimados para actuar parlamentariamente y es un derecho el hacerlo.

Tener ciertas reservas sobre el tema que nos ocupa es, sin duda, una respuesta a un fenómeno sociológico que estamos contemplando, no sólo en nuestro país, sino en otros países en donde tienen legitimado constitucionalmente el derecho de huelga, cuya integración en el orden constitucional no aceptan algunas centrales sindicales, algunos trabaja-

dores espartaquistas, quienes están alterando de alguna manera los fines propios del Estado, como antes he dicho.

Otra cosa es que nosotros abogemos por ello, porque creemos que favorecerá a la colectividad del país, al Estado, y que no es una concesión propia del movimiento de trabajadores, sino una consecuencia del fenómeno de incorporación de todas las fuerzas políticas y sindicales del país para configurar un Estado y para hacer una distribución de las funciones del mismo y así poder establecer unos sistemas de convivencia a la altura del tiempo en que vivimos.

Por otra parte, no creo que aquí se haya producido ninguna amenaza con el efecto o consecuencia de la desinversión. Quizá sea un argumento de última fuerza para pretender implantar el término «profesionales». Pero creo que, aunque nosotros incluyéramos dicho término en este artículo, en absoluto se alteraría. No obstante, como no voy a reiterar los argumentos anteriormente aducidos por el Senador que habla, hago gracia de ello.

En cuanto a las otras enmiendas que se han formulado, una de ellas se refiere al derecho a trabajar, al derecho al trabajo, que debía situarse con anterioridad a estos preceptos. Me parecen un desenfoque del problema, toda vez que el derecho a trabajar es una obligación moral de todos los ciudadanos que nada tiene que ver con la interrupción del contrato de trabajo como consecuencia de una huelga. Por otra parte, tratar de relacionar el despido libre con el fenómeno de la huelga no es correcto, porque la contrapartida, en caso de que existiera o debiera existir el derecho de huelga, no sería el despido libre —y en ningún caso gratuito—, sino que en cierta manera serían esas medidas colectivas, muy relacionadas con el «lock-out», a que se refieren los textos de la Carta Social de Europa, a la que ha aludido de una manera elocuente y ponderada el señor Satrústegui.

En resumen, nosotros vamos a defender el texto del proyecto, ya que lo consideramos positivo, no sólo porque enriquece el texto constitucional, sino porque habrá de suponer un avance importante en esa paz social, en ese pacto social al que todos pretendemos llegar.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Puga.

El señor OLARRA UGARTEMENDIA: Señor Presidente, ¿puedo intervenir por alusiones?

El señor PRESIDENTE: Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.

El señor OLARRA UGARTEMENDIA: Voy a ser breve. Se han dicho varias cosas por parte del Senador señor Vida. Una de ellas era: «... un Senador real va a desaparecer dentro de poco». Supongo que eso lo decidirá la Constitución y el pueblo, no el señor Vida.

En segundo lugar, se ha referido a mis amenazas. Yo solamente he constatado una situación. He dicho que eso ocurre, que está ocurriendo, no sólo en la mentalidad de los empresarios, a los que más o menos sibilina-mente se refería el señor Vida, sino con relación al propio ahorro del país. Las gentes que han de aportar sus ahorros a la inversión tienen grandes incertidumbres en este momento, desconfían, y yo vuelvo a insistir en los mismos términos: este propio debate nos está demostrando a todos que no incluir ese término lleva consigo o detrás de sí alguna razón última. Cuando se conozca cuál ha sido el debate, me atrevo a decir que, si ese término no se incluye, la desconfianza será mayor que antes de empezar a debatir el artículo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarra. ¿Quiere hacer uso de la palabra el señor Villar para rectificar?

El señor VILLAR ARREGUI: Renuncio, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación se pasa a discutir la enmienda 150 del señor Cela, quien tiene la palabra.

El señor CELA Y TRULOCK: Señor Presidente, con el apoyo, o al menos con la tolerancia del árbitro, han vuelto a dejarme en «off-side». Retiro la enmienda.

El señor PRESIDENTE: Señor Cela, el árbitro no ha tenido tolerancia alguna, sino que

se ha limitado a ceder a los Senadores la palabra en uso del derecho de éstos en el turno correspondiente. Si el señor Cela hubiera intervenido, podían después haberle contestado también los portavoces.

El señor CELA Y TRULOCK: Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a la enmienda número 226 del señor Carazo.

El señor PEDROL RIUS: Ausente el señor Carazo, y encargado por él de la defensa de su enmienda, la sostengo, para no producir indefensión, con sus propios fundamentos.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno a favor? (Pausa.) ¿Algún turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

Pasamos a votar las enmiendas números 238, del señor Satrústegui, y 226, del señor Carazo, ya que ambas pretenden que este precepto vaya al artículo 33.

El señor SATRUSTEGUI FERNANDEZ: Yo he hecho una propuesta de supresión. Me parece que tengo derecho a razonar por qué pido la supresión.

El señor PRESIDENTE: ¡Pero si ya la ha razonado el señor Satrústegui en la anterior defensa!

El señor SATRUSTEGUI FERNANDEZ: Pero se han producido hechos después y estamos ahora en el caso del punto segundo.

El señor PRESIDENTE: Daré la palabra al señor Satrústegui para rectificar por los hechos nuevos, pero no para defender nuevamente la enmienda, porque ya la ha defendido. A tal efecto, tiene Su Señoría la palabra.

El señor SATRUSTEGUI FERNANDEZ: Yo no sé lo que significa en este momento la palabra «rectificar».

El señor PRESIDENTE: Contestar a las alusiones o a las respuestas que a la enmienda del señor Satrústegui puedan haberle hecho otros señores Senadores.

El señor SATRUSTEGUI FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.

Hago uso de la palabra después de haber constatado, con tristeza, pero con esperanza, que mi propuesta al apartado 1 ha sido desestimada, propuesta que no tenía más carga que la de equiparar los derechos de los empresarios a los de los trabajadores. A ambos derechos se refiere el artículo 7.º del proyecto del Congreso, como ha dicho el señor Pérez Puga. Pero si luego hay un artículo que se refiere a los sindicatos y no se aclara más, pero se entiende que se refiere a los trabajadores, puesto que luego habla de la huelga, lo lógico es que cuando nos refiramos a los derechos de los trabajadores nos refiramos también a los derechos de los empresarios.

Yo no puedo ser sospechoso en esta materia; todas las persecuciones de que he sido objeto han ido ligadas a mi defensa del derecho a la sindicación de los trabajadores. Eran momentos en que ciertamente no había que defender el derecho de los empresarios, los cuales tenían sus libertades económicas perfectamente garantizadas de hecho y, en cambio, los trabajadores no.

Durante muchos años yo he sufrido persecuciones por defender esos derechos de los trabajadores, pero cuando llega el momento de establecer la democracia hay que poner las cosas en su punto y recordar que, si los trabajadores tienen derecho a sindicarse, los empresarios lo tienen a asociarse. Y no veo razón alguna para que en este artículo que se refiere al derecho de sindicación no se añada también el derecho de los empresarios a asociarse.

Yo comencé mi vida política (y ahora voy directamente al número 2) por una huelga política. Al día siguiente del triunfo del Frente Popular, siendo yo un muchacho de veintiséis años, dirigente de una pequeña empresa de construcción, recibí la visita conjunta de los representantes en mi empresa de la CNT y la UGT. Pretendían que nosotros obligáramos a unos obreros que estaban afiliados a un sindicato cristiano a dejar ese sindicato. Yo les adelanté que ello no era posible; di cuenta a mis compañeros de esa pequeña empresa y decidimos que antes se cerraría ésta que someternos por una coacción contra el derecho de sindicación libre. Con esto comen-

zó la famosa huelga de la construcción de Madrid, que se inició en mi empresa, huelga que prácticamente no terminó nunca y cuyos resultados ya saben ustedes, desgraciadamente, los que fueron. De manera que es muy importante aclarar que las huelgas políticas no están constitucionalizadas.

Yo no estoy de acuerdo con el señor Vida en que en la Constitución no hay que concretar. Sí que hay que concretar. Hay unas huelgas que, efectivamente, todos los progresistas de cualquier signo aceptan: son las huelgas por motivos laborales.

Ya he leído el texto correspondiente de la Carta Social Europea, pero voy a leerlo otra vez, porque es muy corto. El número 4 del artículo 6.º dice: «Se reconoce el derecho de los trabajadores y de los empresarios a acciones colectivas en caso de conflicto de intereses, incluido el derecho de huelga, condicionado a las obligaciones que pudieran resultar de los convenios colectivos en vigor». Se refiere, naturalmente, a relaciones laborales.

Nadie más que yo desea que la UCD y el PSOE acierten en la política española. Yo no me quedaré tranquilo hasta que presencie un cambio de gobierno, que no sé si deseo que sea pronto o lejano, pero deseo verlo, en el cual realmente los socialistas estén en el poder, como lo están en Alemania Federal y en Inglaterra, y que luego esté la Unión de Centro Democrático, o el partido que deba estar. Pero eso no será posible si el socialismo no acepta todas las reglas del juego de Europa, y en esas reglas del juego entra el que no esté constitucionalizada la huelga política. De manera que es absolutamente necesario que se aclare que la huelga política no está constitucionalizada.

Yo, ante la abstención de la UCD con relación a mi enmienda, me siento esperanzado de que en el Pleno pueda ser admitida. También confío en que para entonces el Partido Socialista acepte mi enmienda de corazón, porque yo nunca discutiré, nunca, jamás, el derecho de los trabajadores a defenderse contra los abusos que muchas veces se dan por parte de los empresarios. También cometen abusos a veces los trabajadores.

El señor PRESIDENTE: Me permito recordar el tiempo al señor Satrustegui.

El señor SATRUSTEGUI FERNANDEZ: Sí, pero el tema es de una importancia capital y deseo que se me escuche.

El señor Vida aludía a que no existe el derecho de «lock-out» y que esto es poco menos que inaceptable. Perdón, señor Presidente, pero la anécdota que voy a contar es tan elocuente que merece la pena que la cuente.

Ya he dicho que pertenezco a la Comisión de Asuntos Sociales y de la Salud del Consejo de Europa. En esa Comisión se está estudiando, como también he dicho, la reforma de la Carta Social, y el «rapporteur» es un socialista alemán que en la primera reunión a la que yo asistí presentaba su proyecto de modificación. Me enviaron con tiempo el «rapport». Lo estudié y cuando llegó el turno de mi intervención dije: Bueno, señores, es mi primera intervención y no sé lo que han acordado antes como base para este «rapport», pero me extraña que aquí se proponga la supresión, la prohibición del «lock-out» y me parece que en una sociedad como la europea esto no puede hacerse: se trata del contrapeso de la huelga.

Entonces, el socialista alemán, el «rapporteur», dijo: «A mí se me ha ocurrido proponer la supresión del “lock-out” porque he presenciado recientemente una huelga en un periódico en que los redactores resultaron batidos totalmente, porque frente a su huelga el empresario declaró el “lock-out”. Me pareció tan fuerte el arma del “lock-out” que creo necesario suprimirla y es por lo que lo propongo».

Estaban presentes dos representantes del Partido Laborista inglés y su reacción fue la siguiente: «Está usted totalmente equivocado. Vamos a rebatir sus argumentos con uno equivalente al suyo. Usted conocerá el periódico “The Observer”, que sufre en este momento una huelga que afecta a una nómina de mil quinientos trabajadores. La huelga está provocada por un grupo de veinte que está en una sección fundamental. Las “Trade Unions” están indignadas con ese grupo de veinte, pero no pueden hacer nada.

»El periódico pertenece a un “trustee” que no pretende ni beneficios ni pérdidas y sus dirigentes están pensando en cerrar definitivamente el periódico. ¡Qué más quisiéramos nosotros que la idea de cerrarlo temporalmente declarando que el “lock-out” se

impusiera, porque con el “lock-out” hay un conflicto que dura cierto tiempo, pero luego se vuelve a reanudar la actividad.

»Si suprimiéramos el “lock-out” pondríamos a todos los empresarios en la situación de aceptar la imposición de los trabajadores cuando creen que no pueden aceptarla, o cerrar definitivamente. La fórmula intermedia razonable es que exista el “lock-out”.» Estoy hablando por boca de los laboristas ingleses.

El señor VIDA SORIA: Pido la palabra para alusiones.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra Su Señoría.

El señor VIDA SORIA: Brevisísimamente, para alusiones, fundamentalmente personales, para no quedar como un ignorante. Quiero decir que en Europa no está constitucionalizada la huelga con fines de interés profesional. Las tres Constituciones fundamentales que reconocen, a nivel constitucional, el derecho de huelga en Europa...

El señor PRESIDENTE: Se está refiriendo Su Señoría al fondo de la cuestión.

El señor VIDA SORIA: El fondo afecta en mi caso a la forma. Las tres Constituciones son las de Italia, Francia y Alemania, y la frase exacta que regula la huelga es: «El derecho de huelga se ejercita dentro de las leyes que lo regulan». Y nada más.

En cuanto al «lock-out» hay cuatro razones fundamentales, reconocidas por toda Europa, para no equipararlo al derecho de huelga: primero, el derecho de huelga se reconoce para contrabalancear poderes que son desiguales: el de la empresa y el de los trabajadores.

Segundo, un derecho de «lock-out» constitucionalizado sería una sanción privada contra un derecho constitucional; la huelga equivaldría a no reconocer...

El señor PRESIDENTE: Son razones de fondo y no alusiones personales las que está exponiendo Su Señoría.

El señor VIDA SORIA: Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar, en primer lugar, las enmiendas que se refieren a la supresión del apartado 2, y su pase al artículo 33. Son las enmiendas 238 y 226, de los señores Satrústegui y Carazo, respectivamente.

Efectuada la votación, fueron rechazadas las enmiendas por siete votos en contra, con 17 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Señor Satrústegui, ¿desea mantenerla en el Pleno?

El señor SATRUSTEGUI FERNANDEZ: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún señor Senador apoya estas enmiendas?

El señor PEDROL RIUS: Apoyo la enmienda del señor Carazo.

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a votar las enmiendas 194, del señor Cacharro; 848, del señor Royo-Villanova, y 361, del señor Olarra.

Efectuada la votación, fueron rechazadas las enmiendas por ocho votos en contra y un voto a favor, con 13 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿Se mantienen las enmiendas para el Pleno?

El señor PEDROL RIUS: La mantengo en nombre del señor Cacharro.

El señor OLARRA UGARTEMENDIA: La mantengo.

El señor JIMENEZ BLANCO: La apoya mi Grupo.

El señor ROYO-VILLANOVA Y PAYA: La mantengo.

El señor SANCHEZ AGESTA: Las apoyo.

El señor PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda 294, del señor Bandrés.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 18 votos en contra, con cinco abstenciones.

El señor UNZUETA UZCANGA: Cumpliendo la delegación expresada, manifiesto que el señor Bandrés desea mantenerla en el Pleno.

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a votar la enmienda número 15, del Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 12 votos en contra y cuatro a favor, con nueve abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿Desea el señor Villar mantener su enmienda en el Pleno?

El señor VILLAR ARREGUI: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la enmienda 226, del señor Carazo, que propone añadir un párrafo que diga: «Se reconoce el derecho a la huelga con el correlativo derecho al libre despido».

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 21 votos en contra, con una abstención.

El señor PRESIDENTE: ¿Se mantiene la enmienda?

El señor PEDROL RIUS: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a votar el texto del apartado 2 del artículo 26, remitido por el Congreso, ya que las dos enmiendas siguientes se refieren a una adición.

Efectuada la votación, fue aprobado por unanimidad dicho texto, con 24 votos.

El señor PRESIDENTE: Señor Unzueta, ¿quiere dar lectura del texto que acabamos de aprobar?

El señor UNZUETA UZCANGA: Dice así: «Se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intere-

ses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad».

El señor PRESIDENTE: Vamos a suspender la sesión por diez minutos. Se ruega puntualidad.

El señor SANCHEZ AGESTA: Entiendo que el señor Presidente aplaza para luego la defensa de una enmienda que tengo planteada a este artículo.

El señor PRESIDENTE: Entiende bien el señor Sánchez Agesta. Se suspende la sesión por diez minutos.

Se reanuda la sesión.

El señor PRESIDENTE: Vamos a discutir dos enmiendas que proponen un apartado 3, nuevo, al artículo 26. La primera de ellas es la número 372, del señor Prado. El señor Prado tiene la palabra.

El señor SANCHEZ AGESTA: Señor Presidente, el señor Prado está enfermo y ha delegado en mí la defensa de la enmienda.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sánchez Agesta.

El señor SANCHEZ AGESTA: Defiendo la enmienda por sus propios fundamentos que aparecen detallados en el texto escrito.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Agesta.

¿Algún turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.) ¿Algún otro portavoz desea intervenir? (Pausa.)

El señor Vida tiene la palabra.

El señor VIDA SORIA: Señor Presidente, señores Senadores, simplemente para reanudar un poco el discurso que antes me había interrumpido a mí mismo y señalar nuestra oposición al texto de esta enmienda porque

se podría considerar la misma como el resumen de los despropósitos a que antes me he referido.

En primer lugar, se trata de otro Senador Real, sin representación popular, que se permite enmendar los artículos referidos...

El señor PRESIDENTE: Señor Vida, todos los Senadores tienen derecho a enmendar los artículos.

El señor VIDA SORIA: Legalmente pueden enmendar...

El señor PRESIDENTE: Y legítimamente.

El señor VIDA SORIA: Legítimamente, de acuerdo. Lo que se hace, además, es contrarrestar o intentar contrarrestar el derecho de huelga con el derecho al cierre empresarial y a la resolución individualizada del contrato de trabajo, ni más ni menos.

Quiero simplemente decir, como se ha dicho ya en esta sala, que el despido individual, por ser precisamente una medida de carácter individual relacionada con el contrato de trabajo, no tiene nada que ver con la regulación del conflicto colectivo, que es de lo que aquí se está tratando, o de relación colectiva de trabajo, en el sentido más técnico de la palabra.

Respecto al «lock-out» (y reanudo lo que antes dije), digo y reafirmo que en ningún país del mundo hoy día se reconoce la bilateralidad entre «lock-out», o cierre patronal, y huelga. Los argumentos fundamentales son los dos primeros que dije antes y ahora voy a repetir y otros dos.

En primer lugar, el reconocimiento del derecho de huelga se basa en un deseo de reequilibrar las fuerzas desequilibradas de las clases sociales interlocutoras en el conflicto laboral. Nosotros constatamos (y no es una cosa que intentemos legalizar, sino que lo constatamos de la realidad) que existe una lucha de clases, lucha de clases que nosotros para resolverla por medios pacíficos intentamos introducir en la Constitución. ¿Por qué medio? Por medio de ese sentido de la responsabilidad del movimiento obrero, aceptando la constitucionalización del derecho de huelga como una manera de contrabalancear

o de reequilibrar las fuerzas inicialmente desequilibradas.

En segundo lugar, si nosotros aceptáramos el derecho de cierre patronal, estaríamos en la práctica, incluso en la técnica, eliminando el derecho de huelga.

En tercer lugar, el «lock-out», o cierre patronal, afecta, y por eso no puede ser comparado con el derecho de huelga, a trabajadores que pueden no ser huelguistas y, en consecuencia, es una medida que no puede contraponerse con la otra, incluso desde el punto de vista mecánico.

Finalmente, la huelga se reconoce en la Constitución o en el ordenamiento jurídico sobre la base de que cuesta cara a los trabajadores. Los trabajadores dejan de trabajar, pero a la vez dejan de percibir sus salarios y pierden muchas otras cosas. Es decir, la huelga es una medida violenta —relativamente violenta en el sentido jurídico de la palabra— por parte de la clase obrera, pero tiene una contrapartida, en cambio, que es el cierre patronal, y lo único que haría sería que la empresa o las sociedades de empresas rehusaran contratar a determinados trabajadores, sin que por ello les tenga que costar nada en absoluto.

En consecuencia, repito, el cierre patronal no puede ser comparado ni siquiera mecánicamente con el derecho a la huelga.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vida.

Tiene la palabra el señor Sánchez Agesta para rectificar.

El señor SANCHEZ AGESTA: Bueno, señor Presidente, si usted quiere para rectificar, pero en realidad la he pedido para alusiones.

Simplemente quería decir que el señor Prado y Colón de Carvajal es un ausente, no está aquí y ha sido aludido. Por tanto, cualquier miembro de la Cámara puede pedir la palabra por él y más si es el portavoz de su grupo. En este caso la pido para limitarme a decir que el señor Prado y Colón de Carvajal fue designado como Senador regio en virtud de una ley que fue aprobada en referéndum, que creo es suficiente título de legitimidad, y ha presentado una enmienda en virtud de un

derecho que le concede el Reglamento de la Cámara.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la enmienda 461, del señor Xirinacs, que tiene la palabra para defenderla.

El señor XIRINACS DAMIANS: La retiro, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Vamos, pues a votar la enmienda del señor Prado y Colón de Carvajal.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 23 votos en contra, con dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿La mantiene el señor Sánchez Agesta a efectos de su defensa en el Pleno?

El señor SANCHEZ AGESTA: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Pasamos a continuación a discutir el artículo 27. La primera enmienda, la número 27, es del Grupo Progresistas y Socialistas Independientes. El representante del Grupo tiene la palabra.

Artículo 27

El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER: Señoras y señores Senadores, sólo dos palabras para exponer los argumentos que el PSI quiere defender a propósito de esta enmienda, en lo que estimamos que se da una redacción muy defectuosa de lo que es el derecho de petición.

El derecho de petición es uno de esos derechos perfilados, nítidos, acabados e, incluso, ejercitados con frecuencia, como lo demuestra el hecho de que muchos de los aquí presentes han podido hacer uso de él a lo largo de los años pasados. Si se trata de algo concreto y conocido, ¿por qué no dar entrada aquí a la regla de que lo bueno, si breve, dos veces bueno?

Enmendamos en el sentido de que esta larga redacción descriptiva del precepto quede solamente así: «Queda garantizado el derecho de petición que se ejercerá con arreglo a lo que disponga la ley».

Es muy útil este derecho de petición que constituye una evidente válvula de escape y una evidente modalidad de comunicación de los ciudadanos con los poderes públicos, pero hay algo que es obvio: el derecho de petición no es un derecho monolítico, sino que es un conjunto de muchas cosas variadas, desde la súplica graciable, desde la comunicación a la denuncia reservada, pasando por una modalidad de la reclamación. ¿Por qué entonces perturbar algo que es nítido y claro, hablando de este derecho de petición o reclamación?

La reclamación es algo totalmente distinto porque, o bien queda regulada en aquellos aspectos que se refieren al derecho a la justicia gratuita (artículo 113), acceso a los Tribunales (artículo 24), control de la Administración (artículo 99) o procedimiento administrativo, en cuyo caso no tiene sentido mezclar esto aquí.

De manera que el principal argumento de nuestra enmienda trataría de evitar que se aludiera a esta reclamación que perturba. De todas maneras, creemos que no es preciso insistir ni definir un derecho que es claro. ¿Por qué decir que este derecho se ejercerá de una manera individual o colectiva? Ya está presupuesto, es algo claro, es algo obvio; si el apartado 2 del precepto dice que queda prohibido el ejercicio colectivo para los miembros de las Fuerzas Armadas, se sobreentiende que todos los ciudadanos pueden ejercitarlo de una manera individual o de una manera colectiva.

La fuerza del derecho es tal que, por ejemplo, en la legalidad anterior, en la que el artículo 21 del Fuero de los Españoles admitía sólo un ejercicio de petición individual, es obvio que se ejercitaba con normalidad de manera colectiva. Pero hay otra limitación que no estaría de más superar. Se dice que los españoles tendrán el derecho. Tratándose de un derecho, pues, tan poco costoso para con el poder político, un derecho tan obvio, tan elemental, ¿por qué limitarlo e impedirlo a los extranjeros, si hemos aprobado una nueva redacción del artículo 12, apartado 1, de manera que no se excluyen, por principio, los derechos políticos a los extranjeros? ¿Por qué esto, que no tiene apenas costo para el poder, va a quedar excluido a los extranje-

ros, con lo que se produciría, además, una cierta incongruencia? Se admite lo que es más complicado; los recursos judiciales que los extranjeros en nuestra patria pueden utilizar sin ningún género de duda y, en cambio, les quedaría excluido este derecho.

Por eso, y sin insistir más, entendemos que se perturba considerablemente la referencia a las reclamaciones, y pedimos que sea admitida nuestra enmienda.

Pero para el supuesto de que no se tenga a bien aceptar nuestra enmienda, si me permitiría sugerir que, de alguna manera, se resucitara una vieja enmienda de la Agrupación Independiente, que lo único que pretendía era suprimir las palabras «o reclamación», de manera que no se modificaría el contenido del artículo nada más que en ese aspecto tan concreto y tan específico.

El señor PRESIDENTE: Yo sugiero al señor Martín-Retortillo que la presente «in voce».

El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER: La presento «in voce» como enmienda alternativa. De manera que, si no se acepta la número 23 que acabo de defender, se entendería que se mantiene la enmienda 672, de la Agrupación Independiente.

El señor PRESIDENTE: No se puede mantener.

El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER: La presento «in voce». Es la que está en la página 208, y se propone la supresión de «o reclamación».

El señor PRESIDENTE: Preséntela por escrito.

El señor AZCARATE FLOREZ: No es más que para decir si no es más fácil resucitar la enmienda.

El señor PRESIDENTE: Me parece que eso es imposible. Desde Lázaro ha habido pocos resucitados, señor Azcarate. Pero es lo mismo. La mantiene «in voce» y el efecto es el mismo.

A continuación pasamos a la enmienda número 151, del señor Cela.

El señor CELA Y TRULOCK: La retiro, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Portabella.

El señor PORTABELLA RAFOLS: Brevemente, porque estamos ante una enmienda que es perfectamente asimilable; incluso en Ponencia pasó en muy buenas condiciones. Y en términos, no ya de fondo, sino políticos, creo —y en este sentido me permito hacer un comentario— que el consenso en beneficio de todos yo nunca he creído que fuera de aplicación mecánica; y más aún después de las intervenciones del día anterior de los dos Grupos más interesados en relación a las enmiendas de la Senadora Gloria Begué. Creo que en este caso estamos ante una enmienda que tiene las características de poder ser perfectamente asimilable, y que da mayor credibilidad y consistencia al consenso.

Esta es una opción del Grupo que votará a favor de esta enmienda. Solamente pedía la palabra para hacer este comentario.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Enciso.

El señor ENCISO RECIO: En nombre de Unión de Centro Democrático consumo un turno de portavoces para aceptar la enmienda que propone el Senador Martín-Retortillo, porque nos parece perfectamente coherente en su contenido, en su fondo y, también, en los aspectos formales.

De sobra es sabido por todos los señores Senadores que ese derecho de petición, como dijera Pérez Serrano en sus excelentes comentarios a la Constitución de 1931, el más inofensivo, acaso, de todos los derechos, y García Pelayo ha apuntado que es una reliquia histórica. Yo entiendo, sin embargo, que ni es inofensivo ni es una reliquia, sino que está muy vivo porque es la expresión de la libertad personal, de la afirmación de la persona, y es también el camino extraordinario que supera todos los cauces ordinarios y que hay que respetar siempre.

Tiene este derecho una sólida fundamentación histórica, tiene también una fundamen-

tación en nuestro constitucionalismo, tiene una fundamentación en las leyes vigentes. En la España hispanomusulmana existía el «visir de reclamaciones y quejas», como así se denominaba. Todos sabemos que los monarcas medievales escuchaban oralmente algunas de esas peticiones o reclamaciones. Y el archivo de Simancas está lleno de memoriales que se dirigían a Felipe II y que el Rey contestaba personalmente como muestra de lo que podía ser la minuciosidad, como muestra, según Marañón, de lo que podía ser la neurastenia; como muestra, según otras personas, de lo que era el fuerte sentido de la responsabilidad. Es más, yo me preguntaría si este derecho de petición no tomó cauces nuevos a través de la fórmula de los arbitristas, que era en cierto modo una tecnificación de este derecho, y que tendía a luchar contra lo que Martín Cellorigo decía «la República de hombres encantados»; esta lucha por «la República de hombres encantados» que tantas veces se nos presenta en la historia de España, e incluso con los proyectistas del siglo XVIII, que está también en esta misma línea.

El derecho de petición, además, tiene un sólido fundamento en el constitucionalismo español. Es curioso que dos Constituciones progresistas serán la base de la aceptación por parte de sectores más moderados. La Constitución de 1837, en su artículo 3.º, prevé el derecho de dirigir peticiones por escrito a las Cortes y al Rey como determinan las leyes, y esta prescripción será luego asimilada por la Constitución de 1845; y la que se llamó asimismo Constitución democrática de 1869 hablaba del derecho de dirigir peticiones, individual o colectivamente, a las Cortes, al Rey y a las autoridades, y después precisaba una cualificación en relación con los miembros de las Fuerzas Armadas, que no podían ejercer colectivamente este tipo de derechos.

La Constitución de 1876 no hace sino reproducir la de 1869; y la de 1931 concreta lo que ha servido de base para la posterior legislación española, al decir que todo español podrá dirigir peticiones, individual o colectivamente, a los poderes públicos y a las autoridades. Este derecho no podrá ejercerse por ninguna clase de fuerza armada.

En el Congreso, el tema se aprobó sin ningún tipo de debate, y a mí me parecía un cierto deber ético y de consideración hacia los señores Senadores aportar aquí alguna modesta información y traer a recuerdo que todavía quedan vigentes en nuestra legislación actual algunas prescripciones sobre el derecho de petición. Primero, en la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, de 26 de julio de 1957; después, en la Ley de Procedimiento Administrativo, de julio de 1958, y, por último, la Ley Reguladora del Derecho de Petición, de 22 de diciembre de 1960. Todas ellas definen la naturaleza del derecho, los sujetos que pueden ejercer este derecho, y es muy interesante el apunte del Senador Martín-Retortillo respecto a los extranjeros, apunte que yo comparto plenamente: los procedimientos, el contenido, y, en definitiva, los efectos del derecho de petición.

En pro del derecho de petición, y como resumen, siguiendo una larga tradición occidental que en algunos países ha rendido frutos tan positivos como en Inglaterra desde el «Bill of rights» de 1689, cuyo artículo 5.º ya hablaba de este derecho largamente, incluso practicado por los británicos después con la eficacia que todos conocemos; en nombre, pues, de este derecho histórico aceptamos su inclusión en la Constitución, y en nombre de la sensatez formal, de la agudeza de contenido y de la aceptación de los razonamientos tan convincentes, en estos como en otros puntos, del Senador Martín-Retortillo, UCD se adhiere a su enmienda y, por tanto, votará a favor.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Martín-Retortillo desea hacer uso de la palabra para rectificar?

El señor MARTÍN-RETORTILLO BAQUER: No, señor Presidente. Sólo decir que retiro la enmienda «in voce» alternativa.

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la votación de la enmienda del señor Martín-Retortillo.

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda por 18 votos a favor, con seis abstenciones.

El señor PRESIDENTE: A continuación, el señor Unzueta dará lectura del texto del apartado primero de este artículo.

El señor SECRETARIO (Unzueta Uzcanza): Nueva redacción del artículo 27, apartado 1, que dice así: «Queda garantizado el derecho de petición que se ejercerá con arreglo a lo que disponga la ley».

El señor PRESIDENTE: Entramos seguidamente en el apartado 2. A este apartado se ha formulado la enmienda número 462, del señor Xirinacs, que tiene la palabra para defenderla.

El señor XIRINACS DAMIANS: Señor Presidente, solamente para decir que, por coherencia con lo que he defendido en el apartado 1 del artículo anterior, también aquí me parece que si este derecho de petición es tan claro, que se ha de practicar con tanta generosidad, el más inofensivo quizá y el más útil, me parece que se podía hacer extensivo a los trabajadores de la defensa sin ninguna clase de excepción.

Pensemos que ejércitos tan eficaces como el de Mao Tse-Tung, cuando luchaba con el Kuomintang o contra Chiang-Kai-Shek o contra los japoneses, en los días en que no había combate por la tarde había sesiones de crítica y cualquier soldado podía criticar, incluso, al más alto general. Después de la sesión continuaba la disciplina y se cerraba la crítica. El derecho de petición es mucho menos que una sesión de crítica y me parece que podíamos dar un empujoncito, ya que en alguno de los textos que nos ha leído el Senador de UCD que ha hablado antes ni siquiera se concedía la petición particular, y ahora que se concede podemos conseguir también la petición colectiva.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

Pasamos a la enmienda número 151, del señor Cela, que tiene la palabra para defenderla.

El señor CELA Y TRULOCK: Este apartado 2 del artículo 27 podría decir: «Los individuos pertenecientes a las fuerzas o institutos armados o a los cuerpos sometidos a

disciplina militar sólo podrán ejercer este derecho individualmente y con arreglo a lo dispuesto por la ley que lo regula». Es el texto que someto a la consideración de ustedes.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

Pasamos a la votación de la enmienda del señor Xirinacs.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 23 votos en contra, con dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Xirinacs la mantiene para el Pleno?

El señor XIRINACS DAMIANS: Sí, señor Presidente.

El señor PEDROL RIUS: Apoyo la enmienda del señor Xirinacs, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a votar la enmienda del señor Cela.

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda por unanimidad, con 25 votos.

El señor PRESIDENTE: Por el señor Unzueta se va a proceder a la lectura de la nueva redacción del texto.

El señor SECRETARIO (Unzueta Uzcanaga): Nueva redacción del artículo 27, 2: «Los individuos pertenecientes a las Fuerzas o Institutos armados o a los Cuerpos sometidos a la disciplina militar sólo podrán ejercer este derecho individualmente y con arreglo a lo dispuesto por la ley que lo regula».

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la Sección 2.ª: «De los derechos y deberes de los ciudadanos», a la que se ha presentado la enmienda número 152, del Senador señor Cela, que tiene la palabra.

El señor CELA Y TRULOCK: La retiro, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: La enmienda que viene a continuación es la 324, del señor Sánchez Agesta, que fue discutida y aprobada.

El señor SANCHEZ AGESTA: Efectivamente, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Me dice el señor Letrado Mayor que lo que se aprobó fue el traslado del artículo 23 al 29 bis, pero no la creación de una Sección 3.ª

El señor SANCHEZ AGESTA: Si le parece al señor Presidente la defenderé antes que llegemos al artículo 30.

El señor PRESIDENTE: Tomamos nota y rogamos al señor Sánchez Agesta que oportunamente nos lo recuerde.

Entramos en el artículo 28, apartado 1. La primera de las enmiendas es la número 176, del señor Gamboa, que tiene la palabra para defenderla.

El señor GAMBOA SANCHEZ-BARCAIZ-TEGUI: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, propongo como enmienda al primer apartado del artículo 28 que se diga: «La defensa de la patria constituye un deber y un honor para todos los españoles. El servicio militar es obligatorio para los españoles varones, en los términos que establezca una ley orgánica». Esa es la enmienda que se ha propuesto.

La enmienda que he presentado a este apartado 1 pretende simplemente la inclusión del término «patria», de acuñada tradición histórica y castrense, y el reconocimiento de su defensa, no sólo como un deber y un derecho, sino también como un honor. Y hablo de la patria como representación suprema de la comunidad nacional, síntesis de pasado, presente y futuro, obra común de todo el pueblo español a lo largo de la Historia, patria a cuya defensa el pueblo español estuvo siempre presto, llegando incluso al sacrificio de la vida cuando la supervivencia de aquella lo exigía.

Por otro lado, entiendo que la defensa de la Patria ha sido y será siempre motivo de honor para todos los españoles, como lo es en cualquier otra comunidad nacional para sus respectivos ciudadanos en cualquier momento histórico y bajo cualesquiera regímenes políticos.

Dentro de la defensa militar de la Patria,

Artículo 28

concreción última y un contenido exclusivo de la defensa nacional a que se refiere el primer párrafo de este apartado, y en relación con el reconocimiento que el apartado siguiente hace de la objeción de conciencia, quiero señalar en primer término que, aun no siendo partidario de este reconocimiento constitucional que sólo Portugal y Alemania realizan, eludo entrar y pronunciarme sobre él y admito la referencia del Congreso. Pero admito esa referencia constitucional a la objeción de conciencia en la medida que se efectúe como excepción y no como regla general; como excepción a la obligatoriedad general del servicio militar para los españoles varones; y como tal excepción con las garantías precisas, como dice el texto actual, pero teniendo la posibilidad de establecer un servicio civil sustitutorio por su integratividad.

Aunque ello forma parte del apartado 2, he creído necesario mencionarlo en el párrafo cuya adición propongo al apartado 1 de este artículo.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa.) ¿Portavoces? (Pausa.)

A continuación hay dos enmiendas, la 153, del señor Cela, y la 24, del Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes, que sólo cambian en una palabra: «los ciudadanos» y «los españoles». No sé si se da algún alcance a estas enmiendas, pero si los señores Senadores lo desean así se hará. (Asentimiento.)

El señor Cela tiene la palabra para defender su enmienda.

El señor CELA Y TRULOCK: Mi enmienda sólo consiste en la diferencia que el señor Presidente nos indica.

Yo creo que los ciudadanos a que se refiere somos exactamente los españoles. Yo preferiría decir que los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España, porque me parecería más lógico, aunque naturalmente la enmienda de mis amigos del PSI es perfecta también.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Villar Arregui.

El señor VILLAR ARREGUI: La enmienda que el Grupo propone busca la sustitución del texto del Congreso por otro que sea, al mismo tiempo, más coherente con la rúbrica de la Sección 2.ª y con el lenguaje que se emplea en el terreno del Derecho público. La rúbrica de la Sección 2.ª, según acaba de verse, es «De los derechos y deberes de los ciudadanos».

La palabra «obligación» está acuñada por la dogmática civilista y, en general, por el Derecho privado, en tanto que la expresión «deber» tiene una connotación de Derecho público, y parece que, en la alternativa de optar por uno u otro término, a la hora de redactar una Constitución debe optarse, como se ha optado ya en la rúbrica de la Sección, por la expresión «deber» con prevalencia a la expresión «obligación».

Así se entendió en la Ponencia en que esta Comisión se constituyó en su día, y la enmienda obtuvo 18 votos afirmativos, lo que me permite no consumir ni un minuto más en su defensa.

El señor PRESIDENTE: ¿Hay petición de palabra para un turno a favor? (Pausa.) ¿Para un turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

Pasamos, pues, a las votaciones. En primer lugar se somete a votación la enmienda número 176, del señor Gamboa.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 10 votos en contra, con 15 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿Mantiene el señor Gamboa su enmienda para su defensa en el Pleno?

El señor GAMBOA SANCHEZ-BARCAIZTEGUI: Sí, señor Presidente.

El señor PEDROL RIUS: La apoyo, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la enmienda número 153, del señor Cela.

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda por 19 votos a favor y dos en contra, con cuatro abstenciones.

El señor PRESIDENTE: El señor Unzueta dará lectura a la misma, que es como queda redactado el texto del proyecto.

El señor SECRETARIO (Unzueta Uzcan-ga): Dice así: «Los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España».

El señor PRESIDENTE: Si bien no procede votar la enmienda de la Agrupación de Progresistas y Socialistas Independientes, se pregunta si mantienen la enmienda para su defensa en el Pleno.

El señor VILLAR ARREGUI: Se retira, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al apartado 2.

El señor Xirinacs tiene la palabra para defender su enmienda.

El señor XIRINACS DAMIANS: Ante todo, creo que quedan convenientemente constitucionalizadas las obligaciones militares, pero coherentemente con mi enmienda de creación de un nuevo apartado 4 al artículo 15 que defiende el derecho a la objeción de conciencia en general, definiendo aquí el derecho a la objeción de conciencia al servicio de las armas. Mi redacción lo enuncia como derecho, el texto no. En el texto más bien aparece como algo incordiante que hay que tolerar. No creo necesario hacer aquí relación de países que tienen reconocido este derecho.

Se distinguen claramente servicio militar y servicio civil para evitar servicios civiles aparentes que encubran situaciones de servicio militar real o de encuadramiento en la jerarquía y ministerio militares que inmediatamente son contestadas por los objetores.

El servicio militar representa una contribución o tributo no monetario, realizado por prestación de días de servicio del individuo a la sociedad. También debería tener esta consideración estricta el servicio civil. Deben evitarse tres extremos: que el servicio civil resulte un castigo; que resulte una especie de trabajo forzado, y que resulte un parcheo a situaciones de injusticia que el Estado está obligado a resolver a través de sus organismos. Para ello no debe alargarse más el servicio civil que el militar; no deben escogerse

tareas humillantes; no deben plantearse como empresa económica o con vistas al lucro; no debe quitar trabajo para reducir el paro obrero, cosa que puede perjudicar a los obreros parados, ni tampoco debe impedirse que los objetores en el servicio civil realicen acciones reivindicativas para exigir de los organismos del Estado el cumplimiento de sus obligaciones en relación con las tareas encomendadas.

El señor PRESIDENTE: ¿Desean hacer uso de la palabra para un turno a favor? (Pausa.) ¿Para un turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

A continuación pasamos a discutir la enmienda número 176, del señor Gamboa, que tiene la palabra.

El señor GAMBOA SANCHEZ-BARCAIZ-TEGUI: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, dentro de la defensa militar de la Patria, concreción última y no contenido exclusivo de la defensa nacional a que se refiere el apartado anterior del texto actual aprobado por el Congreso, se consagra con claridad el derecho a la objeción de conciencia, remitiendo, sin embargo, a la ley ordinaria la fijación del contenido de dicha objeción de conciencia.

Sobre el tema de la objeción de conciencia he preferido eludir el fondo de su admisión o no en la Constitución, ya que sólo dos Constituciones lo efectúan en todo el mundo: Alemania y Portugal. Alemania con una amplitud que le ha obligado recientemente a restringirlo por la gravedad de sus consecuencias ya que se quedaban sin contingente para cubrir su reclutamiento. Y eludo las controversias sobre este tema, aceptando —aunque no me parece correcto— la inclusión en la Constitución de la objeción de conciencia. Ahora bien, si se reconoce la objeción de conciencia al servicio con armas a la Patria con razones de índole religiosa, filosófica o moral, espero que se establezcan las garantías suficientes para impedir la objeción con la intención fraudulenta de eludir simplemente los deberes militares generales.

Si se reconoce la objeción de conciencia en la Constitución, entiendo que al menos debe hacerse por la vía de excepción, más que por la de regla general.

Por esta razón apuntada y por la insuficiencia del apartado 1 con relación a una mayor amplitud que la estricta defensa militar, entiendo que antes del reconocimiento de la objeción de conciencia debe expresarse la obligatoriedad general del servicio militar para todos los españoles varones.

Igualmente considero de especial gravedad en el texto actual la expresión referida al supuesto de la objeción de conciencia en el sentido de que podrá imponerse, en su caso, una prestación social sustitutoria. Ello supondría una quiebra del principio de igualdad de todos los españoles, ya que existe la posibilidad de que por supuestas razones filosóficas o morales eludieran algunos el cumplimiento de sus obligaciones. Si se admite la objeción de conciencia —y con esto termino— considero fundamental que se haga por vía de excepción y asegurando, en todo caso, el cumplimiento del servicio civil sustitutorio, que nunca deberá ser más cómodo que el militar.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gamboa. ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Cela para defender su enmienda número 153.

El señor CELA Y TRULOCK: Quisiera rogar que se me perdonen dos erratas que se me han escapado, sin duda por falta mía. Los dos verbos que van en presente deben ir en futuro y en vez de decir «fija y regula» debe expresar «fijará y regulará».

Mi propuesta no es sino peinar un poco la redacción del texto del Congreso, que quizá me parece un poco farragosa. diciendo: «La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará la objeción de conciencia y demás causas de exención». Lo demás me parece reiterativo.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? Tiene la palabra el señor Fernández-Galiano.

El señor FERNANDEZ - GALIANO FERNANDEZ: Unión de Centro Democrático lamenta no poder estar de acuerdo en este caso con la propuesta de nuestro querido compañe-

ro el señor Cela, por cuanto que su redacción, si bien en ella, como es lógico, hace gala de purismo, quizá resulte, en aras de ese purismo, excesivamente lacónica y afecte al fondo del artículo. Se elude, por ejemplo, la expresión «con las debidas garantías» y algún otro detalle, que nos hace sentirnos más proclives a la aprobación del texto remitido por el Congreso.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández-Galiano.

¿El señor Cela desea hacer uso de la palabra para rectificar?

El señor CELA Y TRULOCK: No, señor Presidente, doy por retirada la enmienda.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el Grupo Progresista.

El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER: Retiramos nuestra enmienda porque estaba en función de otra que ya habíamos presentado al artículo 15 y que no fue aprobada.

El señor PRESIDENTE: La enmienda del señor Gutiérrez Rubio es una mera corrección de estilo, por lo que, siguiendo el criterio anterior, se pondrá a votación sin debate.

El señor PEDROL RIUS: Es más que una corrección de estilo, porque lo que la enmienda del señor Gutiérrez Rubio propone es que esa sustitución del servicio militar por un servicio civil, que en el proyecto del Congreso se contempla como una posibilidad, se convierta en algo de carácter automático.

Por tanto, no es una mera corrección de estilo. Hace obligatoria la sustitución del servicio militar por un servicio civil.

El señor PRESIDENTE: Bien, tiene la palabra el señor Pedrol para defender la enmienda.

El señor PEDROL RIUS: La defiendo por sus propios fundamentos, aun con la ausencia del señor Gutiérrez Rubio, e insisto en que la tesis de esta propuesta es no dar un trato de privilegio a quien alegando una objeción de conciencia se libere del servicio militar en

relación con los demás ciudadanos, diciendo que ya que se libera del servicio militar, que preste un servicio equivalente en la esfera civil, pero que esto que el texto del Congreso propone como facultativo se convierta en algo obligatorio por respeto al principio de igualdad entre los ciudadanos.

El señor PRESIDENTE: ¿Para un turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? Tiene la palabra el señor Villar.

El señor VILLAR ARREGUI: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, la razón por la que sobreviene ahora esta enmienda radical en la, a mi juicio, incorrecta calificación de la naturaleza de la objeción de conciencia. Si la objeción de conciencia se hubiera configurado como un derecho con todas las garantías fundado en razones religiosas, filosóficas o ideológicas, es evidente que quien lo invoque «deberá» ser sometido y no «podrá» ser sometido a una prestación social sustitutoria.

Pero como el Congreso ha concebido la objeción de conciencia como causa de exención del servicio militar obligatorio, parece lógico que tras esa concepción se emplee el verbo «poder» que confiere a la ley la potestad de imponer o de no imponer una prestación social sustitutoria. A nuestro juicio, lo que el precepto quiere decir con el inciso «en su caso» es que en los supuestos de objeción de conciencia se impondrá, y, en cambio, en aquellas otras causas de exención, como pueden ser enfermedades, no hará falta imponer la prestación social a la que en el primer supuesto sí habrá de acudir.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villar.

El señor Fernández-Galiano tiene la palabra.

El señor FERNANDEZ - GALIANO FERNANDEZ: No hago uso de la palabra porque iba a decir exactamente lo mismo que ha indicado el señor Villar.

El señor PRESIDENTE: El señor Sánchez Agesta tiene la palabra,

El señor SANCHEZ AGESTA: Señor Presidente, no es sólo gramatiquería, sino también algo de lo que ha observado el señor Villar. Tal como está redactado el texto parece que a las demás causas de exención también se les puede imponer una prestación social sustitutoria. La palabra sustitutoria, desde luego, a mí me crispa los nervios. Tiene tres tes y cinco sílabas y los ingleses consideran que todas las palabras que tienen más de tres sílabas son pedantes. Me parece que se podía decir: «Pudiendo sustituirlo, en su caso, por una prestación social». Así el «lo» de «sustituirlo» apunta clarísimamente al servicio militar por objeción de conciencia y no queda esta vaguedad de que cualquier causa de exención pueda imponer, en su caso, la prestación penal sustitutoria. Sería una mera sustitución de tipo gramatical que la puedo proponer como una enmienda «in voce» si es necesario.

El señor PRESIDENTE: Perfectamente. Pásela a la Mesa el señor Sánchez Agesta y la votaremos en su momento, sin debate.

El señor PEDROL RIUS: No me puedo adherir a lo que ha dicho el señor Sánchez Agesta...

El señor PRESIDENTE: Señor Pedrol, se va a votar la enmienda del señor Gutiérrez Rubio y después, como enmienda «in voce», la del señor Sánchez Agesta. Así que, aunque no se adhiera, el señor Pedrol lo demostrará con su voto.

El señor PEDROL RIUS: Quiero decir que, si tuviera libertad de decisión, me adheriría a la propuesta del señor Sánchez Agesta, pero estoy aquí como enmendante por representación, y ello me obliga a mantener el texto.

El señor PRESIDENTE: Pasamos, en primer lugar, a votar la enmienda del señor Xirinacs.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 21 votos en contra, con cuatro abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Xirinacs la mantiene? (Asentimiento.) ¿El señor Pedrol la apoya? (Asentimiento.)

A continuación votaremos la enmienda del señor Gamboa.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por nueve votos en contra, con 16 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿La mantiene el señor Gamboa? (Asentimiento.) ¿La apoya el señor Pedrol? (Asentimiento.)

A continuación pasamos a votar la enmienda del señor Gutiérrez Rubio.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 23 votos en contra, con dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿La mantiene el señor Pedrol?

El señor PEDROL RIUS: La mantengo a efectos de repetición en el Pleno del Senado.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Pasamos a continuación a votar la enmienda del señor Sánchez Agesta.

El Secretario, señor Unzueta, dará lectura de la misma.

El señor SECRETARIO (Unzueta Uzcanaga): El texto, con la enmienda presentada por el Senador Sánchez Agesta, dice así: «La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo sustituirlo, en su caso, por una prestación social.»

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por seis votos en contra y tres a favor, con 16 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿Quiere mantenerla en el Pleno el señor Sánchez Agesta? (Denegación.)

Se vota a continuación el texto del proyecto.

Efectuada la votación, fue aprobado el texto del proyecto por 25 votos a favor.

El señor PRESIDENTE: El Secretario, señor Unzueta, puede dar lectura al mismo.

El señor SECRETARIO (Unzueta Uzcanaga): El apartado 2 del artículo 28 ha quedado aprobado con la siguiente redacción: «La ley fijará las obligaciones militares de los españoles y regulará, con las debidas garantías, la objeción de conciencia, así como las demás causas de exención del servicio militar obligatorio, pudiendo imponer, en su caso, una prestación social sustitutoria».

El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión. Se reanudará a las cuatro y media de la tarde.

Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.

Se reanuda la sesión a las cuatro y cuarenta y cinco minutos de la tarde.

El señor PRESIDENTE: Señores Senadores, como hay quórum, seguimos con el apartado 3 del artículo 28.

Entramos a debatir la enmienda 24, del Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes. El portavoz del Grupo tiene la palabra.

El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER: Señoras y señores Senadores, la enmienda 24 que ha presentado el PSI para nada altera el contenido de este apartado número 3 que estamos analizando, sino que pretende tan sólo una modificación de sistemática, modificación que es realmente mínima en cuanto que lo único que persigue es que a este número 3 se le dé una numeración como precepto distinto, como artículo separado, que sería el que viniera a continuación del artículo 28, provisionalmente; por tanto, artículo 28 bis.

Parece que las obligaciones militares que se contemplan en este precepto tienen consistencia suficiente como para constituir un artículo propio. Dejaré de lado ahora la referencia a los intentos que hemos hecho para sacar de este precepto la objeción de conciencia, que estimábamos más adecuada su situación en el artículo 15. (Murmullos.—El señor Presidente agita la campanilla.)

Se trata ahora de considerar lo referente al servicio civil. Pensamos que el tema tiene entidad suficiente como para merecer un tra-

Artículo 28
(Continuación)

tamiento distinto. El servicio civil no es en absoluto un añadido al servicio militar. ¿Es que se piensa sólo en este tema como un sustitutivo para los objetores de conciencia? Cier to que esta faceta es una faceta importante, que no desmentiremos, pero ahí queda ya consignada en el apartado 2. Pero reducir el servicio militar simplemente a la modalidad de supletorio para quienes, por alguna razón, profesen la objeción de conciencia, es minusvalorar algo que tiene mucha más entidad, mucha más trascendencia y mucho más significado.

Todo el tema del servicio civil o del servicio ciudadano aflora en relación con este precepto, cuyo contenido, insisto, no queremos modificar. Incluso en la legalidad anterior, el propio Fuero de los Españoles, que en el artículo 7.º se refería al servicio militar, en el artículo 8.º contemplaba una serie de posibilidades a cuyo núcleo estamos aludiendo ahora.

Decía el artículo 8.º del Fuero de los Españoles: «Por medio de leyes, y siempre con carácter general, podrán imponerse las prestaciones personales que exijan el interés de la nación y las necesidades públicas».

Esta línea de configurar un servicio civil como algo separado, como algo abierto, no sólo tiene futuro, sino que la encontramos en Constituciones muy interesantes. Por ejemplo, en la Ley Fundamental alemana, el artículo 12 A habla del servicio militar. Y, en efecto, en el párrafo segundo de este artículo 12 A se habla de un servicio civil en sustitución para los objetores de conciencia. Pero el precepto anterior, el artículo 12, habla del servicio civil con carácter general cuando se dice que «nadie podrá ser obligado a un trabajo determinado, salvo en cumplimiento de un servicio público normal de orden general e igual para todos». Precepto separado, por consiguiente, de esto que es una realidad no sólo posible, sino eficiente en los países avanzados.

En esta línea permitidme en segundo y ya último lugar, para terminar, decir lo que ha dispuesto al respecto la Constitución griega de 1975 en un precepto en el que se regula el derecho al trabajo. En este precepto en que se regula el derecho al trabajo, el artículo 22 comienza, en su párrafo tercero, señalando

que se prohíbe cualquier clase de trabajo obligatorio para, a continuación, excepcionar en los términos siguientes: «Se regularán por leyes especiales las modalidades de requisas de servicios personales, en caso de guerra o movilización, o para hacer frente a necesidades de la defensa del país, o en caso de una necesidad social urgente, provocada por una calamidad o susceptible de poner en peligro la salubridad pública. Dichas leyes regularán también la modalidad de la aportación de trabajo personal a las colectividades locales para la prestación de necesidades locales».

En definitiva, y en síntesis, este servicio civil que en ocasiones puede ser sustitutivo del servicio militar, no agota en ello la esfera de sus posibilidades, sino que tiene un gran campo de futuro. Pero, además, viene a sistematizar lo que ha sido también una realidad en nuestro Derecho histórico, por ejemplo, por ceñirme ahora a un supuesto muy concreto, ahí está toda la realidad de las prestaciones personales, que venían teniendo vigencia en las pequeñas comunidades locales y que, por ejemplo, el artículo 564 de la vigente Ley de Régimen Local configura en los términos siguientes: «Los Ayuntamientos de Municipios hasta 10.000 habitantes y las Juntas Vecinales de las Entidades Locales Menores podrán imponer la prestación personal y de transporte con los siguientes fines:

a) Apertura, reconstrucción, conservación, reparación y limpieza de sus vías públicas, urbanas y rurales.

b) Construcción, conservación y mejora de fuentes y abrevaderos.

c) Fomento y construcción de obras públicas a cargo de las Entidades municipales», etcétera.

Todo el tema de las prestaciones personales en el ámbito de esta esfera se concreta, por consiguiente, en la necesidad de dar una salida de futuro, de dar una posibilidad; en definitiva, por tanto, de configurar de una manera separada lo que no debe ser un mero aditamento de otras obligaciones y cargas muy importantes, sino que tiene entidad para ocupar un precepto separado.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

Pasamos a la enmienda número 673, de la Agrupación Independiente. El señor Azcárate tiene la palabra.

El señor AZCARATE FLOREZ: Señoras y señores Senadores, la enmienda que se propone por la Agrupación Independiente consiste en añadir a la redacción actual estas palabras: «Siempre que no se afecten las libertades establecidas en la Constitución».

Me confirmo un poco y me ratifico en la intención que tiene este párrafo complementario, después de las explicaciones que he oído al Senador señor Martín-Retortillo; por ejemplo, en la Constitución griega que nos ha citado hay una enumeración muy concreta, muy definida, de qué alcance puede tener la implantación o el establecimiento de un servicio civil que, con carácter conminatorio u obligatorio, me da un poco de escalofrío a qué extremos se puede llegar, al amparo de este servicio civil, creando unas imposiciones y unas limitaciones a esas libertades a las cuales todos apoyamos.

No digo que sea, exactamente, la fórmula que yo someto; pero pienso y repito si es oportuno, ante una declaración tan categórica de que podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general, crear ahí un instrumento un poco incondicionado, un poco ilimitado, que pueda llevar como consecuencia alguna afección a las libertades fundamentales que tenemos reconocidas en la Constitución.

Esa es la razón y el motivo del complemento de la frase que se propone.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azcárate.

¿Para un turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

Pasamos, entonces, a la enmienda número 176, del señor Gamboa, que tiene la palabra para su defensa.

El señor GAMBOA SANCHEZ-BARCAIZ-TEGUI: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, con absoluta brevedad. La posibilidad de establecer un servicio civil distinto del sustitutorio del servicio militar, la entiendo referida a situaciones de emergencia; básicamente, catástrofes, epidemias, etc.

No creo, por tanto, que la presente enmienda altere, caso de ser admitida, consenso alguno, ya que, simplemente, evita, dada su ambigüedad, poner en manos de cualquier Gobierno la posibilidad de imponer, indiscriminada o arbitrariamente, algo tan difuso como un servicio civil de contenido, al menos, confuso. Nada más.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Para un turno a favor? (Pausa.) ¿Para un turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

Pasamos a las votaciones. En primer lugar, la enmienda número 24, del Grupo Progresistas y Socialistas Independientes.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 16 votos en contra y dos a favor, con cuatro abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Martín-Retortillo la mantiene para defenderla en el Pleno?

El señor MARTIN-RETORTILLO-BAQUER: Sí, se mantiene.

El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a votar la enmienda 673, de la Agrupación Independiente.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por cuatro votos en contra y uno a favor, con 17 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Azcárate la mantiene?

El señor AZCARATE FLOREZ: Sí.

El señor PRESIDENTE: A continuación se va a votar la enmienda 176, del señor Gamboa.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 10 votos en contra y tres a favor, con ocho abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Gamboa la quiere defender en el Pleno?

El señor GAMBOA SANCHEZ-BARCAIZ-TEGUI: No, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gamboa. Pasamos a continuación a votar el texto del proyecto.

Efectuada la votación, fue aprobado el texto del proyecto por 21 votos a favor y ninguno en contra, con dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Unzueta, me hace el favor de leerlo?

El señor SECRETARIO (Unzueta Uzcanaga): El apartado 3 del artículo 28, después de la aprobación en este momento, dice así: «Podrá establecerse un servicio civil para el cumplimiento de fines de interés general».

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a tratar un apartado nuevo a este artículo. En primer lugar, tiene la palabra el señor Pérez-Maura, para defender su enmienda número 852.

El señor PEREZ-MAURA HERRERA: Muchas gracias, señor Presidente. Señoras y señores Senadores, debo señalar, en primer lugar, que, respecto al texto que figura en la copia que tenemos repartida, se hizo ya en la Ponencia una enmienda, que repito como enmienda «in voce», y que, simplemente, sustituye la palabra «obligaciones» por «derechos», ya que es un error mecanográfico de última hora. Entregaré, en su momento, el texto al señor Presidente.

Esta enmienda, señores Senadores, yo la calificaría como una introducción y un refuerzo de la solidaridad, que, lamentablemente, en nuestro país está legislativamente abandonada. Es lógico que un régimen autoritario y personalista no facilitara, en la medida de lo posible, aquellas organizaciones, aquella legislación que hace que el ciudadano se sienta solidario con los demás por encima de todo. Esto ha supuesto un vacío que a través de la constitucionalización puede subsanarse, puede ser una llamada a la conciencia de los ciudadanos para que así suceda. No es una novedad constitucional.

El señor Martín-Retortillo acaba de recordarnos en la enmienda anterior al artículo 12 a) de la Ley Fundamental de Bonn, de 1949. En ella se recogen para casos de guerra to-

dos los temas de protección civil, pero no acaban en el caso de guerra, sino que la paz puede ser un fomento de esta solidaridad de que tanto necesita nuestra democracia.

Quiero señalar también que entre las aspiraciones que, por ejemplo, la OCDE señala para un futuro de las economías europeas, se halla el punto de la participación en la vida colectiva. Hemos pasado de una economía de consumo concreta, que busca nada más que los bienes materiales, a buscar algo más en nuestras relaciones humanas. Esto es la solidaridad. Esto es lo que se pretende simplemente en esta enmienda. Se pretende hacer una llamada constitucional a todos los ciudadanos para que se sientan colaboradores en los casos de dificultades. Esto también permite, en relación con lo que señalaba la enmienda del Grupo Progresistas y Socialistas Independientes, concretar y ampliar ese servicio civil, esas otras posibles prestaciones al país que no se limitan a lo militar, pero que, al fin y al cabo, redundan en beneficio de todos.

Yo espero que mi enmienda, que tuvo en la Ponencia 24 votos favorables, pueda, a lo largo de los debates constitucionales, llegar a ser esta realidad que yo sinceramente deseo para el bien del país.

Gracias, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Pérez Maura.

¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Xirinacs, para defender su enmienda número 463.

El señor XIRINACS DAMIANS: Si el apartado 4, nuevo, del señor Pérez-Maura no era ninguna novedad constitucional, éste sí que es una auténtica novedad que a lo mejor hará sonreír a más de un Senador. Se trata de investigar y experimentar en el terreno de la defensa civil no violenta del territorio, en vista de la gradual superación de la defensa militar. Sin embargo, la ignorancia no es excusa y cuando llega a ser conocida debe subsanarse. Y existe una gran ignorancia sobre los avances en la investigación de la superación de la vía de la fuerza para resol-

ver los conflictos que surgen entre los hombres.

En muchos países aparecen institutos de polemología que estudian las causas de la aparición de las guerras y el modo de evitarlas o acabarlas sin recurrir al uso de las armas. Y mucho más allá que estos institutos sube pujante e imparable un movimiento mundial de no violencia que en la práctica ensaya métodos nuevos o pone al día métodos viejos de resistencia pacífica, de desobediencia cívica, de defensa civil no violenta. Algunos con gran éxito, otros con no tanto, debido a la desproporción de medios existentes en la confrontación. Son de todos conocidos y no vamos aquí a comentarlos.

Los métodos de defensa civil no violenta son innatos en el hombre. El bebé, forzado por sus padres, entra espontáneamente en huelga de hambre o se niega a caminar y debe ser arrastrado. Creo que en la historia de las últimas décadas en nuestra tierra se puede afirmar que los regímenes de derechas se imponen por las armas y los regímenes de centro y de izquierda se establecen por caminos de no violencia. La actual salida del franquismo es un ejemplo insigne de la segunda alternativa. Aunque sea poco conocida la no violencia, es usada instintivamente por el pueblo y actualmente ha sido asumida explícitamente en sus grandes declaraciones por la inmensa mayoría de los partidos políticos con mayor o menor rigor de empleo. *(Rumores.)*

El señor PRESIDENTE: Por favor, silencio, señores Senadores.

El señor XIRINACS DAMIANS: No se trata aquí de hacer agravio a los Ejércitos. Al contrario, mientras no conozcamos maneras mejores de defendernos, nos vemos obligados a buscarlas por la fuerza. Y quienes dedican sus días de juventud a prepararse, o toda su vida a velar por la defensa, merecen nuestro mayor aprecio. Pero que ello no sirva de barrera para buscar nuevos caminos que superen la trágica espiral inexorable de la violencia que acaba dando el poder no al más apto, sino al más fuerte, y que siembra la tierra de muertos, lisiados, perturbados,

exiliados, abandonados, empobrecidos. Por esto, sería ejemplar que los mismos organismos del Estado actualmente dedicados a la investigación y organización militar se dedicasen también a esta otra investigación y experimentación de métodos defensivos, si no dan mucho que pensar al pueblo, no sea que defendiesen únicamente intereses que no tienen otra razón que la fuerza.

Me veo en el deber de decir muy alto que aunque un cierto espíritu de no violencia alienta las fuerzas políticas actuales, a pesar de ello la no violencia es la gran desconocida. Se invierten millones de dinero y de horas de trabajo en perfeccionar los dispositivos militares que, yo reconozco, tienen su lógica y sus exigencias. Y prácticamente nadie investiga en el rigor, la lógica y las exigencias de la defensa civil no violenta.

En algunos países —en el nuestro aparece también en embrión— se está desarrollando legal y realmente un sistema de defensa civil que es un falso remedio de la lucha no violenta. Leyes de movilización general de la población que convierten todo el país en un inmenso ejército sin uniforme. No es esto a lo que me refiero. Se trata de algo totalmente diferente, que requiere la participación libre y creadora de un tipo nuevo de ciudadano que hay que conseguir, que esté curado de la alienación militar que hoy padecemos. El alienado de lo militar se desentiende y hace dejación total de las obligaciones defensivas que tiene todo hombre, en manos de un cuerpo técnico y superespecializado, y él queda en un estado infantil e irresponsable.

Si nos decidiésemos a investigar por ahí, a buen seguro nos ahorraríamos muchos sufrimientos y mucho dinero. Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xirinacs.

¿Turno a favor? *(Pausa.)* ¿Turno en contra? *(Pausa.)* ¿Portavoces? *(Pausa.)*

Pasamos, pues, a las votaciones. En primer lugar, la enmienda número 852, del señor Pérez-Maura.

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda por ocho votos a favor y cinco en contra, con 11 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la enmienda del señor Xirinacs, porque no es incompatible con la anterior.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 20 votos en contra, con cuatro abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Xirinacs mantiene su enmienda?

El señor XIRINACS DAMIANS: Sí, señor Presidente. *(La señora Landáburu indica su deseo de apoyar la enmienda del señor Xirinacs.)*

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Xirinacs y señora Landáburu.

¿El señor Secretario quiere dar lectura a la enmienda del señor Pérez Maura, que pasa a ser apartado 4 del artículo 28?

El señor SECRETARIO (Unzueta Uzcanaga): El nuevo apartado 4 del artículo 28 dice: «Una ley de protección civil regulará los deberes y obligaciones de los ciudadanos en los casos de emergencia, catástrofe o calamidad pública que se produzcan en tiempo de guerra y de paz».

Artículo 29 El señor PRESIDENTE: Entramos en la discusión del artículo 29, apartado 1. La primera de las enmiendas es la 363, del señor Olarra. El señor Olarra tiene la palabra para defensa de su enmienda.

El señor OLARRA UGARTEMENDIA: La retiro, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarra.

La segunda enmienda es de la Agrupación Independiente. El señor Azcárate tiene la palabra para defensa de la enmienda.

El señor AZCARATE FLOREZ: La defensa la hace el señor Fuentes Quintana, en nombre del Grupo.

El señor PRESIDENTE: Presento mis excusas al señor Azcárate, porque el Letrado me dice que la enmienda es del señor Fuentes

Quintana. El señor Fuentes Quintana tiene la palabra.

El señor FUENTES QUINTANA: Muchas gracias, señor Presidente, señoras y señores Senadores, el propósito de la enmienda al apartado 1 del artículo 29 es triple. Por una parte se propone sustituir dos expresiones que se estiman desafortunadas. En segundo lugar se propone ordenar el contenido del apartado 1, y en tercer lugar se propone suprimir la frase final, que se considera superflua, en vista del contenido del resto del artículo.

Comencemos con las dos expresiones cuya sustitución se propone. En primer lugar dice el proyecto que el levantamiento de las cargas públicas constituye un objetivo general de la imposición para todos los ciudadanos. Esta expresión no es que sea anacrónica, es que simplemente no es usual y, por tanto, se propone sustituirla por la expresión mucho más llana de afirmar simplemente que los ciudadanos «contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos».

Hay otra sustitución que es la expresión «capacidad contributiva». Sin duda esta expresión está tomada del artículo 53 de la Constitución italiana, que prevé lo mismo. Exactamente emplea las mismas palabras: «capacidad contributiva».

La doctrina italiana se ha movido durante varios años en la perplejidad de interpretar (se señalaba capacidad contributiva) si ésta era distinta de la capacidad económica del contribuyente y, después de muchas discusiones y de pérdida de tiempo, se ha llegado a la convicción de que no puede existir diferencia alguna entre «capacidad contributiva» y «capacidad económica». Conscientes de esta situación, la enmienda propone la sustitución de la expresión «capacidad contributiva» por «capacidad económica».

En segundo lugar, el propósito de la enmienda es ordenar el contenido del apartado 1 del artículo 29. Esa ordenación se realiza en torno al fin prioritario de la imposición; y el fin prioritario se considera que es asegurar la justicia. Ningún sistema tributario tiene un fundamento firme si no es aceptado ese sistema tributario por el conjunto de los ciudadanos y, conscientes de esta situación, ese fin prioritario de la justicia es

en torno al cual se trata de articular el contenido del apartado 1 del artículo 29.

¿Cuál es el contenido concreto que a la justicia se da? El contenido concreto que a la justicia pretende darse está basado en un conjunto de principios que son:

En primer lugar la generalidad. Todos los españoles, todos los ciudadanos tienen la obligación de contribuir a la imposición, pero todos en función de la capacidad; es decir, de la capacidad económica, que constituye el criterio para reparto de la imposición, para reparto de los costos de la imposición entre los contribuyentes.

En segundo lugar hay otro criterio fundamental, que es el de la igualdad. La igualdad de todos los ciudadanos ante la ley tiene una tradición en materia tributaria, afirmando que en situaciones iguales, de igual capacidad económica, se entiende que todos los ciudadanos deben pagar los mismos impuestos y, por lo tanto, la igualdad debe estar mediatizada por el criterio de capacidad.

Y, finalmente, el criterio de la progresividad. Es éste un criterio que se juzga fundamental para orientar la Constitución y para orientar el reparto de la imposición. Y se juzga fundamental porque realmente el área cultural en que España está inscrita defiende la progresividad de la imposición como criterio de asignación de las cargas públicas.

Naturalmente, esta tendencia que defiende la progresividad se incorpora a la revisión en la ordenación que del artículo se realiza.

En suma, el primer apartado del artículo queda integrado en torno al concepto fundamental de la justicia de la imposición, fin prioritario de la misma. Ningún sistema tributario, sea el que sea, puede establecerse y puede regir en un país, si los ciudadanos no aceptan la justicia de la distribución. De aquí que este criterio sea el que sirva como piedra angular para edificar el conjunto de los impuestos.

Finalmente, se considera que habiendo afirmado que el fin fundamental de la imposición es la justicia, y sabiendo que la capacidad de pago constituye la base para el reparto de la imposición, la última frase del primer párrafo, que afirma que el conjunto de los impuestos no tendrá en ningún caso alcance confiscatorio sobre, porque, lógicamente, la justicia

pugna, se opone a la confiscación, y de esta manera se propone la eliminación, por superflua, de esa frase que no se considera idónea.

Esta es, en síntesis, la fundamentación de la enmienda que presenta la Agrupación Independiente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fuentes Quintana.

¿Algún turno a favor? (Pausa.) ¿Algún turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.) El señor Martín-Retortillo tiene la palabra.

El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER: Para decir sólo, en dos palabras, que el grupo PSI apoya esta enmienda, porque entendemos que constituye una sustanciosa mejora, y adelantamos, para ahorrar intervenciones posteriores, que pensamos apoyar esta enmienda 674 al apartado 2, referente al gasto, novedad que nos parece muy interesante, y ojalá pase a ser apartado 3 de este artículo el actual apartado 2, que integra el principio de la equidad, con la enmienda de la mejora de estilo que ha propuesto el Senador señor Cela.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. El señor Sánchez Agesta tiene la palabra.

El señor SANCHEZ AGESTA: Brevemente, para decir que me parece que, por más consenso que haya, no hay más remedio que apoyar lo que es indiscutiblemente un perfeccionamiento del texto, y en este sentido se pronunciará mi voto.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Villodres.

El señor VILLODRES GARCIA: Señor Presidente, el Grupo de UCD está a favor de las enmiendas de la Agrupación Independiente, muy especialmente con la sustitución de la expresión «carga fiscal». La expresión «carga fiscal» ha sobrevivido, a pesar del cambio experimentado a lo largo de la historia, por el concepto de impuesto. Fue establecida en el año 138 por el Emperador Antonino, que decía: «Todas las cargas públicas han de ser soportadas en proporción a la fortuna». Al Senador Antonino, por sus virtudes, se le dio

por el Senado romano el título honorífico de Pío, aunque es lógico pensar que el Senado romano no pudiera imaginar que la expresión «carga fiscal» llegaría hasta nuestros días.

Nuestro ordenamiento tributario comete el error de utilizar frecuentemente la expresión «carga fiscal». La propia Ley General Tributaria, en su artículo 3.º, en los principios generales del orden tributario, al emplear la expresión «carga fiscal» no es acertada, y conforme a la psicología fiscal sólo sirve para aumentar innecesariamente la resistencia fiscal del contribuyente. La doctrina se ha preocupado de lo equivocada que es esta expresión de «carga fiscal», y resulta expresiva la afirmación de Einaudi cuando dice que es menester quitarle al impuesto la tacha de algo que pesa, de algo que grava, de algo que quita; pero la doctrina utiliza esa expresión. Concretamente, el propio Senador señor Fuentes Quintana es autor de un trabajo publicado en la revista de «Derecho financiero y Hacienda Pública» con el título de «Los principios del reparto de la carga tributaria en España». Tal vez el Senador señor Fuentes Quintana utilizó la expresión deliberadamente porque consideraba que en el caso de su estudio procedía hablar auténticamente de carga tributaria.

En el informe del Comité Fiscal y Financiero de la Comisión de la Comunidad Económica Europea, en el llamado «informe Newman» se refiere a la carga fiscal, pero hace unas interesantes aclaraciones para la supresión de este término.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Fuentes Quintana para rectificar. (Pausa.)

La enmienda siguiente es la 254. Tiene la palabra, para defenderla, el señor Cela.

El señor CELA Y TRULOCK: La retiro, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cela. Habiendo retirado sus enmiendas los señores Olarra y Cela, solamente queda la número 674, del señor Fuentes Quintana, que se pone a votación.

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda por 25 votos a favor.

El señor PRESIDENTE: El señor Unzueta dará lectura a la enmienda que acabamos de aprobar.

El señor SECRETARIO (Unzueta Uzcanaga): El nuevo apartado aprobado dice así: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad».

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación pasamos a debatir la segunda parte de esta enmienda 674 del señor Fuentes Quintana, que propone un apartado 2, nuevo, con lo cual el apartado 2 pasaría a ser el 3.

Tiene la palabra el señor Fuentes Quintana.

El señor FUENTES QUINTANA: El propósito de la enmienda consistente en añadir un segundo apartado al artículo 29 está basada en dos principios fundamentales: en un deber de coherencia y en una obligación de la trascendencia que el gasto público tiene en las comunidades contemporáneas.

En primer lugar, un deber de coherencia. Se ha afirmado en el apartado anterior que el conjunto de los impuestos vigentes en un país debe distribuirse con arreglo al criterio de la capacidad económica y con arreglo al principio de progresividad. Pero la Hacienda no solamente tiene la mano del impuesto para recaudar el conjunto de los fondos que necesita con objeto de satisfacer las necesidades públicas y atender a los gastos, sino la mano del gasto público que completa, como es lógico, la mano de la imposición. Constituye una incoherencia separar estas manos, ya que la Hacienda podría destruir con la mano del gasto público lo que ha construido y edificado con la mano del impuesto. Por lo tanto, un deber de coherencia.

Lógicamente parece que si los principios de progresividad imperan en el campo del gasto, deben tener la misma traslación o aplicación en el campo correspondiente del gasto público, es decir, ingreso y gasto público deberían estar regidos por el mismo principio y de aquí que la enmienda propuesta afirme que el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos.

Me importa puntualizar que esta asignación a la que el precepto obliga es una asignación que está construida de cara a los intereses individuales, porque el gasto público satisface necesidades de los individuos y, por lo tanto, cuando estamos defendiendo que el gasto público tenga esa asignación equitativa de los recursos públicos, lo que en definitiva tratamos de posibilitar es que el ciudadano concreto tenga el derecho al acceso a un conjunto de suministros, de bienes públicos que ha conseguido, o, mejor, que ha conseguido el Estado poder satisfacer gracias a la mano correspondiente de los ingresos. Por lo tanto, la coherencia parece obligar a esta transferencia, a esta traslación. Pero hay, en segundo lugar, un principio de trascendencia. Cuando se analiza el texto constitucional y se comprueba el conjunto de derechos que el mismo concede a los ciudadanos españoles se comprueba que en adelante el gasto público tendrá, lógicamente, que aumentar. Es evidente, además, que quienes han analizado el contenido del gasto público han contrastado las deficiencias del servicio público en todas las ramas de la actividad que, naturalmente, fuerzan a un crecimiento futuro del gasto y es evidente que si este gasto público no se plegase a los principios de equidad, estaríamos incumpliendo con la mano del gasto lo que la imposición va a tratar de conseguir por la vía de la reforma tributaria en el campo de la imposición.

Hay, por lo tanto, un principio de trascendencia, de importancia de esta aplicación al campo del gasto público. Pero el gasto no solamente constituye en este sentido un derecho del ciudadano; mi derecho, en cuanto ciudadano, a los gastos públicos no es sólo a que prepondere la equidad en su distribución, sino también a que su programación, su presupuestación y su control tengan lugar con arreglo a los principios de economicidad y eficiencia. La economicidad y eficiencia deben ser mandatos obligados para el gasto público y para el gasto privado y, naturalmente, son derechos de los individuos, porque en la medida en que el Estado despilfarrara el contenido del conjunto en sus gastos públicos, es evidente que lo que está haciendo es malbaratar el conjunto, no defender el conjunto de los derechos individuales de los

ciudadanos. Y de ahí que este deber de coherencia se concrete en esos dos principios que propone la enmienda de la Agrupación Independiente: Los recursos públicos deberán realizar una situación equitativa a través de los gastos, y su programación, ejecución y control deberá plegarse a los principios de eficiencia y economicidad. Sólo así los derechos de los ciudadanos quedarán garantizados debidamente en el campo del gasto, igual que el apartado 1 lo hace en el campo de la imposición.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fuentes Quintana. Sigo entendiendo que la enmienda es del señor Fuentes Quintana, si no voy a tener que retirar las excusas presentadas al señor Azcárate.

¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Ramos.

El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECI-LLA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, el Grupo Socialista votó a favor del apartado anterior propuesto por el Senador señor Fuentes Quintana, y quiero destacar, puesto que el Presidente insiste que pienso que también ha tenido participación en la redacción la Senadora Gloria Begué.

Hemos votado a favor por entender que la redacción propuesta por el Senador Fuentes Quintana era preferible a la que nos remitía el Congreso de los Diputados. Y en este nuevo apartado que se nos propone para el artículo 29, nuestra satisfacción es, de alguna manera, mayor. Creemos que la constitucionalización del gasto público supone, evidentemente, un progreso y un avance importante, y por eso afirmo desde ahora que también votaremos a favor.

El consenso —y quiero con ello rectificar quizá muy amablemente a nuestro querido compañero el Senador Sánchez Agesta— consiste, fundamentalmente, en aceptar lo que de positivo tiene la propuesta de los demás, porque el consenso en ningún caso ha sido nunca cerrado, sino que siempre ha estado abierto precisamente a los perfeccionamientos técnicos y a enmiendas como ésta, que gustosamente votamos, del Senador Fuentes Quintana.

El señor PRESIDENTE: El señor Jiménez Blanco tiene la palabra.

El señor JIMENEZ BLANCO: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, casi para lo mismo. El Senador señor Ramos me ha pisado la idea. El llamado consenso, es decir, el espíritu de compromiso, es una idea dinámica, es una idea que está viva y que, por supuesto, ni es sólo española ni es de hoy.

Alguien me decía hace unas horas que el New Deal de Roosevelt fue una especie de consenso, yo diría un anticipo de los Pactos de la Moncloa, que sirvió para salvar la gravísima crisis de 1929. El consenso no es un juego mecánico; es algo que está vivo, y enmiendas como ésta se insertan perfectamente en el espíritu de compromiso que el consenso supone. Por eso Unión de Centro Democrático ha votado a favor del punto primero, y votará a favor del punto segundo, esperando que todos se sumen a este consenso, lo que podría ser un preanuncio de que a lo mejor el consenso abarca a toda la Constitución, y en este momento no me refiero a nadie en concreto.

El señor PRESIDENTE: El señor Azcárate tiene la palabra.

El señor AZCARATE FLOREZ: No entendí muy bien cuál es la situación de esta enmienda. ¿Tiene que aparecer a nombre del señor Fuentes Quintana y no de la Agrupación Independiente como está impresa?

El señor PRESIDENTE: Esa es la realidad de la situación, porque si no no la hubiera podido defender el señor Fuentes Quintana.

El señor AZCARATE FLOREZ: Yo esta mañana mandé una nota al señor Presidente de la Comisión diciendo que en la sesión de la tarde iba a actuar como portavoz del Grupo el señor Fuentes Quintana.

El señor PRESIDENTE: Eso sería si el señor Azcárate no hubiera votado, pero hemos visto votar al señor Azcárate y hemos pensado que la enmienda era del señor Fuentes Quintana, porque el que vota es el portavoz.

El señor AZCARATE FLOREZ: Me parece que es un lamentable error por mi parte, y desearía que no se hubiera producido. Hubiera bastado una pregunta de la Presidencia para que se hubiera aclarado en el acto.

El señor PRESIDENTE: Queda aclarado, señor Azcárate. Tiene la palabra el señor Sánchez Agesta.

El señor SANCHEZ AGESTA: Como portavoz, y si no para alusiones, pues me han aludido directa e indirectamente dos veces, pero prefiero como portavoz.

Simplemente para decir que no considero el consenso en ningún caso como una cosa mala, sino como algo magnífico. Lo que yo quiero —y en este aspecto celebro mucho que mi observación haya suscitado estas rectificaciones— es que ese consenso o ese acuerdo tenga ese carácter dinámico y esté abierto a los perfeccionamientos del texto. Nada más.

El señor PRESIDENTE: ¿Entiende esta Presidencia que se aprueba por consenso esta modificación? (Varios señores SENADORES: ¡Será por asentimiento!) Es igual. Al fin y al cabo asentir todos es consentir todos.

¿Se aprueba? (Asentimiento.) Queda aprobada.

Ruego al señor Secretario dé lectura al apartado 2 de este precepto.

El señor SECRETARIO (Unzueta Uzcanza): El párrafo «consensuado» dice así: «El gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación, ejecución y control responderán a los principios de eficiencia y economicidad».

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Entramos ahora en el apartado 3, antiguo segundo, al que solamente hay presentada una enmienda del señor Cela, quien tiene la palabra para su defensa.

El señor CELA Y TRULOCK: Es una enmienda modestísima, que ya está en el ánimo de todos ustedes. Consiste en sustituir el artículo indeterminado femenino «una» por el artículo determinado «la», con lo que co-

bra más sentido y el texto pasaría a decir: «Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales con arreglo a la ley».

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cela.

¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.) Entonces, pasamos a votar la enmienda.

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda por unanimidad, con 25 votos.

El señor PRESIDENTE: Ruego al señor Secretario dé lectura al precepto tal como queda.

El señor SECRETARIO (Unzueta Uzcanza): Dice así: «Sólo podrán establecerse prestaciones personales o patrimoniales con arreglo a la ley».

El señor PRESIDENTE: Antes de entrar en la discusión del artículo 30 vamos a debatir una enmienda, presentada por el Senador señor Ramos de viva voz, en la que se solicita que el artículo 23 pase al lugar primitivo que tenía.

El Senador señor Ramos tiene la palabra para defender esta enmienda.

El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECI-LLA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, muy brevemente.

En efecto, mi Grupo votó en contra de la propuesta del Senador señor Sánchez Agesta, consistente en que el artículo 23 pasara a ocupar un lugar en el artículo 29, teniendo en cuenta, sin embargo, que él mismo ya había establecido la salvedad de que las garantías que reconoce el artículo 48 podían aplicarse al artículo 23, pero que era una cuestión de sistemática. Sin embargo, en este momento de la discusión del texto constitucional, y habiendo acordado ya la Comisión que el artículo 22 —que es el que se refiere al derecho de fundación— pase a otro lugar del texto, nos parece que, aunque entonces pensábamos que no se debía cambiar de lugar el artículo 23, en este momento concreto tiene menos sentido; porque si Sus Señorías analizan los derechos que se reconocen en esa Sección —en el artículo 18 el derecho de elegir resi-

dencia, en el artículo 19 el de libertad de expresión, en el artículo 20 el derecho de reunión y en el artículo 21 el derecho de asociación— sobraba el derecho de fundación, porque no tiene la categoría de los derechos que se vienen reconociendo. Pero no estorba el que se reconoce en el artículo 23, de que los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos directamente o por medio de representantes o a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos con los requisitos que señalen las leyes.

Por esa razón es por la que nos hemos permitido presentar la enmienda «in voce» para tratar de que el artículo 23 retorne a su lugar originario, que es inmediatamente detrás del artículo 22 —que en este caso ya no existe, sino detrás del 21—, que reconoce el derecho de asociación.

Espero encontrar la comprensión de la Comisión y del señor Sánchez Agesta, pues creo que, desaparecido ya el que regulaba el derecho a la fundación, tiene perfecto encaje en la Sección primera y con ello evitamos modificar, a su vez, el artículo 48 para dar una participación en los asuntos públicos y el acceso a las funciones públicas.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno a favor? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Jiménez Blanco.

El señor JIMENEZ BLANCO: Yo pensaba que esto había sido una introducción definitiva, la del Senador Sánchez Agesta, pero si vamos a cambiar artículos, vamos a cambiarlos todos.

Yo tenía dos o tres pequeños granos que me habían quedado en la historia de los debates de estos días que quería someter a la consideración de la Comisión para ver si era posible aprovechar esta oportunidad que nos brinda el señor Ramos de rectificación y que yo, por otra parte, comparto en cuanto a la posibilidad de protección del artículo que se ha cambiado del lugar que se había situado.

En este sentido yo propondría dos enmiendas «in voce» también, de cambio de artículos, aprovechando la oportunidad.

La primera era que el artículo 11 bis pasara a ser apartado 2 del artículo 11. Y el artículo 11 quedara redactado en los términos

que en la nota que tengo en la mano se proponen y que tenía preparada para aprovechar cualquier oportunidad que se produjera.

En segundo lugar, tengo otra segunda enmienda y es que el artículo 24 quede desglosado en dos artículos diferentes. El primero con los dos primeros apartados del artículo 24 actual, y el segundo con los tres siguientes apartados.

La razón de justificación figura en el documento que acompaño y son planos absolutamente distintos. Los dos primeros planos hacen referencia a garantías de índole jurídico procesal relativo a la tutela de derechos e intereses legítimos de la persona. Y los apartados tres a cinco del mismo artículo no son sino la consagración del principio de la legalidad penal.

Creo que puestos a afinar en materia de sistemática, ésta puede ser una oportunidad, como digo, aprovechando el deseo del señor Ramos, de realizar una rectificación a una disposición anterior. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez Blanco. Aunque son tres las enmiendas «in voce» presentadas, la Presidencia entiende, en aras de la brevedad, que se pueden discutir conjuntamente y votar por separado.

El señor SANCHEZ AGESTA: No sé si se sigue discutiendo. Ha habido un turno a favor.

El señor PRESIDENTE: Sí, se sigue discutiendo. Apenas tiene tiempo la Presidencia de decir una palabra para explicar la forma de trabajo cuando ya la interrumpen.

¿Algún turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Sánchez Agesta.

El señor SANCHEZ AGESTA: Consumo un turno en contra de la propuesta del señor Jiménez Blanco, por dos tipos de fundamentos. Uno puramente formal.

El artículo 85 del Reglamento, aunque se refiere a otra materia, tiene un alcance muy concreto. Dice: «Los Senadores serán llamados a la cuestión siempre que notoriamente estuvieren fuera de ella, ya por digresiones extrañas al punto de que se trata, ya por vol-

ver nuevamente sobre lo que estuviere discutido o aprobado».

Indiscutiblemente, aunque no haya ningún artículo concreto que prohíba volver a discutir lo ya aprobado, sin duda alguna, como algo que va de ello el Reglamento lo supone e incluso indica que el Presidente puede llamar la atención a alguien que se refiera a algo que ya ha sido aprobado anteriormente.

Me parece en principio tan lógico que como todos los señores Senadores habrán visto ha bastado simplemente que se anuncie la posibilidad de que se levante la veda para seguir discutiendo derechos anteriores que ya han sido aprobados por la Comisión, para que el señor Jiménez Blanco haya aprovechado esa ocasión para proponer varias reformas en los artículos anteriores separando artículos entre sí.

No entro a discutirlo; tendría que examinarlo más despacio, si tienen fundamento; creo que sí, dadas las luces y la inteligencia del señor Jiménez Blanco y su conocimiento jurídico, de que es correcta la medida, y que quizá pueda realizarse en el Pleno, pero me parece que aquí no, porque si no volveríamos atrás y empezaríamos a discutir desde el artículo 1.º

Aparte de esta cuestión puramente de procedimiento reglamentario, creo que es patente volver a insistir en la conveniencia de que ese artículo «Derechos y deberes del ciudadano», fundamental por excelencia, se mantenga en el sitio indicado.

Los argumentos que se han dado me parecen debilísimos. La Sección primera tiene una protección especial. Ya salí al paso de esa observación antes de que se me hiciera y advertía —y en la misma enmienda figura— que debía completarse con otra enmienda, que, como es natural, está también formulada, incluyéndola, sin necesidad de forzar nada, en el artículo 48.

El artículo 48, al establecer dos tipos de protecciones, no se refiere únicamente a la Sección primera, y luego a la Sección segunda (en cuyo caso resultaría que había una violencia), sino que se refiere a la Sección primera, y a otros artículos que menciona expresamente. Basta simplemente con poner una «y», y el 23 o el 29, que sería, como es natural, el nuevo propuesto, para que este artículo

tenga exactamente la misma protección que tenía, y, en cambio, esté presentado en el lugar que le corresponde. Bastaría, simplemente, con que en el capítulo IV, artículo 48, párrafo segundo, donde dice: «Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos, reconocidos en el artículo 13», dijera: «en los artículos 13 y 23». Y estas excepciones son tan notables, que no sólo se han incluido en ese artículo 13, sino, también, en el artículo 28, que se refiere a la objeción de conciencia. Nada más, pues no quiero molestar a los señores Senadores.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Ya he dicho varias veces al señor Sánchez Agesta que nunca molesta con sus palabras. ¿Señores portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Villar Arregui.

El señor VILLAR ARREGUI: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, es verdad que la tentación de revisar los artículos ya aprobados en los que se aprecia alguna deficiencia puede sugerir a no pocos Senadores un intento similar al que, con la mejor voluntad del mundo, acaba de poner de manifiesto el Senador Jiménez Blanco.

Pienso con el Senador Sánchez Agesta que hay que ceñirse al Reglamento y que en el mismo hay una prohibición de volver sobre lo ya aprobado.

Pero pienso más. Creo que el artículo 23 de la Constitución consagra lo que en una terminología un tanto trasnochada, la de Jellinek, se llama el «Status active finitatis». Y el derecho a la participación pública no universaliza, no corresponde a todos. Es menester que se cumplan las condiciones que la ley electoral en su caso fije. De tal manera esto es cierto, que algún sector de la dogmática jurídico-pública ha inscrito entre los órganos del Estado al propio censo electoral.

No es, por tanto, un derecho de todos. No es, por tanto, un derecho de la persona, como lo es el de reunión o el de asociación, a los que se ha referido, con razón, el señor Ramos, sino que trata de la consagración del ejercicio activo de los ciudadanos a través de la participación en las elecciones.

Por tanto, si la Sección segunda se titula «De los derechos y deberes de los ciudada-

nos», el cabal emplazamiento de ese artículo debe estar dentro de la Sección segunda y con la salvaguarda que, en orden al eventual recurso de amparo, le puede conferir el artículo 48, mediante la adición de una enmienda a él propuesta por el Senador Sánchez Agesta.

El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECI-LLA: Pido la palabra.

El señor PRESIDENTE: ¿En turno de portavoces o para rectificar, señor Ramos?

El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECI-LLA: En turno de portavoces y para rectificar, con ello ahorro un turno a la Comisión.

Si se hubiera tratado de modificar algo ya aprobado, no hubiera tenido la osadía de intervenir, pero entiendo que se trataba de una cuestión de sistemática que, efectivamente, si bien aprobada por el propio trámite en la Comisión, obliga en ocasiones a rectificar los planteamientos, y es por lo que me he permitido hacer esta enmienda «in voce», tratando de rectificar, o de volver sobre lo que ya, de alguna manera, se había acordado. No hubiera hecho esto, por supuesto, y entiendo que hubiera estado legitimado el señor Presidente para llamarme a la cuestión, si se tratase de modificar algo sobre lo que ya se ha aprobado.

Respecto de cuál sea el lugar más apropiado para que este principio o este derecho quede reconocido, es cierto, como dice el Senador Villar Arregui, que el único lugar es en el artículo 23 de esa Sección primera, en el que se habla de los ciudadanos; en todos los demás artículos se habla de «la persona», de «todos», e incluso de «los españoles»; pero sorprendentemente esta mañana hemos aprobado, también, que el artículo 28, que estaba bajo la rúbrica «De los derechos y deberes de los ciudadanos», empiece diciendo: «Los españoles tienen el derecho y la obligación de defender a España».

Creo, por ello, que quizá no hay razones suficientes que avalen la postura del señor Villar Arregui. Por el contrario, lo que propongo es perfectamente razonable, pues aunque en este artículo 23 se habla de los ciudadanos, como se reconocen otros derechos en

esa Sección primera, con ello nos evitamos (y hay una cierta economía procesal) tener que hacer la reforma también del artículo 48 para buscar la adecuada protección a este derecho. Por ello insisto en que el artículo 23 vuelva a su sitio originario. Gracias.

El señor PRESIDENTE: ¿Había pedido la palabra el señor Jiménez Blanco?

El señor JIMENEZ BLANCO: Por segunda vez me la concede sin haberla pedido, y por segunda vez me la tomo.

El señor PRESIDENTE: Por lo menos para turno de portavoces tiene derecho a usarla.

El señor JIMENEZ BLANCO: No sólo tengo el derecho, sino el placer de corresponder a esa petición de palabra, sin haber sido pedida, por tan amable Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias. Hoy la sesión parece Versalles. (Risas.)

El señor JIMENEZ BLANCO: El hecho es que realmente yo creo que el Senador señor Sánchez Agesta, si bien en principio lleva razón en una especie de pureza de procedimiento, sin embargo de alguna manera debe ser un tanto condescendiente, porque, en definitiva, lo único que queremos es un ajuste de lo que ya vamos viendo a través de la ley, porque conforme van pasando los artículos bis y ter, se van produciendo fenómenos que obligan a meditar.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jiménez Blanco. Señores Senadores, por ser una cuestión puramente sistemática, la Mesa ha estado deliberando el tema y ha acordado poner a votación las tres enmiendas.

El señor SANCHEZ AGESTA: Pido la palabra.

El señor PRESIDENTE: ¿Para cuestión de orden, señor Sánchez Agesta?

El señor SANCHEZ AGESTA: No, pero me parece que para rectificar o como portavoz puedo tener derecho a hablar.

El señor PRESIDENTE: No sabemos en qué concepto quiere rectificar, pero, en todo caso, tiene la palabra.

El señor SANCHEZ AGESTA: Señor Presidente, se está hablando de este problema como si se tratara de una pura cuestión de sistemática sin importancia, pero la sistemática tiene su importancia. Aunque se haya cambiado el enunciado del artículo 28, según advertí al señor Ramos, y se haya empleado la expresión «los españoles», lo cierto es que sigue bajo un epígrafe, Sección segunda, que habla de los derechos y deberes de los ciudadanos, y, por consiguiente, los que se contengan bajo esa rúbrica son derechos y deberes de los ciudadanos; hecho, como es natural, que tiene una enorme importancia en su interpretación, y que el día de mañana, a lo largo del tiempo, es un hecho que se notará.

Indiscutiblemente, si hay un derecho y deber del ciudadano por excelencia, es el derecho de voto y el derecho a ocupar cargos públicos.

No se trata de ninguna cosa formal. Aunque el artículo dijera que «los españoles tienen derecho a votar y los españoles tienen derecho a participar en las funciones públicas», yo habría sostenido la misma tesis. Si me apoyé en la palabra «ciudadanos» fue porque, si mal no recuerdo, empecé diciendo que la enmienda no necesitaba apenas defensa; estaba clamando por su lugar desde las mismas palabras del texto, puesto que comenzaba expresando que «los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos». Pero si hay un derecho del ciudadano materialmente, repito, aunque dijera que «los españoles tienen el derecho a participar en los asuntos públicos», es precisamente el derecho de voto.

Decía yo que era un poco anticuada esta clasificación de los derechos del ciudadano, pero es que el derecho de voto y el derecho a participar en los asuntos públicos es lo que va a dar lugar a esa terminología en la misma declaración de 1789, siguiendo una distinción que además tiene una cierta coherencia en el texto constitucional, ya que dicha declaración de 1789 distingue fundamentalmente entre los derechos del hombre y los derechos del ciudadano, y aquí se habla de

derechos humanos y libertades públicas y de derechos del ciudadano.

Esta terminología es la que acepta el texto y, por consiguiente, en gran parte coincide con la redacción trascendente de la declaración de 1789; y digo trascendente porque cuando se habla de derechos humanos, de los derechos del hombre, se piensa con un sentido universal: son todos los hombres, sean o no ciudadanos, los que tienen ese derecho.

Cuando se habla de los ciudadanos, y el epígrafe en cabeza dice «De los derechos y deberes del ciudadano», son derechos y deberes que están limitados a dicho ciudadano y que se marcan precisamente, tanto en el sentido de un deber, como de un derecho de ellos. Por eso es correcto que en la nueva redacción se diga que «los españoles tienen el derecho a defender España» y que esté precisamente en este Título, porque son los españoles, como ciudadanos españoles, los que tienen ese derecho y deber de defender España.

El señor PRESIDENTE: La Mesa le ha escuchado, como siempre, con sumo gusto, señor Sánchez Agesta, pero ya ha tomado acuerdo porque entiende que la sistemática está pendiente, y tanto es así que hay una enmienda de UCD al artículo 111 que se está esperando llegar a este artículo para ver si dicho precepto pasa a ocupar un lugar anterior, que sería el 24, o continúa en el mismo. Por tanto, la Mesa se reafirma en su criterio y pasamos a votar las enmiendas.

El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER: Señor Presidente, ruego que se lea cada enmienda para saber en qué consiste.

El señor PRESIDENTE: Se van a leer por el señor Secretario.

El señor SECRETARIO (Unzueta Uzcan-ga): La primera enmienda de viva voz del Grupo Socialista dice así: «Que habiendo pasado el artículo 22 a otro lugar, se mantenga el artículo 23 en su lugar originario».

El señor PRESIDENTE: Se somete a votación la enmienda del Grupo Socialista.

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda por 21 votos a favor y tres en contra, con una abstención.

El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a continuación a la lectura de la primera de las enmiendas de Unión de Centro Democrático.

El señor SECRETARIO (Unzueta Uzcan-ga): La enmienda propone que el actual artículo 11 bis (que debería ser el 12 del dictamen) pase a ser apartado 2 del artículo 11. El artículo 11 quedaría redactado en los siguientes términos y aprobados por la Comisión:

«1. La nacionalidad española se adquiere, se conserva y se pierde de acuerdo con lo establecido por la ley.

»2. Ningún español de origen podrá ser privado de su nacionalidad.

»3. El Estado podrá concertar tratados de doble nacionalidad con los países iberoamericanos o con aquellos que hayan tenido o tengan una particular vinculación con España. En estos mismos países, si sus leyes no lo prohíben expresamente, y aun cuando no reconozcan a sus ciudadanos un derecho recíproco, podrán naturalizarse los españoles sin perder su nacionalidad de origen».

Y sigue diciendo la explicación que, de esta forma, la numeración de los artículos del dictamen correría una cifra.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación de la enmienda.

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda por 23 votos a favor, con dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: Seguidamente, por el señor Secretario, se va a dar lectura a la segunda enmienda de Unión de Centro Democrático.

El señor SECRETARIO (Unzueta Uzcan-ga): Se propone que el actual artículo 24 quede desglosado en dos artículos diferentes. El primero de ellos tendría dos apartados, los que figuran con los números 1 y 2. El artículo nuevo numerado de momento como 24 bis, constaría de tres apartados, que serían los actuales 3, 4 y 5 del artículo 24.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la votación.

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda por 23 votos a favor, con dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a tratar la enmienda número 324 (hemos quedado esta mañana en que se trataría en este momento), del señor Sánchez Agesta, quien tiene la palabra para defenderla.

El señor SANCHEZ AGESTA: Señor Presidente, ante todo quería proponer una mínima enmienda «in voce». (*Rumores.—El señor Presidente agita la campanilla.*) En lugar del título para esta nueva Sección que se propone: «Familia, propiedad, trabajo», mi propuesta es que diga: «Familia, economía, trabajo». Conste que no es por no destacar el derecho de propiedad, sino porque, realmente, en ese artículo iba a comprenderse, junto al derecho de propiedad, el derecho de fundación a él trasladado y la libertad de empresa en el marco de una economía de mercado y, en su caso, de la planificación del artículo 34. Por consiguiente, me parece que este enunciado es mucho más amplio.

Como comprenderán el señor Presidente y los señores y señoras Senadores aquí presentes, la defiendo sin mucho entusiasmo después de la suerte que han corrido mis ardores sistemáticos en el caso anterior. Sin embargo, voy a exponer sucintamente, puesto que está en el texto, sus fundamentos, presumiendo por anticipado que va a tener un resultado negativo; pero no la retiro porque me parece que quizá en una nueva reflexión de reajuste pueda volver ese artículo 23 a su sitio y pueda interpretarse que esta nueva ordenación que propongo es la adecuada.

«Derechos del ciudadano» no es, sin duda, el derecho a casarse. El derecho de propiedad era históricamente un derecho del hombre. Se le ha querido poner aquí como un derecho del ciudadano, pero tampoco creo que sea un derecho del ciudadano, porque bien sabido es que los extranjeros tienen propiedades en España y que se protegen en los mismos términos sus derechos. Tampoco es la libre...

El señor PRESIDENTE: Señoras y señores Senadores, está en el uso de la palabra el señor Sánchez Agesta.

El señor SANCHEZ AGESTA: Señor Presidente, no me molesta que pueda haber comentarios mientras hablo, porque ya he dicho que estoy hablando simplemente para que quede esto en el texto como una posible readaptación posterior.

El señor Presidente: La Presidencia piensa que está hablando para convencer.

El señor SANCHEZ AGESTA: Muchas gracias, señor Presidente, de todas maneras, por ese intento de proteger mi derecho a ser oído.

Sin duda alguna la libertad de empresa tampoco parece que sea un derecho del ciudadano. Me parece que hay una serie de enunciados en esta Sección 2.^a. «De los derechos y deberes de los ciudadanos», que claramente no corresponde a ese enunciado. Anteriormente he indicado que los títulos tienen importancia, que sirven de cabeza de interpretación. Por eso mi propuesta, esta propuesta, no significa ninguna novedad. Igual se hizo en la Constitución de 1931, en que las mismas materias que están aquí comprendidas fueron situadas bajo el enunciado «familia, economía y cultura», porque allí también aparecían ciertos derechos culturales que figuran aquí en otras partes del texto; o en la Constitución italiana, en la que se hace una distinción entre las relaciones ético-sociales, las relaciones civiles, las relaciones económicas y las relaciones políticas, con una mejora sistemática. Por eso creo que cabe separar de estos derechos y deberes de los ciudadanos estos artículos referentes al matrimonio, a la propiedad privada y a la herencia, a las condiciones del trabajo, a la negociación colectiva laboral, que sin duda alguna tampoco es un derecho del ciudadano; a la libertad de empresa, e incluso fundirlos con el artículo 35, que se refiere a la familia, bajo el enunciado «De los principios rectores de la política económica y social». Pero estos principios rectores de la política económica y social se traducen en este caso en el reconocimiento muy concreto de derechos de los hijos, que son iguales ante la

ley, con independencia de su filiación; de las madres, cualquiera que sea su estado civil; en deberes de los padres, que deben prestar a sus hijos habidos dentro o fuera del matrimonio alimento, educación, instrucción y toda asistencia durante la minoría de edad; es decir, una serie de derechos concretos que no pueden encajarse dentro de los principios rectores de la política económica y social.

Por eso propongo que hubiera una sección más, que en este caso no tiene ninguna trascendencia en cuanto a su aportación, pero sí ganaría en valor la ordenación sistemática del texto repitiendo ese epígrafe de una sección que, como digo, reconoció la Constitución de 1931 bajo el epígrafe de «familia, economía y trabajo», en lugar de «familia, economía y cultura», aunque hay que advertir que en la Constitución de 1931 se comprendían artículos análogos a los que se refieren aquí al trabajo en esta misma sección. Nada más, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Agesta. ¿Turno a favor? *(Pausa.)* ¿Turno en contra? *(Pausa.)* ¿Señores portavoces? *(Pausa.)*

Tiene la palabra el señor Villar Arregui.

El señor VILLAR ARREGUI: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, los argumentos del profesor Sánchez Agesta son contundentes. Como es sabido, las rúbricas de los capítulos, de los títulos y de las secciones son una guía segura, han venido siendo una guía segura, en la jurisprudencia interpretadora de la ley escrita.

No sin dolor por nuestra parte, se ha introducido, bajo la rúbrica «De los derechos y deberes de los ciudadanos», un artículo en que el Senador señor Cela ha situado la expresión «los españoles», cuando hubiéramos estimado mucho más correcta la expresión «los ciudadanos». Pero si se quiere dar alguna carga jurídico-política al vocablo «ciudadanos», éste ha de estar directamente conectado con el «status civitatis», con las relaciones de los ciudadanos en referencia a la comunidad jurídico-política de la que forman parte, en la que se integran, en la que participan. Y es evidente, de toda evidencia, como acaba de explicar el Senador Sánchez Agesta, que ni el

derecho al matrimonio, ni el derecho a la propiedad privada o personal, en los términos en que en definitiva resulten tras la deliberación del artículo, ni el derecho a la institución de fundaciones de interés general, son derechos que tengan o guarden relación con el derecho de la persona en cuanto miembro activo de la comunidad política inserta en ella y participe en ella.

En cambio, nuestro Grupo no ve con tanta claridad el trasvase del artículo 35, que está hoy en el capítulo siguiente a la sección nueva que el profesor Sánchez Agesta propone, propuesta en la que nosotros le apoyamos, no con la pobreza de nuestros votos, sino con el auxilio de las razones que le podemos prestar. Tiene, pensamos, razón de sobra para que se cree una nueva sección, con una rúbrica que puede ser la que él mismo ha indicado: «Familia, trabajo, economía».

En cambio, el Capítulo III es un mandato de la Constitución al legislador ordinario; todo él está atravesado por esa idea primaria y aquellos motivos de sistemática que han venido conduciendo el debate por parte del profesor Sánchez Agesta a muy ajustadas observaciones. Estas razones de sistemática son las que a nosotros nos mueven a pedir que se reconsidere la posibilidad de que el artículo 35 quede en el lugar donde está, porque aunque, como él con razón dice, es un artículo declarativo de derechos, también es un artículo en que el poder constituyente difiere al poder legislativo ordinario el mandato de realizar determinados actos orientados a la promoción de los derechos que en ese artículo se consagran. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villar. Tiene la palabra el señor Ramos.

El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECI-LLA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, para que no crea nuestro distinguido compañero el señor Sánchez Agesta que sus razones en ningún caso van a ser oídas, yo voy a exponer la opinión de mi Grupo en relación con la propuesta de sistemática que da.

La sistemática siempre es una cuestión más opinable que el propio fondo de los artículos que se están tratando, porque a alguien le

parece que en ese lugar están mejor colocados y resulta fácil pensar que a lo mejor no lo están.

Respecto a la creación de una nueva sección, no tendríamos, en principio, ningún inconveniente especial en aceptar esa nueva rúbrica de «Familia, economía y trabajo», si bien pensamos que, para guardar la sistemática, habría de aceptarse, por otra parte, que el artículo 33, 1, pasara, lógicamente, al lugar que le corresponde en el artículo 26, que es el que regula el derecho de sindicación, el derecho a la huelga, y que ahí se incluyera la regulación colectiva laboral. Aceptado ese apartado, no tendríamos inconveniente en que se pusiera una nueva rúbrica que dijera «Familia, economía y trabajo», y tampoco en que el artículo 35, que es el primero del Capítulo III, pasara, como él propone, a encabezar esa sección antes del artículo 30, que es el que reconoce el derecho al matrimonio.

No sé si con esto sería posible que hiciéramos un cambio y un trastrueque de la sistemática, pero si es posible, y los demás miembros de la Comisión lo aceptan, mi Grupo no tendría inconveniente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Azcárate.

El señor AZCARATE FLOREZ: Tengo la impresión, señor Presidente, de que se nos están complicando las cosas; yo por lo menos las voy viendo cada vez más indefinidas.

Se me ocurre pensar que en un tema como éste, en el que no se va a tratar el fondo de ninguno de los artículos discutidos y votados, sino el problema de sistemática, podría formarse una pequeña subcomisión en la que estuviesen los Senadores Ramos, Antonio Jiménez, Villar Arregui y Sánchez Agesta, y que en cuatro o cinco días más nos trajeran, después de un estudio cuidadoso de estos dos capítulos, una distribución definitivamente satisfactoria para ellos cuatro, pues tengo la casi seguridad de que la aceptaríamos todos los demás.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Pérez Puga.

El señor PEREZ PUGA: El Grupo Parlamentario UCD, en principio, no tiene reparos

en oponer a la respuesta del señor Sánchez Agesta, aun cuando esto requiere una meditación un poco más en profundidad que el tiempo que le estamos dedicando aquí, porque es un planteamiento que se viene a improvisar, y sobre todo después de las puntualizaciones que condicionarían la propuesta del señor Ramos, con la que se pretendería pasar el párrafo 1 del artículo 33 a otro artículo, en donde formaría un conjunto la libertad sindical, la negociación colectiva y el derecho de huelga, formando esa trilogía que una es parte de la otra, pero en la que se olvida del apartado 2, que trata también de los conflictos colectivos que afectan en gran parte al trabajador. Esto vendría a plantear problemas muy serios de sistemática que, en su día, serían fuente interpretativa para quien hubiera de realizarlo.

Por tanto, el Grupo Parlamentario UCD aceptará, de alguna manera —ya veremos en qué expresión de voto lo hace—, la propuesta del señor Sánchez Agesta, pero de ninguna manera aceptaría la propuesta del Grupo Socialista de trasladar en este momento el párrafo 1 del artículo 33, como él ha indicado.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sánchez Agesta, para rectificar.

El señor SANCHEZ AGESTA: No sé si hay turno para dar las gracias, pero quizá el turno para rectificar pueda aprovecharse para ello, en vista de la acogida favorable, pero dubitativa, que ha tenido mi propuesta por los portavoces.

Creo que la propuesta del señor Azcárate es muy razonable, y, en la medida en que las ordenaciones de sistemáticas no motiven ningún cambio sustancial, no es un problema para aceptar mi enmienda o rechazarla, sino para que se constituya un pequeño comité, en el que no pido entrar, pero del que no tengo inconveniente en formar parte, para reordenar todo un poco. Indiscutiblemente, resulta extraña esa calificación de derechos del ciudadano, que, además, puede tener consecuencias jurídicas en relación con ciertas materias. Por tanto, considero que esa ordenación sería beneficiosa, sin que tenga en este caso absolutamente ninguna consecuencia que exija retocar ningún otro artículo.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ramos, para una cuestión de orden.

El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECI-LLA: Simplemente me atrevería a sugerir a la Presidencia de la Mesa, si lo estima conveniente, que sería momento de demorar la votación, por lo menos de este tema, tal como algunos portavoces se han manifestado.

Yo no podría aceptar la propuesta del señor Sánchez Agesta en bloque, y tendría que discutir si se aceptan estas modificaciones que propongo.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Sánchez Agesta.

El señor SANCHEZ AGESTA: Por mi parte no hay ningún inconveniente, porque, como es natural, no pretendo más que una perfección del texto, ni siquiera ningún interés político concreto de ninguna clase.

El señor PEREZ PUGA: Pido la palabra para una cuestión de orden.

El señor PRESIDENTE: La tiene S. S.

El señor PEREZ PUGA: Aceptamos la petición que se ha formulado a la Presidencia de que se demore este tema de la sistemática, porque puede ser importante y puede resolver otros problemas con más calma y decidir sobre el tema.

El señor PRESIDENTE: No pondremos a votación esta enmienda, y la Presidencia espera una propuesta de los portavoces.

Artículo 30

A continuación entramos en el artículo 30. La primera enmienda a todo el artículo es del señor Gamboa, que tiene la palabra.

El señor GAMBOA SANCHEZ-BARCAIZ-TEGUI: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, en esta enmienda propongo suprimir el apartado 2, recogiendo parte de él en el apartado 1 y dejando el artículo con un solo apartado.

Me explicaré. Se me plantea, en relación a este artículo, un grave problema de conciencia como católico que me obliga a pedir que se suprima la referencia que en el mismo se

hace a las causas de disolución matrimonial, porque estimo una exigencia del derecho natural y de mis convicciones religiosas la indisolubilidad del matrimonio por causas distintas de la muerte de uno de los cónyuges.

Entiendo que mantener el texto actual, al decir que la ley regulará las causas de disolución y sus efectos, supone prejuzgar, admitir «a priori» el divorcio, ya que, como señaló gráficamente en el Congreso el Diputado señor Mendizábal, no parece lógico pensar que se pretenda regular la muerte.

Existen, por supuesto, argumentos de otro orden que el estrictamente religioso y moral, fundamentalmente de tipo sociológico, en los que no quiero insistir, pues son de sobra conocidos y no deseo entablar polémica alguna. Tan sólo citaré un informe recientemente publicado en la prensa en el que se destacaba cómo, de 570.000 delincuentes juveniles existentes en Estados Unidos, el 82 por ciento eran hijos de divorciados.

Por todo lo expuesto, propongo redactar este artículo de la siguiente forma: «A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer, en plena igualdad de derechos y deberes, podrán contraer matrimonio, cuyo régimen y regulación fijará la ley».

Por último, Señorías, quiero insistir en la gravedad de este artículo para muchas conciencias y manifestar que, en cualquier caso, si llegara a plantearse el tema de la eventual admisión del divorcio, espero, al menos, que se efectúe previa consulta popular, como se ha hecho en otros países de Europa. Nada más, y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gamboa. ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.) Pasamos a votar la enmienda del señor Gamboa.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda a la totalidad por 19 votos en contra, con dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Gamboa la mantiene para el Pleno?

El señor GAMBOA SANCHEZ-BARCAIZ-TEGUI: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: La mantiene el señor Gamboa y la apoya la señora Landáburu, del Grupo Mixto.

Vamos a entrar en la discusión del apartado 1. Enmienda número 465, del señor Xirinacs, que tiene la palabra para defenderla.

El señor XIRINACS DAMIANS: Este es tema cuajado de dificultades que hay que resolver en cuatro líneas.

El texto me parece defectuoso y ha provocado infinidad de protestas. Supongo que, como yo, los demás Senadores habrán recibido una invasión de cartas pidiendo rectificaciones.

Mi enmienda, con las mínimas palabras posibles, trata de corregir los siguientes problemas: primero, en el texto se olvida los derechos afectivos inherentes a la persona, independientemente de la edad núbil; segundo, olvida que, aunque la doctrina católica actual no lo acepte, la realidad del mundo actual, sobre la que ha de trabajar el legislador, es que se investiga sobre nuevas formas de matrimonio y de relaciones no matrimoniales con una intensidad y extensión tales que no tenerlo en cuenta margina a una gran cantidad de personas; tercero, olvida corregir la actual desigualdad de derechos del padre y de la madre respecto de los hijos; cuarto, olvida resolver el problema de la paternidad responsable y de los medios para ejercitarla, y quinto, olvida afirmar que los padres siguen teniendo derechos y deberes respecto de los hijos llegados a la edad núbil para contraer matrimonio, y aunque lo hayan contraído.

Por todo ello, de una importancia capital, me atrevo a proponer mi enmienda, que dice: «Toda persona tiene derecho al desarrollo de su afectividad y de su sexualidad, a contraer matrimonio, a crear relaciones estables de familia en libertad, en plena igualdad de derechos y deberes de los consortes entre sí y de ambos respecto de los hijos comunes y a decidir libremente el número de hijos que desea tener. A tal fin tiene derecho a acceder a la información necesaria y a los medios que permitan su ejercicio».

El señor PRESIDENTE: ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

A continuación, pasamos a discutir la enmienda número 389, del señor Osorio, que tiene la palabra para defenderla.

El señor SANCHEZ AGESTA: El señor Osorio había delegado en mí para el caso de que él no estuviera. Me atengo a los fundamentos alegados por el señor Osorio en su enmienda.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

Pasamos a la enmienda número 155, del señor Cela, que tiene la palabra.

El señor CELA Y TRULOCK: Entiendo que no se puede decir, hablando en castellano y en este contexto, «a partir de la edad núbil», puesto que núbil, según el diccionario, dicese de la persona que ha llegado a la edad en que es apta para el matrimonio, y el concepto, por una simple suma algebraica de «a + b + c», etc., quedaría expresado, en forma paradójica, así: «A partir de la edad en que la persona ha llegado a la edad en que es apta para el matrimonio, el hombre y la mujer podrán contraer matrimonio». (Risas.)

Me permito presentar una enmienda «in voce», que diría simplemente: «A partir de la edad fijada por la ley, el hombre y la mujer podrán contraer matrimonio». Muchas gracias. (El señor Cela y Trulock entrega su enmienda a la Mesa.)

El señor PRESIDENTE: ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Fernández-Galiano.

El señor FERNANDEZ-GALIANO FERNANDEZ: Tan sólo para indicar que, en opinión del Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático, la redacción propuesta por el Senador señor Cela mejora muy notablemente el texto remitido por el Congreso y, por consiguiente, votaremos a favor de esta enmienda.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cela, para rectificar.

El señor CELA Y TRULOCK: No tengo nada que rectificar. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la enmienda número 25, del Grupo Parlamentario de Progresistas y Socialistas Independientes. Tiene la palabra el portavoz del Grupo.

El señor VILLAR ARREGUI: Me acojo al concepto de consenso expresado no hace mucho por el señor Jiménez Blanco, como idea dinámica en la que caben integrarse perfeccionamientos al texto de la Constitución, en el caso en que el buen juicio de los Senadores estime que de lo que se trata es de efectivos perfeccionamientos. Si no fuera por aquellas palabras, tras la expresión del Senador señor Fernández-Galiano, que asume la enmienda del Senador señor Cela, yo debería renunciar a la que mi Grupo propone. Sin embargo, el tema tiene gravedad y tiene importancia suficiente para que su tratamiento constitucional merezca algo más que lo que hasta ahora se ha dicho.

Voy a alterar levemente la enmienda que en su día mi Grupo presentó y a defender los dos números en que propone que el artículo se descomponga, porque sólo así (espero que sin necesidad de contar con la benevolencia del Presidente para alargar ligeramente, en su caso, esta defensa), sólo así se entenderá el pensamiento del Grupo sobre este tema que merece, ciertamente, un tratamiento constitucional meditado, ponderado y considerado por todos.

El artículo 30 quedaría redactado de la siguiente forma:

«1. El matrimonio se origina en el consentimiento de los cónyuges y se funda en la igualdad de derechos y deberes recíprocos».

«2. La ley regulará la edad a partir de la cual se puede contraer válidamente matrimonio, su forma, los derechos y los deberes de los cónyuges, las causas de separación y de disolución y sus respectivos efectos».

El número 1 del texto procedente del Congreso está inspirado en el artículo 12 de la Convención de Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales, pero con la mutilación de aquel texto,

que concluye con una remisión a la ley nacional.

¿Por qué la enmienda propone que la remisión a la ley se haga sólo en uno de los dos números en los que el artículo se descompone? Por obvias razones sistemáticas.

Si en el número 1, con arreglo a la enmienda del Senador Cela, ya hay un reenvío a la ley en orden a la fijación de edad, no se entiende qué razones de economía procesal han podido conducir a la Comisión a dejar remitido a una ley ordinaria el tema atinente a la edad y a otra ley ordinaria, que versa también sobre el matrimonio, extremos tales como los efectos del matrimonio, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos respectivos.

Parece que la ordenación sistemática del precepto aconsejaría que el reenvío a la ley ordinaria se haga «in totum» y no sólo respecto de la parte. En cambio, hay precedentes en el texto constitucional sobre la declaración institucional de aquello que la Constitución regula, sobre qué es, en definitiva, la institución sobre la que la Constitución marca pautas, tanto de directa aplicación cuanto guías para el legislador ordinario o para el ejercicio de los poderes públicos.

El matrimonio puede ser considerado, desde el punto de vista de quienes lo celebran o, si se quiere, desde el punto de vista institucional. En nuestra enmienda, con el mayor respeto a la madurez, a la personalidad de los sujetos, el matrimonio «in fieri», es decir, en cuanto a acto que celebran los contrayentes, se define, en sus líneas maestras, con una expresión muy lacónica: «el matrimonio se origina en el consentimiento de los cónyuges». Adviertan los señores Senadores que, fijada la mayoría de edad a los dieciocho años, cualquier muchacho que la tenga queda facultado para comprar una bicicleta. En cambio, si prosperara la redacción del Congreso, en cuanto a puntos signos de pubertad, quedaría facultado, sin restricción posible, el sujeto para instalarse en esa situación o en esa relación jurídica, al menos estable, para algunos perpetua, que se llama matrimonio.

Si el concepto queda expresado en los puros términos de que «el matrimonio se origina en el consentimiento de los cónyuges», la ley

ordinaria podrá regular, como con razón recordaba el Senador Xirinacs, qué concurso pueden, en determinados casos, necesitar los hijos respecto de sus padres para completar la capacidad de aquéllos en orden a la celebración de las nupcias.

Nos parece de enorme importancia subrayar que el núcleo de la institución matrimonial, como célula o fermento de la familia, radica en el libre consentimiento de los contratantes. Ahí es donde está el núcleo o el nudo de la cuestión, en el sentido en que el matrimonio se refiere a la unión celebrada por un hombre y por una mujer. Pero el matrimonio «in factum», el matrimonio en cuanto institución —y con esto es con lo que termina el número 1 de nuestra enmienda al artículo 30— se funda en la igualdad de derechos y deberes recíprocos.

Sin mengua alguna para el respeto debido al Senador Cela, entendemos que el texto que nuestro Grupo propone es mucho más enriquecedor de un concepto que el Congreso ha querido que estuviera en la Constitución, pero que no ha acertado a situarlo, ni con los perfiles que son propios al respeto debido a quienes contraen matrimonio ni con los perfiles que caracterizan las notas de la institución. (*Rumores.*)

El señor PRESIDENTE: Silencio, por favor, señores Senadores, pues está el señor Villar Arregui en el uso de la palabra.

El señor VILLAR ARREGUI: Gracias, señor Presidente, aunque comprendo que los señores Senadores tienen que comentar sobre éste y otros diversos temas.

Renunciaré a la defensa del número 2, pero quiero hacer algún comentario sobre por qué se lleva sólo a este número todo el mandato que la Constitución defiere a la ley ordinaria sobre este tema. No se ve razón alguna para que haya un mandato a la ley, si prospera la enmienda del Senador señor Cela, atinente a la edad, en el apartado 1, y se mantenga otro criterio respecto a otros extremos que conciernen al tratamiento de la institución matrimonial.

Nuestro texto resuelve la cuestión al deferir a la ley tanto la regulación a partir de la cual las personas tienen capacidad para con-

traer matrimonio válido, como lo que se refiere a su forma, derechos y deberes de los cónyuges, causas de separación y de disolución y su respectivos efectos.

Por obvio, no haría falta añadir que en una Constitución de un Estado aconfesional no se trata para nada del matrimonio canónico.

Yo diría al Senador señor Gamboa que si el divorcio llega a instaurarse, porque el número 2 del artículo 30 no lo hace inconstitucional, el divorcio será sólo optativo, no será obligatorio, no se impondrá a la conciencia de quienes, como el señor Gamboa y el que habla, entienden que el matrimonio es una unión entre hombre y mujer que sólo la muerte puede disolver.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Villar Arregui. ¿Turno a favor? (*Pausa.*) ¿Turno en contra? (*Pausa.*) ¿Señores portavoces? (*Pausa.*)

¿Entiendo, señor Jiménez Blanco, que la enmienda número 713, del Grupo Parlamentario de UCD, queda retirada?

El señor JIMENEZ BLANCO: Sí, señor Presidente, respecto al apartado 1.

El señor PRESIDENTE: En ese caso, pasamos a las votaciones.

El señor VICENTE DOMINGUEZ: Pido la palabra, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Es para una cuestión de orden?

El señor VICENTE DOMINGUEZ: En nombre propio, aunque pertenezco al Grupo Parlamentario de UCD, voy a intentar presentar una enmienda «in voce» a este apartado, por si consiguiera mejorar un tanto el texto, ya que los argumentos que tengo en mente son los mismos que han expuesto algunos Senadores, entre ellos los señores Villar Arregui y Cela.

El señor PRESIDENTE: Está en su derecho y puede hacerlo S. S.

El señor VICENTE DOMINGUEZ: A mi entender, este apartado del artículo 30 debe-

ría quedar redactado de la siguiente forma: «El hombre y la mujer, desde la edad que determine la legislación civil, tienen derecho a contraer matrimonio y crear, en igualdad de derechos, una familia».

Creo que con esta enmienda que en nombre propio hago «in voce» quedan garantizados todos los aspectos que aquí se han expuesto por los señores Senadores que me han precedido en el uso de la palabra, entre ellos la igualdad que al hombre y a la mujer asiste al contraer matrimonio.

Difiero del Senador señor Villar Arregui y no acabo de entender —acaso sea defecto mío— la expresión «origina el matrimonio». Creo que es más completa la que concede el derecho a contraer matrimonio.

He añadido al texto, como cosa original no apuntada por ninguno de los señores Senadores, la frase «el derecho a crear una familia». Creo que esto enlaza con la defensa que anteriormente se hizo por parte del Senador señor Sánchez Agesta, al tratar de encabezar este Título «De los derechos de los ciudadanos». A mí me ha parecido siempre una omisión importante —aunque ya sabemos que la familia se constituye al contraer matrimonio— el que, por lo menos en una ocasión, y antes de hablar de qué derechos y qué deberes son los que tienen los contrayentes después de constituir una familia, no se mencione, como lo hago yo ahora, no de una forma farragosa, sino simplemente, el derecho a crear una familia.

En el apartado 2 tengo también una matización que hacer, pero me parece que ese apartado no ha sido estudiado.

El señor PRESIDENTE: ¿Para un turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? Tiene la palabra el señor Sánchez Agesta.

El señor SANCHEZ AGESTA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, muy simplemente, no para ninguna adición a un texto que creo que es delicado, que hay que pensar, pero sí debo advertir que en la enmienda «in voce» propuesta por el Senador Azcárate aparece la expresión «tienen derecho», que da un sentido mucho más pleno a este artículo. Esta es una expresión que no aparece ni en el texto del Congreso ni en

ninguno de los otros y, precisamente, el derecho a contraer matrimonio es uno de los últimos derechos reconocidos por el Derecho constitucional contemporáneo y también por una situación histórica concreta, por el hecho de haberse negado ese derecho a contraer matrimonio a determinadas razas en algún pueblo en un momento histórico del pasado.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Landáburu.

La señora LANDABURU GONZALEZ: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, yo había presentado una enmienda al apartado 2 de este artículo que planteaba el que se recogiera el principio de igualdad jurídica entre los cónyuges. Después de haber escuchado el debate que aquí se ha producido en torno al primer apartado de este artículo, considero más adecuado plantearla ahora y, en consecuencia, pasaré a la Mesa la enmienda «in voce» que a continuación explicaré.

La razón de solicitar la inclusión de este principio de igualdad jurídica estaba basada, entre otras, en que esta Comisión ha aprobado en el artículo 13 el principio de igualdad ante la ley sin discriminación, entre otras razones, por razón de sexo, que más tarde, concretamente en el artículo 23 —que no sé en este momento si va a quedar en el artículo 23, por estas enmiendas de sistemática que hemos escuchado—, ha tenido su traducción en el derecho de acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos. Es decir, se ha traducido constitucionalmente este principio de no discriminación a la esfera del Derecho público.

Pues bien, señores Senadores, la enmienda que ahora propongo lo que pretende es trasladar a la esfera del Derecho privado este principio de no discriminación, a la esfera del Derecho familiar, del Derecho matrimonial. En efecto, parece congruente que así sea, porque de no recoger expresamente en este artículo y en este apartado este principio de igualdad jurídica entre los cónyuges, simplemente dejaríamos, sin más, como se dice en el apartado segundo, a una ley orgánica la regulación de los derechos y deberes de los cónyuges, y podría ocurrir que no se hiciera con arreglo a este principio de igualdad jurídica, lo que supondría, de una parte, des-

conocer este principio que parece desprenderse del artículo 13 de esta Constitución y, de otra, un evidente retroceso.

Supondría un retroceso porque este principio de igualdad jurídica está ya reconocido y consagrado en nuestra legislación ordinaria. Concretamente la Ley de 2 de mayo de 1975 por la que se modificaron diversos artículos del Código Civil y del Código de Comercio, que lo reconocía expresamente y, desarrollándola, modificó el régimen de los derechos y deberes de los consortes dentro de la relación matrimonial, la nacionalidad de la mujer casada, los relativos a la fijación del domicilio conyugal, la supresión de la licencia marital, la capacidad jurídica de la mujer casada para el ejercicio del comercio, etc.

Como última consecuencia de este principio las Cámaras recibirán en breve un proyecto de ley aprobado en el último Consejo de Ministros elaborado previamente por la Comisión General de Codificación, que supone además de una modificación en profundidad del régimen económico conyugal el reconocimiento explícito de esta igualdad jurídica entre los esposos.

Y todo esto es así, porque una vez más el Derecho ha convertido las tendencias sociales en leyes, ha reconocido el clamor de la sociedad que demanda ya esta igualdad. En este sentido, podría extenderme en consideraciones, pero estoy segura de que no es necesario en este momento. Sólo diré que me parece que debemos ser congruentes y dejar dicho en este punto de la Constitución lo que no sólo demanda nuestra sociedad, sino que es, además, consecuencia de otros principios aceptados en ella.

Y ya, para concretar y recogiendo algunas de las intervenciones que aquí se han hecho, la enmienda «in voce» que enviaré a la Mesa vendría a decir: «A partir de la edad núbil, el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio basado en la igualdad jurídica entre los cónyuges».

El señor PRESIDENTE: ¿Se entiende retirada la enmienda 427 al apartado 2?

La señora LANDABURU GONZALEZ: Depende de la suerte que corra esta enmienda «in voce», señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro señor portavoz desea intervenir? (Pausa.)

El señor Martín-Retortillo tiene la palabra.

El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER: Yo veo que la bola de nieve va rodando, se va decantando y perfeccionando, y quería poner mi óbolo a esta ceremonia de la confusión, en el bien entendido que como estamos ante temas tan importantes me parece que tantas intervenciones no confunden, sino que lo que hacen es añadir elementos nuevos.

Por eso propongo una enmienda «in voce», que me permito leer, en la que refundo una serie de actuaciones anteriores y que en un único párrafo comprende los dos apartados del texto del Congreso, y que dice así: «El hombre y la mujer, en plena igualdad de derechos y deberes, tendrán derecho a contraer matrimonio a partir de la edad fijada por la ley, la cual regulará sus formas, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y de disolución y sus efectos».

Con esta enmienda se pretende, como una aportación importante, insistir en la igualdad del hombre y de la mujer y dar entrada a que será la ley quien determine, así como refundir todo lo que se dice en el apartado 2, sin añadir ni quitar ninguna coma a lo que ahí está dicho.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. El señor Ramos tiene la palabra.

El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECI-LLA: Voy a fijar la posición de mi Grupo Parlamentario en torno a este controvertido artículo.

A nuestro juicio, efectivamente, y por las razones invocadas por el señor Cela y algún otro señor Senador, puede sustituirse lo de «la edad núbil» por «la edad fijada por la ley». Puede ir al principio o al final, pero nos parece esencial que se mantenga como base de este apartado 1 el texto del Congreso: «... el hombre y la mujer, en plena igualdad de derechos y deberes, podrán contraer matrimonio». Que se añada al principio o al final «a partir de la edad fijada por la ley» es algo en lo que no tenemos un criterio firme, pero no nos parece que se pueda suprimir lo de «en plena igualdad de derechos

y deberes» en este punto concreto del artículo 30.

En cuanto al apartado 2, aceptaríamos la sugerencia formulada de alguna manera por el señor Martín-Retortillo y el Grupo que representa respecto de que «la ley regulará la forma», en lugar de «las formas»; pero nos parece que el resto debe quedar como está.

Esta es la posición que tiene mi Grupo en torno al famoso artículo 30.

No creemos, como ha propuesto alguna enmienda, que la inclusión de «los iguales derechos» (que por otra parte no parece que sea una redacción muy feliz) en ese apartado 2 pueda sustituir la supresión en el apartado 1 de «en plena igualdad de derechos y deberes».

El señor PRESIDENTE: El señor Fernández-Galiano tiene la palabra.

El señor FERNANDEZ-GALIANO FERNANDEZ: La verdad es que yo no pensaba intervenir más en torno a este número 1, porque ya antes he anunciado que mi Grupo Parlamentario se uniría a la redacción propuesta por el Senador señor Cela. Pero, en vista de cómo han discurrido las cosas y en vista de que llueven las enmiendas «in voce», de que se está mezclando el número 1 con el 2, cosa que por otra parte no es de extrañar, en cuanto que ambos están enormemente relacionados, me permito también decir cuál es nuestra opinión al respecto.

Me parece muy temerario, pero voy a intentar poner un poco de orden en este artículo. Creo que casi todos los que han hablado tienen razón. Yo considero que el Congreso ha querido decir, pero no ha acertado en su expresión, que en el matrimonio hay que distinguir dos momentos, o si se me permite la pedantería, dos aspectos, cada uno de los cuales está o quiere estar tratado en los sendos apartados 1 y 2. En primer lugar, el aspecto estático; en segundo, el aspecto dinámico del matrimonio.

En el primero contemplamos el aspecto estático de la institución matrimonial, es decir, que no cabe hablar de cónyuges cuando todavía no se ha contraído el vínculo matrimonial. Allí, un hombre y una mujer pasan a contraer matrimonio, y por supuesto que en

igualdad de derechos, en cuanto que esta igualdad les viene reconocida por el artículo 13. Pero una vez que se contrae el vínculo se inicia la vida matrimonial que discurre a través del tiempo. Estamos ya en el aspecto dinámico del matrimonio, y aquí sí que es menester subrayar la exigencia de la igualdad entre el marido y la mujer, entre los que ya son cónyuges y no simplemente hombre y mujer.

Por ello, la posición nuestra es no mencionar la igualdad, porque no hace falta, en el momento de contraer matrimonio, al amparo del artículo 13, pero sí expresarla en cambio muy claramente cuando se trata de las relaciones entre los que ya son cónyuges, en el curso y en el acontecer de la vida matrimonial; ahí sí que es necesario dejar bien claro que hay una estricta igualdad entre el marido y la mujer.

Cómo pueda expresarse esto, cuál sean exactamente las palabras en que se refleje esta idea, esto es más o menos accesorio, porque la idea fundamental es la que acabo de expresar.

El señor PRESIDENTE: El señor Vicente Domínguez tiene la palabra para rectificar.

El señor VICENTE DOMINGUEZ: No tengo que rectificar. Creo que el Senador señor Sánchez Agesta apoyaba mi redacción concretamente cuando decía «tienen derecho a contraer matrimonio». Únicamente me parece que me confundió con el Senador señor Azcárate.

El señor PRESIDENTE: Ruego al señor Vicente Domínguez que pase por escrito su enmienda.

El señor VICENTE DOMINGUEZ: Está por escrito, lo que pasa es que la estaba reteniendo, porque a continuación tengo hecha una matización al número 2.

El señor PRESIDENTE: Pero tenemos que leerla y votarla. Se la devolveremos en su momento.

Vamos a ver si la Mesa ordena y determina cuál es el orden de las enmiendas. (La señora Landáburu pide la palabra.) La señora

Landáburu tiene la palabra para una cuestión de orden.

La señora LANDABURU GONZALEZ: Es para una rectificación muy breve y al hilo de las manifestaciones que se han hecho después.

Creo que en el fondo todos estamos de acuerdo. Lo que ocurre es que en un tema tan importante y delicado como éste, la colocación puede tener importancia. Como algunas de las intervenciones que aquí se han producido quedan satisfechas con que en el texto quede en plena igualdad de derechos y deberes, es un tema que merece matización, porque si se dice que «el hombre y la mujer, en plena igualdad de derechos y deberes podrán contraer matrimonio», lo que hemos resuelto es la igualdad previa al matrimonio, pero no la igualdad jurídica entre los cónyuges, que es una igualdad que evidentemente se produce después del matrimonio.

La otra matización es que el artículo 13 plantea el principio de no discriminación por razón de sexo, y no sé hasta qué extremo eso resolvería el problema en su totalidad, porque durante muchos años las discriminaciones no se han planteado en esta materia por razón de sexo, sino por razón de estado civil, por lo cual yo considero absolutamente preciso que esta matización se introduzca precisamente en el artículo en que la Constitución habla del matrimonio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Calatayud.

El señor CALATAYUD Y MALDONADO: Para una cuestión de orden estrictamente. Me atrevería a sugerir que, dada la vinculación que existe entre los números 1 y 2 de este artículo, esperásemos a votar, o que la Mesa sometiese a votación conjuntamente ambos preceptos, una vez lleguemos a redacciones conjuntas.

El señor PRESIDENTE: La Mesa va a someter a votación conforme ordena el Reglamento, apartado por apartado, poniendo antes a votación aquellas enmiendas que subsumen los dos preceptos.

El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER: Si se votan por separado, yo presento una redacción al apartado 1.

El señor PRESIDENTE: La verdad es que la facundia legislativa de los señores Senadores es maravillosa. (*Risas.*)

El tema está suficientemente debatido, señor Martín-Retortillo. Aquí hay una enmienda que dice que es alternativa, pero tiene que votarse primero, porque en realidad no es alternativa y subsume los dos preceptos. La que ha presentado el señor Villar es posterior y tiene que votarse posteriormente a la alternativa.

El señor VILLAR ARREGUI: La mía fue anterior.

El señor PRESIDENTE: Es anterior, pero ha de votarse posteriormente.

El señor PORTABELLA RAFOLS: Una cuestión estrictamente de orden.

El señor PRESIDENTE: En este momento el Presidente está consultando con la Mesa. (*Pausa.*)

Tiene la palabra el señor Portabella.

El señor PORTABELLA RAFOLS: Insisto que para una cuestión de orden. Iba a pedir la suspensión por unos minutos, para poder ordenar la votación. Si no, no se puede votar.

El señor PRESIDENTE: Se suspende la sesión durante quince minutos, en la inteligencia de que no va a haber otra suspensión más adelante.

Se reanuda la sesión.

El señor PRESIDENTE: ¿Han llegado los señores portavoces a algún acuerdo o nueva enmienda de viva voz?

El señor VICENTE DOMINGUEZ: Sí, hay un texto suscrito, al parecer, por todos los Grupos Parlamentarios.

El señor PRESIDENTE: ¿A los dos apartados del artículo?

El señor VICENTE DOMINGUEZ: Al primero. El segundo se mantiene como está.

El señor PRESIDENTE: El señor Secretario va a dar lectura de la nueva enmienda de viva voz que ha sido presentada a la Mesa.

El señor SECRETARIO (Unzueta Uzcan-ga): Puesto que se trata del matrimonio, las enmiendas «in voce» se han consensuado y hay una propuesta de nueva redacción del apartado 1 del artículo 30 que dice así: «El hombre y la mujer, a partir de la edad fijada por la ley, tienen derecho a contraer matrimonio basado en la igualdad jurídica de los cónyuges».

El señor PRESIDENTE: El señor Cela tiene la palabra.

El señor CELA Y TRULOCK: Gracias, señor Presidente. Tras haber oído con alegría la nueva propuesta y tras congratularme de haber convencido a SS. SS. de que no hablen en charada y quiten lo de la «edad núbil», retiro mi enmienda. (*Risas.*)

El señor PRESIDENTE: ¿Las enmiendas presentadas «in voce» se mantienen?

El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER: Las del PSI se retiran.

El señor PRESIDENTE: ¿También la número 25?

El señor ANGULO MONTES: Todas.

El señor PRESIDENTE: ¿Entonces ha de entender la Presidencia que se aprueba esta enmienda por unanimidad de la Comisión? (*Asentimiento.*)

Quedan dos enmiendas, de los señores Xirinacs y Osorio. ¿El señor Xirinacs mantiene la suya para defenderla en el Pleno?

El señor XIRINACS DAMIANS: Sí, señor Presidente, la mantengo.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún miembro de la Comisión la apoya?

El señor PEDROL RIUS; Yo, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Osorio mantiene su enmienda?

El señor SANCHEZ AGESTA: No estoy autorizado, pero no obstante se mantiene, aunque espero que se retire.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Agesta.

Pasamos a continuación a discutir el apartado 2 del artículo 30. En primer lugar figura la enmienda número 194, del señor Cacharro.

El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECI-LLA: Pido la palabra para una cuestión de orden.

La señora LANDABURU GONZALEZ: El señor Cacharro ha delegado en nuestro portavoz.

El señor PEDROL RIUS: Se retira.

El señor PRESIDENTE: Entonces se da por decaída.

El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECI-LLA: Insisto en mi petición de palabra para una cuestión de orden.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ramos.

El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECI-LLA: Comprendo la generosidad de mi doblemente compañero, el Presidente de la Comisión, en torno al tema de permitir que se defiendan todas las enmiendas. No dudo, por supuesto, de que los señores representantes de los Grupos que alegan la delegación expresa de los Senadores para defenderlas cuentan con ella, y me consta que así es, e incluso creo que desde el punto de vista reglamentario no podemos en ningún caso ir en contra de este derecho, pero unas recientes palabras del señor Sánchez Agesta, diciendo que no tenía autorización para retirar o no una enmienda del señor Osorio, así como lo que ha estado a punto de pasar con la del señor Cacharro, me mueve a llamar la atención de la Mesa y de la Comisión sobre que, en efecto, es posible que reglamentariamente esto sea

correcto, pero, en todo caso, sin llegar a hablar, como lo hizo el representante del Grupo Mixto, de una falta de educación parlamentaria, a mí me parece una cierta descortesía para con la Comisión el que determinados señores Senadores —y lo digo en alta voz— estén tranquilamente veraneando y porque han dicho al portavoz de su Grupo que mantenga todas sus enmiendas nos obliguen a los demás a un trabajo constitucional doblemente improbable.

Creo que lo mínimo que se podría exigir a estos señores enmendantes es que estuvieran presentes para defender sus enmiendas, y si no están me atrevería a proponer a la Mesa que las diera por decaídas, porque verdaderamente me parece una tomadura de pelo. *(El señor Pedrol Rius pide la palabra.)*

El señor PRESIDENTE: El señor Pedrol tiene la palabra.

El señor PEDROL RIUS: Permítaseme contestar a la cuestión planteada.

Desde el punto de vista jurídico, creo que el artículo 110 concede una expresa facultad para delegar en un miembro de la Comisión la defensa oral de una enmienda. Considero asimismo que, no habiendo ningún precepto que lo impidan, esta delegación llega a poder anunciar la preparación del voto particular a los efectos de su defensa en el Pleno. Son dos temas perfectamente diferenciados de la delegación de voto, la cual, evidentemente, no cabe, porque ahí se cruza la voluntad de un votante con la de otro y, por tanto, en la formación de ese acto colectivo puede y debe exigirse la participación personal del Senador.

Este es el aspecto jurídico. Pero yo soy muy sensible a lo que acaba de decir el señor Ramos en relación a la consideración que merece la Presidencia, la Mesa y el conjunto de cuantos estamos aquí trabajando, en esta labor dura y esforzada en la que todos procuramos acertar lo mejor posible. Naturalmente, habrá casos donde la ausencia del Senador estará realmente justificada, pero parece que hay otros en que esa justificación no es tan clara.

Por tanto, recogiendo la insinuación del señor Ramos, con cuyo fondo moral yo estoy

totalmente de acuerdo, propongo a la Presidencia, si le parece bien, que se haga una advertencia, dando un plazo de tres o cuatro días (porque ellos ahora sólo conocen el criterio que se ha venido aplicando hasta el momento, que ha sido extremadamente liberal, como propio del talante de la Presidencia), haciéndoles saber que si esta situación continúa podemos vernos obligados a reconsiderar ese criterio tan amplio y flexible hasta el momento seguido. Nada más, Señor Presidente. *(El señor Ramos Fernández-Torrecilla pide la palabra.)*

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Ramos.

El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECI-LLA: Me atrevería a hacer una propuesta a la Comisión, pese a que, en efecto, el precepto del Reglamento habla de que puede delegarse en otro Senador; pero como creo que no hay nada establecido y que los precedentes, e incluso la legislación aplicable, podrían hacer avalar la proposición que voy a hacer, sugiero que a partir de mañana esta delegación fuera expresa, por escrito y comunicada a la Mesa de la Comisión. Creo que es la manera de que podamos solucionar el problema. Así, pues, me atrevo a proponer a la Comisión que se adopte el acuerdo de que, a partir de mañana, si no consta a la Mesa esa delegación por escrito, no se acepten tales delegaciones.

El señor PEDROL RIUS: Señor Presidente...

El señor PRESIDENTE: Vamos a dejar el debate sobre un tema que no es propio del orden del día en estos momentos. La Mesa estudiará las propuestas efectuadas por el señor Pedrol y el señor Ramos y tomará esta tarde una resolución.

El señor VILLAR ARREGUI: Señor Presidente, para una brevísima cuestión de orden. Considérenos adheridos a la proposición del señor Ramos.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villar. El señor Xirinacs tiene la palabra para defender su enmienda.

El señor XIRINACS DAMIANS: Entramos en el polémico texto de la posible disolución matrimonial y otra vez hay dificultades en decir las cosas claras en el texto, presumiblemente por razones de moral emanadas de la teología católica. No habría que repetir aquí que una cosa es la legislación civil y otra la moral católica. Si no todos los ciudadanos son católicos, es discriminación e injusticia hacer pasar a todos por el rasero que rige sólo a una parte. En la inmensa mayoría de Estados, después de muchos años de discusiones, se ha ido imponiendo la ley del divorcio que, como una posible ley de autodeterminación, no obliga ni recomienda a nadie romper vínculos, sino que permite la disolución cuando la voluntad de unión ha desaparecido. Esto representa una gran mejora para la humanidad, que aprende así a fiar más de la libertad, la voluntad y el amor que de la fuerza, la coacción y la cadena.

Pero en mi condición de cristiano, católico y sacerdote puedo y debo decir, a los que se sientan vinculados por su militancia católica convencida, que somos herederos de situaciones históricas que poco tienen que ver con la voluntad del fundador Jesús de Nazaret. Habría que estudiar un poco más la Biblia y la historia y muchas posiciones absolutas se volverían más relativas y la Iglesia estaría más cerca de la realidad de sus hijos.

Entre los judíos hubo divorcio. Evidentemente a favor del hombre, no de la mujer. Jesús, a pesar de que existan ciertos textos más endurecidos que otros, según qué hagiógrafos escriban, no viene a mandar, sino a liberar. No hace leyes, da consejos. Ser judío obliga a leyes. Ser cristiano es algo libre, gracioso, generoso, plural. Muchos dones y un espíritu. No una ley. Unos expresan el amor de Dios por el desprendimiento de los bienes, otros por el martirio, otros por la abstinencia de relaciones sexuales y otros por el amor indisoluble y para siempre. Es un signo del amor pleno de Dios. Hay amores humanos limitados y amores infinitos. El amor tiene algo de infinito. Es absurdo comenzar a amar con condiciones, con cartas escondidas en la manga. Ese amor humano o sin límite ni cortapisas es anuncio del amor supremo de Dios para los creyentes.

Es un sacrilegio convertir el matrimonio

indisoluble evangélico, esa expresión libre y graciosa del amor supremo, en un contrato jurídico en nombre del Evangelio. El contrato matrimonial es cosa de derecho civil, no de teología católica, pero, por desgracia, la decadencia de los valores evangélicos primitivos torció las cosas. Se confunde hoy, a veces, el amor sin otro límite que la muerte con una jaula en donde un león y una tigresa se despedazan hasta la muerte sin poder escapar y perjudicando con ello gravemente a la descendencia.

En la Iglesia se practicó el divorcio durante el Imperio Romano. Sólo se fue prohibiendo paulatinamente en la Edad Media. Hasta el Concilio de Trento los canonistas discreparon sobre el carácter absoluto de la indisolubilidad del matrimonio. Se ve, pues, que incluso desde un punto de vista católico, no fanático, sino histórico y responsable, el antidivorcismo tiene una fuerza muy discutible.

Con las debidas cautelas, que la ley puede prever para evitar los males que puede llevar también consigo el divorcio, debe, pues, aceptarse esta ley.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xirinacs.

¿Algún turno a favor? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

La siguiente enmienda número 327 ha sido presentada por el señor Sánchez Agesta, que tiene la palabra para su defensa.

El señor SANCHEZ AGESTA: La retiro, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez Agesta.

A continuación, la enmienda número 389, del señor Osorio. Tiene la palabra el señor Sánchez Agesta.

El señor SANCHEZ AGESTA: Mantengo los propios fundamentos alegados por el señor Osorio.

El señor PRESIDENTE: El señor Xirinacs tiene otra enmienda. ¿La da por defendida o quiere hacer uso de la palabra para defenderla?

El señor XIRINACS DAMIANS: Esta otra enmienda la mantengo en caso de que fracase la primera.

El señor PRESIDENTE: Este es el momento de defenderla. Después de la votación no se puede volver a discutir.

El señor XIRINACS DAMIANS: Respecto a la pregunta que se podría hacer, si a partir de la edad que la ley determine, que no suele ser nunca la mayoría de edad, sino mucho antes, podrá casarse una pareja de menores de edad sin permiso paterno, en la motivación presentada en la enmienda ya se indicaba que es principio constitucional que toda norma de este rango declare derechos no susceptibles de limitación si no están previstos en la misma Constitución.

El articulado aprobado por el Congreso señala y proclama el derecho a contraer matrimonio a partir de la edad que la ley determine. Esta edad es la indicada por el Código Civil o por las leyes civiles.

Según estas leyes, tanto en el derecho español como en el derecho comparado, se establece esta edad en base a determinados conceptos sociológicos, morales, jurídicos y, sobre todo, médicos. Huelga decir que la causa principal es la capacidad activa de fecundación o pasiva de gestación. Por eso, es también corriente y usual en toda la normativa civil encontrar que esta edad es diferente para el hombre o para la mujer.

Así las cosas, no sólo una mera observancia de las constantes jurídicas y sociológicas nos permiten ver que a la persona que se encuentre en esta edad se le reconoce el derecho a contraer matrimonio, sino que esta capacidad «ex lege» debe ser complementada por la llamada autorización paterna (utilizamos el término paterno a los meros efectos de una mejor comprensión del problema, si bien somos conscientes de que la tradicionalmente llamada autorización paterna no es otra que la autorización de aquella persona que es titular de la denominada patria potestad). Puede ser materna también.

Esta misma Constitución que estamos discutiendo prevé la mayoría de edad a los dieciocho años y, por tanto, con carácter general

debemos decir que todo ciudadano está sujeto a la patria potestad hasta dicha edad.

Pero resulta que el artículo aprobado por el Congreso declara en su apartado 2 que la ley regulará: «las formas de matrimonio, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos». ¿Podrá la ley regular conceptos distintos de los indicados en la Constitución? ¿Podrá la ley regular situaciones no previstas sin limitar el derecho previsto y reconocido en el apartado primero de este artículo 30? Nosotros entendemos que no. Y por esto entendemos que la llamada autorización paterna necesaria para que el menor de edad pueda contraer matrimonio seguirá siendo necesaria. Y, además, consideramos que así debe ser. Por esto pretendemos que, prosperando nuestra enmienda, se incluya en el apartado 2 del artículo 30 que la ley regulará también las limitaciones para los menores de edad.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xirinacs.

¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

La señora Landáburu tenía una enmienda, la número 427.

La señora LANDABURU GONZALEZ: Sí, señor Presidente, pero era una enmienda que propugnaba el que se incorpore el principio de igualdad jurídica entre los cónyuges, que ha tenido la buena fortuna de ser incorporado al primer párrafo del artículo. Así, pues, no es que retire la enmienda, es que no es necesaria, porque está asumida.

El señor PRESIDENTE: Perfectamente.

Tiene la palabra el señor Calatayud, para defender su enmienda.

EL SEÑOR CALATAYUD Y MALDONADO: Señor Presidente, señoras y señores Senadores. Voy a sostener a título personal una enmienda al apartado 2 del artículo 30 que estamos debatiendo.

Me obliga a presentar esta enmienda el hecho de que el apartado 2 establece que la ley regulará las formas del matrimonio. Hay que partir de una realidad legislativa y, si me apuran, histórico-legislativa, en la cual la pa-

labra «formas» tiene una decisiva importancia. Tradicionalmente se ha venido entendiendo por formas de matrimonio la forma canónica y la forma civil. Tan era así y tanto repugnaba y ha llegado a repugnar a la sociedad actual la posibilidad de que el Derecho civil regulase la forma canónica del matrimonio, que en la Ley de 1958 se modificó el artículo 42 del Código Civil y se cambió la palabra «forma» por la palabra «clase».

La legislación reconoce dos clases de matrimonio, dice hoy el artículo 42, no «formas». En consecuencia, entendemos que en ningún caso, en un Estado aconfesional y pluralista como el nuestro —pluralista tanto ideológica como políticamente— puede el poder civil inmiscuirse lo más mínimo en la regulación de las formas de matrimonio. En consecuencia, hemos preparado la redacción de una enmienda en la que se mantiene la posición del Estado desde un punto de absoluta neutralidad y se reconoce el hecho, porque es anterior al Estado, de la existencia del matrimonio, tan anterior que prácticamente en casi ninguna Constitución de las actualmente vigentes se definen, ni se explican, ni se concretan cuáles han de ser las formas para su celebración, y que además incluso es tan anterior que puede darse el caso de que accedan a la nacionalidad española, es decir, a la dependencia del Estado español, quienes estén vinculados por matrimonio contraído de otra forma totalmente distinta que no pudo ser regulada en su origen por el Estado español, pero que, sin embargo, al ser incorporados a la ciudadanía española, sí tendrá que regular en cierta manera su reconocimiento y efectos. La fórmula que se ha buscado es tal, que pueda tener después, por ley ordinaria, la regulación más amplia que sea posible.

Desde el matrimonio puramente consensual, solamente por prestación del consentimiento de los cónyuges, hasta el reconocimiento del matrimonio celebrado entre cualesquiera confesiones religiosas, esto aparte de respetar, como decimos, la libertad absoluta de creencias y de moral de los súbditos, de los ciudadanos españoles, tiene la gran ventaja de que al no imponer una fórmula de matrimonio reconocido por el Estado o permitiendo que se establezcan varias fórmulas

de matrimonio establecidas y reconocidas por el Estado, no pueda en ningún caso irse al fraude mediante la elusión de la forma única establecida por éste. Me explico.

Es evidente que en una sociedad como la nuestra que históricamente (y no podemos negar el hecho, está reconocido en la Constitución y se acaba de poner de manifiesto esta tarde ante esta Comisión), tiene un sustrato religioso profundo que va a pesar en ella, se pueda dar la circunstancia de que no se practique, no se celebre el matrimonio en la forma única que pudiera establecerse por el Estado y se eludiesen consecuencias civiles o incluso en los tiempos actuales en que el sujeto tributario llega a ser la familia, se puedan eludir consecuencias de tipo fiscal, se celebrasen exclusivamente matrimonios religiosos que no tuviesen repercusión ninguna en el ámbito civil, porque se había impuesto una sola fórmula para él, que tranquilizaría perfectamente las conciencias de los contribuyentes y que no tendría consecuencia alguna en relación a los hijos, porque todos los hijos tendrían los mismos derechos —tanto los habidos dentro como fuera del matrimonio—, y estarían ante situaciones iguales de hecho sin repercusión civil, sin reconocimiento civil de clase alguna.

La propuesta que el Senador que habla formula como enmienda es: «La ley establecerá los requisitos que han de concurrir en la celebración del matrimonio para ser reconocido por el Estado y producir los efectos previstos en el ordenamiento jurídico». En esta fórmula, como decimos, por ley ordinaria podrá regularse cualquier matrimonio desde el meramente consensual, mediante la prestación del consentimiento, aunque creemos, eso sí, que sería necesaria la fehaciencia en la prestación del consentimiento, por derecho natural. Incluso fuera del derecho natural, por determinada tendencia filosófica, se acepta como medio necesario para la constitución del matrimonio el consentimiento prestado libremente por hombre y mujer, pero entiendo, repito, que en orden a la seguridad jurídica de la situación haría falta al menos la exigencia de la garantía de la fehaciencia del consentimiento prestado (lo que había de establecerse en la legislación ordinaria). Pero desde la amplitud de esta regulación, hasta el reco-

nocimiento de cualquier matrimonio celebrado por confesión religiosa reconocida previamente por el Estado e inscrita en el Ministerio de Justicia, tendría posibilidad.

Este sistema actualmente rige y está admitido en Estados Unidos, en Inglaterra, en Italia, en Portugal; y en Portugal incluso está incorporado a la Constitución portuguesa («independientemente de la forma de su constitución», dice exactamente el texto constitucional).

Establecido lo anterior con esta amplitud, sigue el apartado diciendo: «y regulará los derechos y deberes de los cónyuges y las causas y procedimientos de separación y disolución y sus efectos».

Entendemos —yo también soy católico practicante—, que puede y, más aún, que debe constitucionalizarse la posibilidad de la disolución del matrimonio. Y digo que entendemos que puede y debe constitucionalizarse la posibilidad de la disolución del matrimonio e incluso me atrevo a decir que la Constitución tiene el gran acierto de utilizar la palabra precisa: no ha constitucionalizado la palabra «divorcio» (y es necesario salir al paso de quienes lo están diciendo, pues se ha utilizado este concepto con finalidades no claras); la Constitución lo que ha constitucionalizado es la disolución. Ha tenido el acierto de utilizar la palabra precisa.

Porque incluso la Iglesia Católica, y aquí se ha hablado de ella (y hablo de la Iglesia Católica en sus textos constitucionales, porque texto constitucional de la Iglesia es la epístola de San Pablo a los corintios), permite la disolución del matrimonio consumado, del matrimonio natural, y también permite la disolución del matrimonio rato y consumado; y recientemente, a partir del año 1941, el «privilegio petrino», en interpretación de S. S. Pío XII, permitía y establecía la posibilidad de disolución de matrimonios naturales.

El matrimonio, de suyo, yo así lo entiendo, es indisoluble. Ahora bien, circunstancias, causas determinadas, incluso en una sociedad como lo es la Iglesia Católica (y no hay que decir aquí, porque su doctrina es católica y en este sentido yo la acepto) acepta y prevé la posible disolución de esos matrimonios,

El señor PRESIDENTE: Le queda un minuto a S. S.

El señor CALATAYUD Y MALDONADO: Procuraré ceñirme a él. En consecuencia, no puede haber reserva alguna, e incluso se podría dar la gravísima dificultad, si no se constitucionaliza este derecho, que se dio en determinadas legislaciones del año 1938, cuando propugnaban la nulidad de matrimonios celebrados ante testigos solamente, fuese cual fuese la calidad de los mismos, matrimonios que, sin embargo, a tenor de lo dispuesto en el canon 1.098 del Código de Derecho Canónico, eran perfectamente válidos en pura ortodoxia católica.

Por estas razones, entendemos que la redacción, y así lo pedimos a la Comisión, del apartado 2 del artículo 30 de la Constitución, sea redactado en la forma que está prevista en la enmienda que hemos sometido a la Comisión. Nada más.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Calatayud.

¿Turno a favor? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.) Pasamos a continuación a la enmienda número 675, de la Agrupación Independiente. Tiene la palabra el señor Azcárate.

El señor AZCARATE FLOREZ: Señorías, dentro del cuadro de preocupaciones y propósitos que ha descrito el Senador señor Calatayud de una manera elocuente y clara, dentro de eso, digo, figura la enmienda que proponemos, reducida estrictamente a añadir la palabra «civil». Leyendo el artículo con la redacción que tiene ahora, el número 2 diría así: «La ley regulará las formas del matrimonio civil, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos». Se introduce el adjetivo «civil» para dejar claro que la legislación civil no intervendrá en el ordenamiento del matrimonio religioso de los ciudadanos que quieran celebrarlo, ni en la regulación de sus efectos ni, mucho menos, en la legitimación moral y canónica de su disolución.

De esta forma, ningún cristiano podrá, en cuanto tal, afirmar que debe votar «no» a la Constitución por razones de conciencia, cris-

tiana, ya que este artículo deja intacta la comprensión y realización del matrimonio sacramental, con su característica propia de indisolubilidad. Lo único que aquí se hace es crear la posibilidad de otro tipo de comprensión y realización del matrimonio para quienes no compartan la fe católica, y es el simple resultado de la aplicación del principio de libertad religiosa del Vaticano II y de la desconfesionalización del Estado operada en anteriores artículos de esta Constitución.

Cuando algunos cristianos arguyen que todo matrimonio, por su naturaleza propia, es indisoluble y que, consiguientemente, el cristiano, por ley natural, estaría obligado a oponerse a este artículo, se está olvidando que la razón fundamental que la Iglesia ha dado para la indisolubilidad ha sido la sacramentalidad de un matrimonio entre cristianos, cuando éste ha sido consumado.

Por todo ello, no se puede decir que sea directamente contrario a la conciencia católica el aceptar que el Estado regule la posibilidad de disolución civil de un matrimonio contraído también civilmente.

Eso es todo.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Azcárate. ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

Pasamos a las votaciones. En primer lugar vamos a votar la enmienda 465, del señor Xirinacs.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 13 votos en contra y dos a favor, con nueve abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿La mantiene el señor Xirinacs?

El señor XIRINACS DAMIANS: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿La apoya el señor Pedrol?

El señor PEDROL RIUS: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Se vota la enmienda 389, del señor Osorio.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 10 votos en contra y ninguno a favor, con 14 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿La mantiene el señor Sánchez Agesta en nombre del señor Osorio?

El señor SANCHEZ AGESTA: Sí, señor Presidente, la mantengo.

El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a votar la enmienda 466, del señor Xirinacs, alternativa, si la primera era rechazada.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 19 votos en contra y dos a favor, con tres abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Xirinacs mantiene su enmienda?

El señor XIRINACS DAMIANS: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Pedrol la apoya?

El señor PEDROL RIUS: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la enmienda 856, del señor Calatayud.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por siete votos en contra y cuatro a favor, con 13 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿Mantiene su enmienda el señor Calatayud?

El señor CALATAYUD Y MALDONADO: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la enmienda 675, de la Agrupación Independiente.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 16 votos en contra y seis a favor, con dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Azcárate mantiene su enmienda?

El señor AZCARATE FLOREZ: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a votar la enmienda 25, del Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes.

El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER: Se retira, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a votar el texto del proyecto del Congreso.

Efectuada la votación, fue aprobado el texto del proyecto por 22 votos a favor, con dos abstenciones.

El señor PRESIDENTE: El señor Unzueta puede dar lectura al texto.

El señor SECRETARIO (Unzueta Uzcanaga): El artículo 30, apartado 2, queda redactado como sigue: «La ley regulará las formas del matrimonio, los derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos».

Artículos 31 El señor PRESIDENTE: Vamos a entrar en la discusión del artículo 31, apartado 1.

Enmienda número 26, del Grupo de Progresistas y Socialistas Independientes. Tiene la palabra el representante de dicho Grupo para defender su enmienda.

El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER: Aunque nos gusta nuestra enmienda, en vista de la votación tan masiva que tuvo en contra en la Comisión como Ponencia, la retiramos, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Xirinacs para defender su enmienda.

El señor XIRINACS DAMIANS: La retiro, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Olarra para defender su enmienda.

El señor OLARRA UGARTEMENDIA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, los tiempos actuales exigen un marco de solidaridad entre todos los ciudadanos y, por tanto, reconocimiento explícito de que la propiedad tiene un fin primordialmente social, ya que resultaría absurdo e injusto que no fuera así.

La Constitución que estamos debatiendo pone bien en claro esta función social y, por lo tanto, no caben equívocos en esta materia.

Sin embargo, lo que muy bien puede ocurrir es que carguemos el acento de tal forma que el derecho a la propiedad pueda quedar desvaído de tal manera que pudieran existir peligrosas interpretaciones en el futuro con respecto a un derecho tan elemental a la persona humana.

La Constitución, como norma suprema, tiene que ser la gran erradicadora de incertidumbres. En este sentido, existe hoy día en España una inmensa masa de pequeños ahorradores que tienen que ver protegidos sus modestos patrimonios, por encima de las eventualidades de tipo político y social que puedan sucederse. No podemos legislar sin tener en cuenta que más de tres millones de familias han invertido sus ahorros en la compra de valores mobiliarios.

Existen, asimismo, millones de pequeños negocios agrícolas, comerciales e industriales, que son fruto del esfuerzo de toda una vida, cuando no fruto de varias generaciones.

Afortunadamente, en estos últimos lustros, la propiedad inmobiliaria se ha extendido de tal manera que gran número de españoles son propietarios de su hogar y, en muchos casos, poseen una residencia secundaria.

Hemos de congratularnos, por supuesto, de que el nivel de desarrollo alcanzado por el país permita este tejido social tan importante. Por ello, hemos de poner el acento en defender ese santuario último de la propiedad privada. Corremos el riesgo de trasladar a la Constitución los prejuicios ideológicos de este momento de transición que estamos viviendo. Muchas veces se confunde al anterior sistema con el modelo capitalista y, por ello, como reacción, se pretende alcanzar cotas crecientes de progresismo, cosa lógica, de otra parte. Este hecho es cierto, puesto que el sistema anterior era una extraña mezcla de

paternalismo con las clases sociales modestas, de proteccionismo ultranacionalista y de favoritismo de viejos resabios feudales que poco tiene que ver con la auténtica economía de mercado, en donde el riesgo va indisolublemente ligado al ánimo de lucro.

No cometamos, por lo tanto, el error de pensar obsesivamente en el sistema anterior pretendiendo corregirlo a nuestra manera y de trasplantar con ello nuestros condicionantes a la Constitución.

Los españoles hemos votado de manera mayoritaria por un sistema al estilo occidental, del que formamos parte por derecho propio, por tradición histórica y cultural, por filosofía de la vida, por pensamiento político, por fórmulas de convivencia sociales y por ordenamiento económico y jurídico.

Está claro que en nuestro caso, entre todas las posibles alternativas que pudieran existir en teoría, la única verdadera en estos momentos es precisamente la de ensamblarnos dentro de este grupo de naciones, que figuran a la cabeza del mundo, en cuanto a su grado de desarrollo, que son las más progresivas en materia social, que tienen, además, el privilegio de gozar de libertades políticas, amparadas por su forma democrática de gobierno y, lo que es aún más importante, por un Estado de Derecho en virtud del cual todos los ciudadanos son iguales ante la ley.

Los beneficios de esta sociedad que admite la economía de mercado, pero teniendo en cuenta el bienestar de los ciudadanos, fortaleciendo para ello al sector público, que tiene unos mecanismos compensatorios que evitan desigualdades notables o privilegios irritantes, que mantiene un delicado equilibrio entre las diferentes fuerzas o intereses o los inevitables grupos de presión que existen hoy en día en el complejo mundo que nos está tocando vivir; pero que es capaz de la auto-crítica y que exige a sus administradores públicos cuentas estrechas de su gestión, todas estas ventajas son demasiado fuertes como para que intentemos cualquier otra alternativa.

No cabe pensar, por lo tanto, en otro tipo de aventuras, ya que nuestros rumbos están históricamente marcados.

Es preciso recalcar todas estas consideraciones para evitar que los desviacionismos

puedan producirse desde la misma norma constitucional.

Volvemos a insistir en el tema, el reconocimiento de la inviolabilidad de la propiedad privada no resta un ápice a la función social de un Estado moderno y, sin embargo, cierra el camino a aventuras que pudieran ser muy peligrosas en nuestro país y que han tenido tan lamentables consecuencias en el pasado.

La Constitución tiene precisamente que evitar todo posible espíritu de revancha o toda fórmula que transforme a los españoles en vencedores o vencidos, que daría lugar a una sucesiva serie de peligrosas acciones y reacciones en cadena.

No cometamos la ingenuidad de creer que todos los millones de familias españolas a los que nos hemos referido anteriormente van a permitir que se les desposea de sus propiedades amparándose en leyes que, a la postre, resultarían injustas y vejatorias y, como tal, rechazadas por el cuerpo social.

Por último, vamos a añadir un argumento de corto plazo, pero que resulta muy efectivo.

En el momento actual, el país está viviendo una auténtica fiebre consumista, que es fruto de un estado de cosas muy complejo, pero en donde tiene una influencia decisiva el aspecto psicológico de que hay que gastar porque mañana te pueden quitar lo que tienes.

Entre las múltiples definiciones con que se ha querido hacer comprender ese insondable fenómeno que es la inflación, en estos últimos tiempos se ha puesto de moda el término de «inflación psicológica» que se distingue por esa hipersensibilidad de los ciudadanos hacia el consumo y que, a la postre, puede abocarnos a un auténtico desastre.

Los legisladores hemos de tener muy en cuenta todas estas corrientes económicas y sociales y tratar de orientarlas hacia el bien común.

Pues bien, el bien común exige en estos momentos que el ciudadano español trabaje, se esfuerce, ahorre e invierta.

Difícilmente podrá llevar a cabo todas estas tareas si no le proporcionamos unas normas supremas lo suficientemente claras y estables como para que le motiven fuertemente a volver a adquirir los viejos hábitos de la moderación, el ahorro y la inversión.

Hemos de darnos cuenta de que el futuro

de España está en una buena parte en nuestras manos y de que, por lo tanto, tenemos que obrar en consecuencia por encima de intereses partidistas, de coyunturas ocasionales o de demagogias que el país pudiera lamentar no tardando mucho tiempo.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarra.

¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.) ¿Algún otro señor portavoz? (Pausa.)

El señor Vida tiene la palabra.

El señor VIDA SORIA: Solamente para señalar lo coherente que resulta esta enmienda que, por otra parte, nosotros no vamos a apoyar en ningún caso justamente porque opinamos lo contrario que el Senador enmendante. Y señalo la coherencia que hay entre que en la sesión de esta mañana se nos dijera que pusiéramos la palabra «profesional» en lo referente a la huelga, porque no añadía nada y ahora se tenga que poner que «la propiedad es inviolable», que tampoco añade nada al texto. Vuelvo al tema de la desconfianza y a una línea curiosa sobre una serie de enmiendas que aparecen en el Senado.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olarra.

El señor OLARRA UGARTEMENDIA: En este caso, como todos los señores Senadores conocen, estoy haciendo un planteamiento aun cuando luego viene una enmienda al apartado 2 en el que se habla de la inviolabilidad de la propiedad personal. No veo y no entiendo lo que quiere decir el señor Vida en el sentido de que ve una secuencia y un orden. No consigo entender lo que quiere decir con eso, salvo que me lo aclare más. Porque en el caso mío concreto voy a aprovechar la ocasión para explicar el hecho de que me correspondan una serie de enmiendas, todas orientadas en el campo económico y social. Ello obedece a una razón clara.

Cuando nuestro Grupo estudió todas las enmiendas, para no incidir unos y otros y hacer las mismas interminables, repartimos de alguna manera un poco los temas. Y a mí, no sé si afortunada o desgraciadamente, me

tocaron éstos. Esta es la razón por la que estoy en esta línea que no quiere decir que de no ser así no hubiera presentado otras muchas a otros muchos apartados de esta Constitución que no me gusta cómo está.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la enmienda del señor Olarra. (Pausa.)

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por nueve votos en contra, con 13 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Olarra quiere mantener su enmienda en el Pleno?

El señor OLARRA UGARTEMENDIA: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿La apoya algún señor Senador?

El señor SANCHEZ AGESTA: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: A continuación se pasa a votar el texto del Congreso. (Pausa.)

Efectuada la votación, fue aprobado el texto del proyecto por 22 votos a favor y uno en contra.

El señor PRESIDENTE: ¿Quiere dar lectura del texto el señor Secretario?

El señor SECRETARIO (Unzueta Uzcanza): Dice así: «Se reconoce el derecho a la propiedad privada y a la herencia».

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. A continuación pasamos a discutir el apartado 2, al que hay presentadas dos enmiendas idénticas, una del Grupo Parlamentario Progresista y Socialistas Independientes y otra del señor Carazo.

Tiene la palabra el señor Martín-Retortillo.

El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER: Por los mismos argumentos que antes, se retira.

El señor PRESIDENTE: No estando el señor Carazo en la sala...

El señor PEDROL RIUS: Mantengo la enmienda del señor Carazo, por delegación suya.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún turno a favor? (Pausa.) ¿En contra? (Pausa.)

Se pasa a votar la enmienda del señor Carazo. (Pausa.)

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 20 votos en contra, con tres abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Pedrol mantiene la enmienda para su defensa en el Pleno?

El señor PEDROL RIUS: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Se pasó a votar el texto del Congreso. (Pausa.)

Efectuada la votación, fue aprobado el texto del proyecto por 22 votos a favor y dos en contra.

El señor PRESIDENTE: El señor Unzueta dará lectura del texto.

El señor SECRETARIO (Unzueta Uzcanaga): Dice así: «La función social de estos derechos delimitará su contenido de acuerdo con las leyes».

El señor PRESIDENTE: Pasamos al apartado 3. El señor Olarra tiene la palabra para mantener su enmienda.

El señor OLARRA UGARTEMENDIA: Como he explicado antes, mi nueva enmienda al mismo artículo sigue la línea que le preocupaba al señor Vida.

La potestad expropiatoria de la Administración Pública es una institución inexcusable del Estado moderno y exigencia insoslayable para el pleno cumplimiento de los fines de aquél.

Una vez más, volvemos a insistir en el tema fundamental que la función social no tiene por qué estar en contradicción con el respeto a la propiedad privada y a los derechos personales de los ciudadanos.

Por supuesto que, si entran en colisión los dos intereses, siempre tiene que prevalecer el fin social.

Pero aquí podemos abrir un peligroso portillo, si no establecemos unas normas constitucionales claras e inequívocas.

Podemos correr el riesgo de que, reconociendo farisaicamente la propiedad privada, ésta se elimine por la vía coactiva de la confiscación pura y simple.

La expropiación es una institución jurídica admitida en todos los países occidentales, pero que lleva ineludiblemente ligada a la misma las garantías para el expropiado y la justa indemnización.

Si estas garantías no se cumplen, la expropiación se transforma en una confiscación, con lo cual no sólo acabamos con la economía de mercado, introduciendo una economía marxista, sino también con la libertad individual y, a la postre, con las libertades públicas, ya que es imposible que exista democracia, cuando se conculcan derechos tan elementales de la persona.

Esta norma confiscatoria puede introducirse de manera subrepticia si no queda claro que la Administración Pública, al apropiarse de los bienes, tiene que establecer «a priori» la valoración de los mismos y el abono por parte del erario público.

Existen precedentes en países de que, al cabo de varios años de ser expropiado un determinado bien, no se han fijado todavía los valores y, por supuesto, no se han indemnizado.

Si nuestra norma constitucional es equívoca en esta materia, puede ocurrir que en el futuro se utilice el arma de la expropiación, sin garantía de ningún tipo, para socializar y marxistizar nuestra economía dentro del ámbito legal, sin que los ciudadanos tengan capacidad de defenderse.

Hay muchas maneras de confiscar los bienes tratando de guardar las formas.

En estos momentos en los que, no sólo en España, sino en general en todo el mundo, padecemos tasas de inflación desmesuradas, cualquier ciudadano, al que se expropian sus bienes o se los nacionalicen, si no recibe el dinero como contrapartida inmediata, bien porque se dilata el pago o bien porque se le abone con título de Deuda amortizable a lar-

go plazo o con intereses fijados por el Estado, sin tener en cuenta para nada los tipos de interés del mercado, podrá decir, con razón, que ha sido expoliado.

En estos momentos en que hablamos de justicia social, nos olvidamos fácilmente de la situación tremendamente discriminatoria que estamos aplicando a una gran masa de ciudadanos, pertenecientes fundamentalmente a la clase media, a la que estamos haciendo pagar las consecuencias de todos los errores económicos, y que en el futuro pueden sufrir en su carne las aberraciones ideológicas que pudieran derivarse de una Constitución equívoca.

He hablado anteriormente de que hay que estimular el ahorro y la inversión, y esto difícilmente puede llevarse a cabo si a los ciudadanos no les damos garantía de que se les va a respetar dicho ahorro.

Por supuesto que el gran problema y el gran cáncer que tiene la sociedad española en el momento actual es la falta de inversión privada, por ausencia de expectativas empresariales.

El año 1978 va a ser el cuarto ejercicio consecutivo en que el proceso de formación bruta de capital va a dar una tasa de crecimiento negativo y, si Dios no lo remedia, este signo coyuntural va a continuar a lo largo de 1979.

Esta falta de inversión nos está conduciendo a un proceso de crecimiento del paro que no tiene precedentes en nuestro país.

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, hemos superado ya la cifra del millón cien mil parados y, desgraciadamente, estas cotas no van a quedar ahí, y van a ser superadas en buena medida.

La gran tragedia de la sociedad española y el gran reto que se nos presenta a todos de cara a la década de los ochenta puede ser, precisamente, este tema del paro.

No comprendo cómo vamos a poder mantener una sociedad estable y democrática si superamos la cifra del 10 por ciento de parados con respecto al total de la población activa, y este hecho puede ocurrir en los primeros meses de 1979.

Se nos argumentará que si la inversión privada no actúa y no sirve para disminuir el paro, que entre en funciones la inversión pú-

blica socializando, si es preciso, nuestra economía. Pero entonces habremos acabado con la libertad. Por supuesto con la libertad política, porque el ciudadano no será dueño de sus esfuerzos.

Pero, asimismo, habremos acabado con la libertad de consumir, porque el Estado tendrá que imponer el ahorro como ocurre a la mayoría o a la totalidad de los países comunistas.

Este no es un fenómeno al que se llega de una manera gratuita, sino en una lógica implacable de las cosas.

En la otra vertiente, en la de la inversión, está demostrado hasta la saciedad que la inversión pública es mucho menos eficaz que la privada y que el Estado es un mal «empresario».

En el momento actual, la inversión se encuentra trágicamente impotente para acudir de manera subsidiaria a ayudar a la iniciativa privada en este momento tan delicado de depresión. Y es que no podemos olvidar que el gasto público consuntivo lo absorbe todo.

Finalmente, y hablando del caso español, no conozco ningún programa de ningún partido de izquierda que nos presente una alternativa realista para disminuir este grave problema del paro.

Se habla de la creación de ochenta mil, de cien mil, de doscientos mil puestos de trabajo, y yo me pregunto: ¿qué supone esto ante los dos millones de parados a que podemos llegar?

En definitiva, el único camino de salvación de nuestras libertades democráticas y de nuestro progreso económico y social reside en que creemos unas reglas de juego que permitan el desarrollo de las fuerzas de mercado.

Por ello, insisto en que se apruebe mi enmienda que, en definitiva, no pretende más que evitar normas equívocas que puedan conducirnos a un modelo de sociedad que la mayoría de los españoles no deseamos. Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Olarra. Esta enmienda es análoga a la del señor Iglesias, y no sé si el señor Iglesias la había retirado.

El señor IGLESIAS CORRAL: Ni la retiro ni me parece análoga.

El señor PRESIDENTE: La diferencia es una palabra, en una enmienda se dice «previa y justa», y en otra sólo «previa».

¿Algún turno a favor de la enmienda del señor Olarra? (Pausa.) ¿Algún turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Sánchez Agesta.

El señor SANCHEZ AGESTA: Únicamente para subrayar que a mí me han impresionado muchas de las razones que he escuchado. Creo que no se puede quizá —hay que ser realista— establecer una previa indemnización, porque de hecho no se da ni en los países en que la exigen.

Quizá el señor Olarra no tuviera inconveniente en modificarla si ese carácter previo se limitara a la valoración, que ya supone para el propietario la posibilidad de obtener crédito, y a la justicia de la indemnización. Esto creo que sería perfectamente aceptable por todos los Grupos de la Cámara, pero no insisto en ello. Únicamente quería marcar estos aspectos de la enmienda, ya que realmente el señor Olarra ha dado argumentos de tipo social que merecen una consideración.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Sánchez Agesta. El señor Villar Arregui tiene la palabra.

El señor VILLAR ARREGUI: Para consumir un minuto en dejar expresión de mi perplejidad. La previa indemnización no ha sido exigida por ninguna de las leyes de expropiación forzosa vigentes en España, o al menos no lo es por la que está actualmente en vigor cuando se trata de expropiación urgente. Basta con la consignación de un depósito para que se pueda producir el acta previa a la ocupación y, por consiguiente, la transferencia en la posesión del bien o del derecho expropiado.

Por eso es por lo que no se puede escuchar sin respuesta que la no exigencia en la Constitución de la consignación, de que la indemnización sea previa —y no lo ha sido, por ejemplo, en las expropiaciones urbanísticas realizadas al amparo de la Ley del Suelo—,

pueda dar origen a esa multitud de hecatombes con que el señor Olarra nos ha amenazado. Pienso que conectar el problema del paro con el adjetivo «previa» en la Constitución es desfigurar la realidad de las cosas.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Villar. El señor Olarra tiene la palabra para rectificar.

El señor OLARRA UGARTEMENDIA: Simplemente para decir que los temas siempre son relativos. Lo que a mí me parece que puede ocurrir normalmente, al señor Villar le parece hecatombe. Todo es, como digo, relativo. Yo creo que no llegaremos a la hecatombe, pero si ya casi hecatombe no es lo que nos está pasando, que me diga el señor Villar a qué hay que esperar.

El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a discutir conjuntamente las enmiendas números 120, del señor Iglesias; 194, del señor Cacharro; 217, del señor Matutes, y 392, del señor Ribera. El señor Iglesias tiene la palabra para defender su enmienda.

El señor IGLESIAS CORRAL: Al presentar esta enmienda no es que esté jugando por libre, estoy llenando la obligación que contraí, pero sin compromiso para nadie, de justificar las enmiendas que deduje.

La justificación de esta enmienda podría reducirla a lo que expresé al consignarla: la abundancia y abuso de expropiaciones; el chorro de expropiaciones; la imagen que ha dejado una serie desproporcionada de expropiaciones. Todo esto exige que se adopten medidas que puedan llevarnos a conseguir una situación de equidad, de tranquilidad y de paz para los que entran en el juego de las expropiaciones.

Decía antes que mi enmienda no es semejante a la que me ha precedido, especialmente en cuanto a los fundamentos brevísimos con que debo de apoyarla. La interrogante es la siguiente: ¿qué intereses trata de proteger mi enmienda, en la que se habla de utilidad pública, previa la correspondiente indemnización? No voy a detenerme en si los precedentes legislativos acostumbra o no a utilizar la palabra «previa», porque esto sa-

ben todos que está en la tradición de este Instituto, aunque en algunas ocasiones haya excepciones.

¿Qué intereses son los que defendiendo con mi enmienda?, ¿los de la propiedad privada? Sí, los de la propiedad privada que acaba de afirmarse en el apartado anterior de este precepto, porque pienso que la propiedad privada, el matrimonio monógamo y la sucesión hereditaria, que sirven de soporte económico para la continuidad familiar, constituyen algo así como las líneas maestras, quizá, de lo que puede llamarse la civilización en que vivimos. Pero yo defendiendo a una propiedad privada que no tiene sentido quirritario, no la defendiendo como un abogado a la romana, sino dentro de aquellos principios que, establecidos por nuestros filósofos y teólogos, la definen como «poder que ome ha sobre las cosas», según Dios y según fuero; es decir, asociando a un título moral un título jurídico y anteponiendo el título moral al jurídico.

Ahora bien, decían los romanos «Jus et obligatio sunt correlata», en una de aquellas expresiones lapidarias que les eran familiares: «derecho y obligación son correlativas; el que toma una cosa la paga». Por consiguiente, la correlación existe y la equidad existe, si se produce cierta simultaneidad, si no hay un desequilibrio en las prestaciones en cuanto al tanto y en cuanto al tiempo.

Ahora bien, aunque he enunciado esto, lo que me mueve fundamentalmente a defender la enmienda no es la propiedad privada —respecto de la cual quise hacer estas observaciones—, sino otra cosa que me parece que tiene un contenido que no lo voy a buscar en los textos, ni en una exégesis legislativa, ni en una navegación doctrinal compleja, sino en la realidad viva.

Lo que me lleva a defender esta enmienda es mi mundo rural gallego; porque mi mundo rural gallego está constituido por los campesinos, por los marineros, por los emigrantes que hacen que nuestro país sea distinto en este aspecto. Se habla de los minifundios —y no voy a entrar en el tema de este fenómeno sociológico—, pero el minifundio es una realidad gallega, no tan perniciosa como se ha divulgado. Habla Murguía de la división salvadora de nuestra propiedad rural. Quiero decir que en nuestro mundo rural gallego, en lu-

gar del asalariado, ha prevalecido el pequeño propietario. Por eso, nuestra reforma agraria tiene que ser peculiar y distinta, tiene que aspirar a aumentar el número de propietarios y no el número de asalariados, instituyendo con realidad el acceso a la propiedad en términos equitativos, en términos no atropellados, no atropellantes, pero que se logre, que en Galicia sea una realidad. Que no haya emigrantes que no tengan una tierra propia.

Hay una figura muy singular en nuestro país; se dice que el hombre que es mitad marinero y mitad labrador trabaja en el mar y trabaja su tierra y ocurre que en muchos de nuestros Ayuntamientos rurales apenas hay quien no tenga el orgullo de tener una tierra propia.

Puedo afirmar a la Cámara que en algún Ayuntamiento gallego se ha dado el caso de que el número de propietarios era igual, no inferior, al número de vecinos.

Entonces, estas garantías expropiatorias tratan de defender a un proletariado rural, de defender unos intereses de este proletariado; de los emigrantes, de los marineros, de los labradores, de los campesinos. Y la voz que yo estoy alzando aquí es la voz misma que alzarían los vecinos de Orense, los labradores de Morás, de Lugo, los de La Coruña, que no tienen sosiego si no cuentan con que al resolverse la expropiación pronto, con toda celeridad, con toda dignidad se les entregue la contrapartida del bien de que van a ser expropiados; y cuando esto no ocurre entonces salta una perturbación social, al margen de las previsiones del legislador. Entonces viene el piquete, se atraviesan en la carretera y dicen: ¡No! y paralizan las obras.

Es decir: no el estudio de la jurisprudencia, ni la exégesis de los textos históricos, sino la fuerza de una sociedad que sabe que si no se establecen garantías suficientes es atropellada, exige el «previo pago», porque el beneficio de la expropiación no se da nunca ni al labrador, ni al marinero, ni al campesino, sino a personas o entidades con más capacidad económica.

Por consiguiente, la enmienda trata de proteger a este sector, y por ello creo que se debe decir «previa expropiación».

Yo respeto las dificultades que se oponen a que prospere esta enmienda, pero me que-

do sosegado sabiendo que interpreto con certidumbre lo que piensan unas personas que están profundamente interesadas en el problema.

Que se haga la afirmación de «previa indemnización» es una justa garantía y una justa satisfacción a los afectados. Permítanme que concluya diciendo esto: en la asamblea de parlamentarios que se celebró en Santiago de Compostela se planteó el problema de si se paralizarían o no las obras de la autopista del Atlántico, y entonces unos brillantes compañeros parlamentarios, los Diputados socialistas, precisamente, no sólo estimaron que debía preceder el conocimiento exacto de lo que había de abonarse y abonarlo, sino que plantearon la necesidad de paralizar las obras. De suerte que esto me parece que proyecta la imagen de que no es superfluo que se traigan estas cuitas al Senado y que me haya permitido entretener unos momentos su atención con este tema.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cacharro Pardo.

El señor PEDROL RIUS: El señor Cacharro no se encuentra aquí, pero mantengo su enmienda por sus propios fundamentos.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Matutes.

El señor MATUTES JUAN: La retiro.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Ribera.

El señor RIBERA ROVIRA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, quienes me han precedido en el uso de la palabra han agotado ya prácticamente todo lo que yo podía exponer en relación con el tema de la simultaneidad para buscar una fórmula por la cual la expropiación pueda realizarse y marchar por cauces fáciles, ortodoxos y posibles. Pero quizá quede un aspecto que yo quisiera resaltar, y es la ventaja extraordinaria que podría tener el hecho de figurar la palabra «previa» en una Constitución cara a la inversión extranjera, que tanto necesitamos en nuestro país si queremos dar cumplida satisfacción a las necesidades de nuestro mun-

do laboral y a las necesidades de la creación de nuevos puestos de trabajo.

Pero como todas las enmiendas están juntas y prácticamente tienen el mismo objetivo, retiro la enmienda y me sumo a las que han formulado anteriormente mis antecesores.

El señor PRESIDENTE: ¿Para un turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) (Varios señores SENADORES: Las han retirado.)

Se están discutiendo las enmiendas de los señores Cacharro, Matutes, Ribera, etc.; aunque se han retirado dos, quedan otras dos. ¿Señores portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Unzueta.

El señor UNZUETA UZCANGA: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, unas palabras conjuntamente para todas las enmiendas discutidas hasta ahora en este tema de las expropiaciones.

Quizá mis primeras observaciones deban referirse al Senador señor Olarra. A él le indico que, a mi modesto entender, hay dos cosas a diferenciar en su exposición: el plano ideal y el plano legislativo o constitucional. En el plano ideológico nada le puedo decir porque es posible que él, en todos estos problemas de economía o de macroeconomía, esté mucho más preparado e informado que yo. Lo que ha podido ser su justificación difícilmente se podrá traducir en una plasmación legislativa concreta. Pienso que al menos sus palabras habrán sido escuchadas por los señores Senadores de esta Comisión, aunque no sea más que por aquello de que nadie está en posesión de la verdad absoluta, y quizá estas observaciones, juntamente con las otras, sirvan para un futuro consenso, no propiamente constitucional, sino de otro orden distinto.

Pero como ahora nos encontramos en el plano constitucional, si quiero decir algo desde el punto de vista de mis propias experiencias, y vuelvo a decir que es quizá la mayor fuente de nuestras decisiones y posturas.

En este sentido, la experiencia de los despachos profesionales es importante, es digna de tener en cuenta, y no voy a ir a particularismos porque, ciertamente, el señor Iglesias ha narrado una dramática situación de muchísimos expropiados.

Creo que en el tema de las expropiaciones y en este problema de la justa o previa indemnización se ha mezclado el plano ideológico con uno práctico, y creo también que se ha confundido que el expropiado es por naturaleza rico. Nuestra geografía está llena de casos de expropiaciones de pequeñísimos, modestísimos propietarios que han visto perdidas sus tierras de cultivo y que, por no haber recibido el dinero, se han visto en dificultades, incluso para abandonar el campo y comprar el modesto piso de un suburbio; y después, cuando han cobrado las indemnizaciones, ni siquiera han podido pagar una pequeña parte del mismo. Digo esto porque no es ningún secreto que en algunas grandes obras públicas las empresas concesionarias han jugado, a la hora de fijar la financiación de las obras, con el retraso en el pago de las indemnizaciones. Y éste sí que es un problema sangrante que se ha vivido en muchísimos lugares de España.

Quizá, y con esto termino, el énfasis o los puntos claves de estas enmiendas estén en las palabras «justa y previa», y quizá a nivel constitucional el problema de «previa» sea una matización excesiva.

Sin embargo, entendemos que hay una enmienda presentada por UCD que obtuvo bastantes votos en esta Comisión, en función de Ponencia, que sustituía la palabra «previa» por «efectiva». Quizá por este camino sea posible una plasmación legislativa al margen de la Constitución, pero en base a ella, donde con justicia se resuelva esta realidad sangrante de los pequeños expropiados que tardan años en cobrar las indemnizaciones.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Unzueta. Tiene la palabra el señor Sainz de Varanda.

El señor SAINZ DE VARANDA JIMENEZ: La argumentación dada por el señor Unzueta coincidiría con la que, evidentemente, cualquier profesional del derecho podría dar respecto a la enorme cantidad de atropellos que se han efectuado y se están efectuando en materia de expropiación forzosa. Sin embargo, resulta muy curioso que, precisamente, sea hoy, aquí, y discutiendo este artículo, la primera vez que los representantes del gran

capital español se acuerdan de que existen los pequeños propietarios, porque hasta ahora, como hace un momento ponía de relieve el señor Iglesias, lo que se ha hecho ha sido lo contrario, utilizar la legislación vigente —inaugurada por el General Franco—, que responde en lo fundamental lo que la propia Constitución va a mantener y que han estado utilizando, digo, constantemente en beneficio de sus intereses.

Nosotros creemos que la expropiación forzosa debe ser regulada por una ley de expropiación más humana, más razonable, que contemplé más estas situaciones; pero tengamos en cuenta que aquí se nos ha pretendido hacer ver por los señores Senadores que han intervenido (Olarra, Ribera, etc.) que la expropiación es una institución de la que sólo pueden ser víctimas los inversores, el capital, etc., cuando, realmente, en el sistema jurídico español hoy vigente la expropiación, como consecuencia (*el señor Presidente agita la campanilla*) de la existencia de la subrogación en la facultad expropiatoria por las grandes empresas concesionarias o beneficiarias de las expropiaciones, hoy la expropiación en nuestro país, en la realidad cotidiana, es empleada muchas más veces por las grandes empresas que por el Estado o por los entes públicos.

Por lo tanto, estimamos que el texto debe quedar tal como está y que los derechos de los pequeños propietarios deben ser recogidos en una nueva legislación de expropiación forzosa que termine con los numerosos abusos existentes. Creemos nosotros que no sería posible constitucionalizar todos y cada uno de los numerosos problemas planteados por las expropiaciones, que, tal como aquí figuran, corresponden la mayor parte a textos fundamentales de los españoles del pasado, corresponden al sistema jurídico vigente y aplicable; y creemos también que es mucho mejor dejarlo como está para que luego, en una ley de expropiación forzosa (creo que nuestro Grupo presentará una proposición de ley de expropiación forzosa en su momento), se salga al paso de todos estos abusos, y en la que quede reflejada la situación de los pequeños propietarios, que, desde luego, serán defendidos por nosotros, como lo han sido siempre.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Iglesias desea hacer uso de la palabra para rectificar?

El señor IGLESIAS CORRAL: No, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Olarra.

El señor OLARRA UGARTEMENDIA: Para alusiones. Cuando ha dicho el señor Sainz de Varanda que en estos momentos el gran capital se acuerda de estos temas, no sé a quién se refería, porque no ha citado nombres.

El señor PRESIDENTE: Entonces, señor Olarra, no es para alusiones. (Risas.)

El señor OLARRA UGARTEMENDIA: Cuando se dice que las grandes empresas hasta este momento son las grandes beneficiarias de esas expropiaciones, a mí nadie me ha oído, al presentar mi enmienda, que he defendido esa posición. Tanto como el señor Sainz de Varanda, estoy en contra de cualquier abuso que se haya cometido por grandes, pequeños, medianos, altos o bajos. Lo que es injusto, es injusto, lo haga quien lo haga y en favor de quien se haga. Ahora bien, si se quiere matizar que en una posible ley de expropiación se defenderán los derechos de los pequeños empresarios, de los agricultores, de los humildes —lo que me parece absolutamente correcto— hemos de pensar que cuando se está hablando de esas grandes empresas, que es lo que yo he querido decir, en los momentos actuales de España, afortunadamente, casi ninguna de ellas es propiedad de personas en concreto, sino que son fruto de la aportación de miles y miles de ahorradores del país.

No pensemos que al hablar de la expropiación de una gran empresa se está expropiando a algún señor potentado que existe en este país o a esos detentadores del gran capital. Hoy, la expropiación de una gran empresa llevaría consigo la expropiación a decenas de decenas o cientos de miles de pequeños ahorradores, que tienen tanto derecho a defenderse como los pequeños agricultores, o esos pequeños empresarios de los que hablaba el señor Sainz de Varanda.

El señor PRESIDENTE: Pasamos, a continuación, a discutir la enmienda 225 del señor Carazo.

El señor PEDROL RIUS: Se mantiene, señor Presidente, por sus propios fundamentos.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Portavoces? (Pausa.)

Pasamos a la enmienda 714 de UCD, cuyo portavoz tiene la palabra.

El señor VILLODRES GARCIA: Para retirar la enmienda de UCD y transformarla en una enmienda «in voce» a título particular, añadiendo simplemente, después de «bienes», la expresión «o derechos», con los propios argumentos que se exponen en la enmienda de UCD retirada, y haciendo constar que los términos «mediante» o «previo», que se discuten...

El señor PRESIDENTE: Perdón, señor Villodres, añadiendo dónde, ¿en el texto del Congreso o en la enmienda de UCD?

El señor VILLODRES GARCIA: En la enmienda de UCD añadiendo, después de la palabra «bienes», la expresión «o derechos».

Y en relación con los términos «mediante» y «previa» que se discuten, esta enmienda sustituye el segundo por la expresión «justa y efectiva indemnización».

Al mismo tiempo, presento una segunda enmienda «in voce», limitada a sustituir la expresión «ningún español», que figura en el texto aprobado por el Congreso, por la palabra «nadie».

El argumento es claro: dejar constitucionalizado el derecho de los extranjeros a indemnización en el supuesto de que sean privados de sus bienes. (El señor Villodres hace entrega del texto a la Mesa.)

El señor PRESIDENTE: ¿Son alternativas, señor Villodres?

El señor VILLODRES GARCIA: No, mantengo las dos de momento.

El señor PRESIDENTE: Haga el favor el señor Unzueta de leer estas enmiendas «in voce».

El señor UNZUETA UZCANGA: La primera enmienda «in voce» presentada por el señor Villodres García dice así: «Nadie podrá ser privado de sus bienes o derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la justa y efectiva indemnización, que se fijará teniendo en cuenta los intereses de los afectados y de la comunidad, y todo ello de conformidad con lo dispuesto en las leyes».

La segunda enmienda «in voce» presentada por el mismo Senador al mismo artículo dice así: «Nadie podrá ser privado de sus bienes sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes».

El señor PRESIDENTE: ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Martín-Retortillo para defender sus dos enmiendas.

El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER: Señor Presidente, señoras y señores Senadores, quizá convenga que me refiera de modo separado a ambas enmiendas, dado que la número 577, que pretendía tan sólo añadir al texto del Congreso, donde dice «Ningún español podrá ser privado de sus bienes...», la expresión «y derechos», es una enmienda muy concreta, muy específica, realmente técnica, y respecto de la cual debo decir que en la reunión de la Comisión, como Ponencia, tuvo 25 votos a favor.

No me demoro, por tanto, en la explicación de esta enmienda, sino simplemente decir que la misma, desde una perspectiva de perfeccionismo técnico, si la expropiación originariamente consistió...

El señor PRESIDENTE: No hace falta que la defienda, ya que obtuvo 25 votos a favor.

El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER: Entonces, ahora sólo dos palabras en relación a la enmienda número 1, con la que se pretende que quien a causa de una expropiación forzosa fuera privado de sus medios de trabajo, podrá exigir que se le reponga en situación similar a la que disfrutaba,

Este es el supuesto, tan frecuente por desgracia, de aquellos que ven expropiado su taller o la tierra que les sirve de único sustento para su vida. En todos estos casos la indemnización dineraria, el dinero, no sirve realmente para sobrevivir. No es más que una cantidad de compensación, pero que no resuelve en absoluto los grandes problemas que se crean. El que quiera expropiar que expropie, desde luego; pero que abastezca un medio de trabajo similar, porque resulta que son los menos dotados los que van a quedar más agraviados por la expropiación forzosa.

En el actual Derecho positivo podríamos, rebuscando, encontrar algún supuesto que pudiera dar pie para defender modalidades como la que se sostiene. Así está, en la vigente Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954, el supuesto de las llamadas expropiaciones que dan lugar a traslados de población (artículos 86 y siguientes), en los cuales hay, sí, una forma de compensación similar, pero es bien conocido que lograr este tipo de expropiación es algo difícil, y que en la práctica sólo en muy contadas ocasiones se pretende.

Entonces, para abreviar, quiero decir que con la enmienda que se postula no se impide, en absoluto, la expropiación, pero el expropiante, sobre todo el beneficiario, que es el que se va a lucrar, si quiere conseguir los efectos de la expropiación, que tenga en cuenta las consecuencias, que nadie sufra desigualmente las consecuencias de estas realizaciones.

Y llegados a estas alturas podemos preguntarnos: ¿Puede aportar la democracia algo al estatuto de la expropiación forzosa? El tecnocratismo de estos años pasados se ha cebado con los pequeños y medianos propietarios, y se ha visto reforzado con las expropiaciones forzosas, porque devengarse se devengaba, y se terminaba cobrando en el mejor de los casos, pero una cantidad insuficiente para rehacer la forma de vida, con lo cual ha sido dable observar tanto atropello, tanta desconsideración, de forma que la compensación dineraria no servía absolutamente para nada.

Podría hacer aquí una larga relación de agraviados y personas que han sido afectadas; podría referirme al largo supuesto de casos que se engloban dentro de estas modalidades. Ahí está el doloroso tema del desa-

rraigo. Esta sí que ha sido una de las causas potenciadoras del paro; sí que se han incrementado los problemas de la poblaciones, de las ciudades, y ha servido, en cambio, de cebo para que aquellos que recibían una cantidad en metálico, pero que no podían reponer su trabajo, compraran, sí, unas viviendas-colmena de las que se lucraban los especuladores del suelo. Son tantos y tantos casos que no quiero insistir sobre ellos porque están en la memoria de todos.

En esta interrogación que antes he dejado en el aire, de si la democracia podía hacer algo, entendemos que sí, que hay una vía de actuación importante, y esta vía sería dar entrada en la Constitución a soluciones del tipo que se postulan en la enmienda.

Se ha armado antes un alboroto acerca del tema de que la indemnización sea previa. Pero, ¿previa, sea quien sea el afectado? Aunque parezca paradójico, aunque no se haya podido discernir, hay una realidad evidente en todos los supuestos expropiatorios de los años pasados, y es que en un gran número de casos las expropiaciones constituyen un auténtico negocio para el expropiado. No se puede involucrar en favor de estos que hacen negocio con las expropiaciones la causa legítima de aquellas otras personas que van a ser afectadas y privadas de sus únicos medios, de sus únicas posibilidades de vida. ¿Previo e igual para todos? Entendemos que no, que el conseguir la igualdad exige tratos desiguales.

Consideramos, por consiguiente, que la democracia podría dar una respuesta ponderada a las exigencias de nuestro tiempo, estableciendo soluciones de trato diferenciado ante las necesidades de los más afectados, como se está haciendo, por otro lado, en países avanzados próximos al nuestro y que no han adoptado todavía la organización socialista del trabajo.

El señor PRESIDENTE: ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Señores portavoces? (Pausa.)

Entramos en las votaciones. En primer lugar, vamos a votar conjuntamente las enmiendas números 364, del señor Olarra; 120, del señor Iglesias, y 194, del señor Cacharro.

Efectuada la votación, fueron rechazadas las enmiendas por nueve votos en contra, con 16 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Olarra mantiene su enmienda para defenderla en el Pleno?

El señor OLARRA UGARTEMENDIA: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿El portavoz del Grupo está de acuerdo?

El señor SANCHEZ AGESTA: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Iglesias mantiene su enmienda para defenderla en el Pleno?

El señor IGLESIAS CORRAL: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿El portavoz del Grupo la apoya?

El señor JIMENO BLANCO: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Cacharro mantiene su enmienda para defenderla en el Pleno?

El señor CACHARRO PARDO: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Pedrol la apoya?

El señor PEDROL RIUS: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a votar la enmienda del señor Cacharro.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 24 votos en contra, con una abstención.

El señor PRESIDENTE: ¿Desean mantenerla para su defensa en el Pleno?

El señor PEDROL RIUS: Sí, señor Presidente, la mantenemos para el Pleno.

El señor VILLODRES GARCIA: Señor Presidente, deseo retirar la segunda de mis enmiendas, que se limitaba a cambiar la frase «todo español» por la palabra «nadie».

El señor PRESIDENTE: Perfectamente. Ruego al señor Unzueta dé lectura a la enmienda que se va a poner a votación.

El señor UNZUETA UZCANGA: Dice así: «Nadie podrá ser privado de sus bienes o derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la justa y efectiva indemnización que se fijará teniendo en cuenta los intereses de los afectados y de la comunidad, y todo ello de conformidad con lo dispuesto en las leyes».

El señor PRESIDENTE: Procedemos a la votación:

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por siete votos en contra y seis a favor, con 11 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Villodres desea mantenerla para su defensa en el Pleno?

El señor VILLODRES GARCIA: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la enmienda 1, del señor Martín-Retortillo.

El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER: ¿Es la enmienda primera o la número 1?

El señor PRESIDENTE: La número 1. La primera está admitida.

El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER: Perfectamente.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 12 votos en contra y siete a favor, con seis abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿Desea el señor Martín-Retortillo mantenerla para su defensa en el Pleno?

El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Se va a votar el texto del Congreso, bien entendido que detrás de la palabra «sus bienes» es «sus bienes y derechos».

Efectuada la votación, fue aprobado dicho texto por 22 votos a favor, con tres abstenciones.

El señor SECRETARIO (Unzueta Uzcanaga): Con la nueva redacción el texto queda de la siguiente forma: «Ningún español podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes».

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a discutir el artículo 32, apartado 1.

El señor Xirinacs tiene la palabra para defender su enmienda. ¿Va a defender conjuntamente las tres que tiene al artículo?

El señor XIRINACS DAMIANS: Pensaba defenderlas por separado, aunque por economía de tiempo sería mejor las tres juntas.

Primero, lo que se hace es añadir unas cuantas mejoras, a mi juicio. Quizá por error no sé de quién, quizá mío, donde dice «disfrutan» debería decir «disfruten», al menos yo lo tenía así en un principio: «Todos los ciudadanos que disfruten las condiciones necesarias tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo» (éste es un cambio); después, añadir: «a la libre elección de profesión u oficio, a la estabilidad en el trabajo», y sustituir «a la promoción social» por «a la promoción personal». Luego, después de que «sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo», añadir «y se respete la igualdad de trato y una participación justa en los resultados económicos de la empresa».

Dice el texto que «todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo». Este derecho nunca será respetado por una sociedad capitalista como la que se constitucionaliza en el artículo 34, sencillamente

Artículo 32

porque la libertad de empresa y de contratación de mano de obra exige un fondo permanente de parados.

Ya tenemos aquí un disparate constitucionalizado; o sobra la inclusión de este derecho, o sobra el modelo económico adoptado en el artículo 34. Además, el texto incurre en la equivocación de confundir la población general con la población activa, que no llega a un 40 por ciento de la primera.

Se debe, pues, apostillar el texto añadiendo «que disfruten de las condiciones necesarias para el trabajo». La promoción del trabajo no es social, sino personal en la sociedad. Es un asunto menor.

He incluido el derecho a la estabilidad en el trabajo porque en esto el capitalismo, modelo económico del texto, es despiadado, la mano de obra es una mercancía y tratada como tal sin miramientos. Debe existir como una especie de capital circulante de mano de obra para flexibilizar el mercado. No existe auténtica planificación racional y humanitaria de los puestos de trabajo. El fenómeno de una masa de obreros en la calle es continuo. Andalucía hoy, en el aspecto del paro, es un polvorín a punto de estallar. Parece que aquí sí que se puede traer el tema del paro con justeza. Las emigraciones laborales son la plaga de nuestro tiempo. Toda democracia desaparece para el que debe emigrar con un destino incierto, con las desventajas económicas, sociales, culturales y políticas de ser extraño en el nuevo lugar de trabajo.

La prohibición de la discriminación laboral no debe reducirse a la razón de sexo; debe hacerse extensiva a cualquier otra razón, si no se vulneraría el derecho a la igualdad constitucionalizado en el artículo 13.

Por último, todas las democracias hijas de la Revolución Francesa adolecen del mismo mal: se olvidaron de la democracia económica. Con la excusa de que el capital exige una retribución, el capital se lleva los beneficios y la participación de los trabajadores en los resultados económicos de las empresas queda a los avatares de una lucha laboral reivindicativa siempre desigual, siempre desfasada en el tiempo con respecto a los aumentos de precio, siempre azarosa y peligrosa para el orden público, siempre antieconómica por la

pérdida de horas de trabajo que comporta, siempre injusta para las clases pasivas con poca capacidad reivindicativa.

Por tantas razones acumuladas, debería mejorarse este texto.

El apartado 3 es nuevo; dice: «Las distancias en las escalas de salarios serán reducidas».

Sobre el tema de las distancias salariales no voy a hacer ninguna disertación. Es de todos sabido que las distancias son enormes. Es cierto que en los países ricos y en los últimos decenios la diferencia entre salarios de obreros no calificados y obreros calificados ha disminuido mucho, más que aquí, pero también es cierto que las distancias más escandalosas se observan a otros niveles, y aunque en los niveles altos también hayan disminuido algo los porcentajes, las distancias aún son radicalmente injustas.

Hay que tener en cuenta los costes de los estudios superiores, pero habría que descontar las ventajas socioeconómicas que traen acarreados estos estudios superiores: mayor información, mejores relaciones, mayores oportunidades, etc.

El viejo método de pagar exageradamente bien a unos pocos para poder expoliar el salario de muchos sigue extendidísimo en nuestro país, y eso constituye la máxima y más constante agresión a la democracia.

Respecto al apartado 4, también debe decir: «La detención preventiva no dará lugar a la pérdida de los derechos laborales».

Se comprende que una medida que no prejuzgue la culpabilidad del detenido no puede causarle un daño. Pensemos cuántos meses y aun años suelen estar privados de libertad ciudadanos cuya culpabilidad no está probada. Ellos y sus familias ya sufren injustamente el daño de verse privados del fruto de su trabajo y la posibilidad de verse el detenido sin trabajo una vez en libertad por la absurda mancha social que supone la detención, agravada por la larga permanencia en la cárcel debido a la consabida lentitud del ejercicio de la Justicia.

Es equitativo que estos males se compensen y otros más se eviten con la fuerza que puede dar este apartado 4 incluido en la Constitución.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Xirinacs. ¿Turno a favor? *(Pausa.)* ¿Turno en contra? *(Pausa.)* ¿Señores portavoces? *(Pausa.)*

El señor Jiménez Blanco tiene la palabra.

El señor JIMENEZ BLANCO: En mi deseo de encontrar partes aprovechables en las enmiendas de todos, y especialmente en las del señor Xirinacs, creo que él lleva razón y debe decir: «Todos los españoles que disfruten de las condiciones necesarias para el trabajo...». Pero yo diría, por ejemplo, si fuera posible hacer una enmienda «in voce»: «Todos los españoles capaces laboralmente...», o «... que integren la población activa...», o algo así, porque no todo español tiene el deber de trabajar o el derecho al trabajo, sino sólo el que pueda hacerlo. Alguno fórmula tiene que haber y yo invito a los señores Senadores a ver si podemos encontrarla.

(Varios señores SENADORES de UCD: Es obvio.)

Entonces, si es obvio, como dicen mis compañeros, no hago ninguna enmienda «in voce».

El señor PRESIDENTE: ¿El señor Xirinacs quiere rectificar?

El señor XIRINACS DAMIANS: No he tenido tiempo de leer el texto propuesto por el señor Martín-Retortillo, pero si dice exactamente eso, me parece muy bien y me sumo al suyo en este sentido, pero en mi enmienda hay muchas cosas más y no puedo retirarla ahora.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el señor Cela para defender su enmienda.

El señor CELA Y TRULOCK: La retiro, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿La Agrupación Independiente, para defender su enmienda?

El señor AZCARATE FLOREZ: La modificación que proponemos es la que se refiere a la remuneración por el trabajo tal y como está establecido en el texto: «Una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia». Nos parece que es

una aspiración notoriamente insuficiente. Habíamos propuesto «una remuneración determinada principalmente por razón de su rendimiento y productividad y, en todo caso, suficiente para satisfacer sus necesidades familiares». En la forma que está redactado en el texto del proyecto, parece que la aspiración que pueda tener el trabajador es solamente satisfacer sus necesidades y las de su familia.

El señor PRESIDENTE: ¿Turnos a favor? *(Pausa.)* ¿Turnos en contra? *(Pausa.)* ¿Señores portavoces? *(Pausa.)* El señor Villar Arregui tiene la palabra.

El señor VILLAR ARREGUI: Para decir sólo dos palabras, con referencia a la enmienda del Senador señor Xirinacs.

El señor PRESIDENTE: Estamos en la enmienda de la Agrupación Independiente. Pasamos a discutir la enmienda del señor Martín-Retortillo, quien tiene la palabra para ello.

El señor MARTIN-RETORTILLO BAQUER: Yo quería decir que la enmienda 468 del señor Xirinacs nos gusta mucho al Grupo y la vamos a votar positivamente. En cambio, la 577 que puntualiza que «se encuentren en condiciones para ello», pensamos que no es necesaria; por tanto, la retiramos.

El señor LOPEZ PINA: Una enmienda de viva voz sugiriendo la supresión, en la cuarta línea, del término «social», después de «promoción».

El señor PRESIDENTE: Se pondrá a votación sin debate.

Se va a votar, en primer lugar, la enmienda del señor Xirinacs.

Efectuada la votación, la enmienda fue rechazada por 11 votos en contra y dos a favor, con 10 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿La mantiene el señor Xirinacs?

El señor XIRINACS DAMIANS: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar la enmienda 582 de la Agrupación Independiente.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por nueve votos en contra y uno a favor, con 13 abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿La mantiene el señor Azcárate?

El señor AZCARATE FLOREZ: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: Señor López Pina, ¿quiere mandarnos la enmienda por escrito? *(Pausa.)*

Vamos a votarla. Es la enmienda que consiste en suprimir la palabra «social», que es la segunda del cuarto renglón del párrafo.

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda por 23 votos a favor.

El señor PRESIDENTE: Se va a votar el texto del Congreso enmendado en esta forma.

Efectuada la votación, fue aprobado dicho texto por unanimidad, con 24 votos.

El señor PRESIDENTE: El texto aprobado del artículo 32, 1, dice así: «Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo».

Pasamos a discutir el número 2.

El representante del Grupo Socialista tiene la palabra.

El señor VIDA SORIA: Muy brevemente, para justificar esta enmienda, que no tiene más que un sentido estrictamente técnico.

El apartado segundo del artículo 32, tal como queda ahora, dice: «La ley regulará un estatuto de los trabajadores». Nosotros creemos, sin pensar que este apartado está mal redactado, que es el momento oportuno de establecer a nivel constitucional algo que

complete el programa que la Constitución marca al Estado en el ámbito de las relaciones laborales. En este sentido, la enmienda que proponemos marca los tres puntos fundamentales que van a ser las líneas por las que van a discurrir las normas que del Estado dimanen en orden a las relaciones laborales.

En primer lugar, se trata de decir que la ley determinará un marco general de la normativa laboral. Así, en definitiva, se está refiriendo sólo al hecho de que una vez que la Constitución ha aceptado la autonomía colectiva, el Estado tendrá que plantearse el tema de articular las normas derivantes de la autonomía colectiva con las normas derivadas de su propia actividad normativa.

En segundo lugar, si el Estado acepta —lo dice el artículo 33 y estaba previsto implícitamente en el artículo 26— la posibilidad de que haya unas normas derivadas de la autonomía colectiva, lo que tiene que hacer es limitarse a establecer una legislación con condiciones mínimas por encima de las cuales los convenios colectivos van a funcionar, y, en tercer lugar, añadir lo que dice el propio texto, unos estatutos de los trabajadores que configuren la posición jurídica del trabajador dentro del orden laboral establecido.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Turno a favor? *(Pausa.)* ¿Turno en contra? *(Pausa.)* ¿Señores portavoces? *(Pausa.)* Tiene la palabra el señor Pérez Puga.

El señor PEREZ PUGA: Por vez primera va a utilizar el Grupo UCD un turno en contra de una enmienda, porque, a pesar de los esfuerzos dialécticos y de gran conocimiento de la técnica jurídico-laboral y administrativa que tiene el Senador Vida Soria, parece que en su forma de expresarse no estaba muy convencido de las tesis que sostenía.

Entendemos que no se deriva de la autonomía que figura en la Constitución, y de manera muy explícita en el artículo 33, en donde se constitucionaliza de manera trascendente e importante para el mundo del trabajo y para el mundo de la empresa la fuerza vinculante de la negociación colectiva y de las relaciones autonómicas entre los empresarios y trabajadores como fuente creativa de unos pactos que han de ser vinculantes.

No se puede seguir de aquí que haya que constitucionalizar, necesariamente, lo que la enmienda del Grupo Socialista llama ley marco jurídico general de las relaciones del trabajo, que puede ser una ley de relaciones industriales al estilo de la de Inglaterra, o un código de trabajo o que también podía ser un «status» de los trabajadores.

Lo que no se puede pretender es que porque se pueda derivar de la autonomía normativa que aquí se establece entre trabajadores y empresarios, con la vigilancia del Estado, haya que constitucionalizar, también, una ley de contrato de trabajo o una ley marco jurídico general de las relaciones laborales y un estatuto del trabajador.

Por otra parte, todos sabemos que el estatuto del trabajador es una innovación que se ha traído al texto constitucional de un antecedente italiano, que por circunstancias muy especiales en aquel país se ha introducido como una ley ordinaria, en donde se ha llegado, a través de esta normativa legal de las libertades, los derechos y los deberes del trabajador, a un estatuto que afecta a los trabajadores en el seno de la empresa y, en algunas otras normativas de mayor relevancia, fuera de la empresa; pero no se sigue que esto haya de constitucionalizarse, porque entonces habría que constitucionalizar todas las normativas de carácter ordinario que se derivaran de los principios de la Constitución.

Por tanto, el Grupo de UCD no tiene otra alternativa que votar en contra y rechazar los planteamientos que aquí se hacen en torno a esta sugerencia.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Pérez Puga. ¿Señores portavoces? (Pausa.)

Tiene la palabra el señor Sánchez Agesta.

El señor SANCHEZ AGESTA: Para manifestar mi conformidad con la propuesta del Grupo Socialista del Senado. Casualmente un miembro de mi Grupo tenía una propuesta jurídicamente quizá peor redactada, pero en la que se proponía lo mismo. Simplemente quiero decir que apoyo esa enmienda. Creo que señala un cauce, aunque quizá se reitera, porque las relaciones de trabajo y las condiciones mínimas a las que habrán de ajustarse, a

fin de cuentas, significarán el estatuto de los trabajadores. Y para compensar el tiempo que ya he hecho perder a la Cámara con mi intervención, puesto que hay una oposición a esta enmienda, la habrá naturalmente a la del señor Prado, que me tiene aquí para representarle, y en este caso la retiro.

El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Sánchez Agesta.

Tiene la palabra el señor Pedrol.

El señor PEDROL RIUS: Para una cuestión de orden, señor Presidente; para una enmienda «in voce» proponiendo un número bis para el artículo 32.

El señor PRESIDENTE: Ruego que la pase a la Mesa. (Así lo hace el señor Pedrol.) Tiene la palabra el señor Villar.

El señor VILLAR ARREGUI: Para muy brevemente decir que la pobreza o el lacónismo del texto del Congreso puede conducir al absurdo. Si todos los españoles tienen el deber de trabajar, ¿será el estatuto de los trabajadores un Fuero de los Españoles o se volverá a una organización al modo de la democracia orgánica y el estatuto de los trabajadores se convertirá en Fuero del Trabajo?

Realmente, el tenor del número 2 del texto del Congreso es tan lacónico y tan pobre que la alternativa, a nuestro juicio, está o en suprimirlo o en mantener, que es la opción que nuestro Grupo asume, la redacción dada a ese número por el Grupo Socialista del Senado. Y no hay, en nuestra opinión, incompatibilidad alguna en que en el número 1 del artículo 33 se garantice que la ley amparará el derecho a la negociación colectiva laboral, con la pretensión del Grupo Socialista de que la ley regule el marco jurídico general de las relaciones de trabajo, así como las condiciones mínimas.

En definitiva, tal es la situación actual. La negociación colectiva no ha podido hasta hace muy poco tiempo vulnerar los mínimos que el derecho emanado del Estado establecía en beneficio de los trabajadores.

Nuestro Grupo no puede votar el texto del Congreso por entender que nada dice o que

lo que puede interpretarse que dice es contrario al espíritu que alienta en la Constitución. Entendemos que algo más dice la enmienda del Grupo Socialista del Senado y por eso nos inclinamos en favor de ella.

El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Socialista para rectificar.

El señor VIDA SORIA: Para decir que yo estoy convencido de las cosas en la medida en que pueda estar convencida una persona que estudia el derecho desde el punto de vista científico.

En este caso, sin embargo, tengo que tranquilizar al Senador Pérez Puga diciendo que sí estoy convencido de lo que decía, lo que puede ser es que lo haya dicho mal, porque yo hablo mal.

Contando, en consecuencia, con lo que ha dicho el Senador señor Pérez Puga, respecto a que esta enmienda de los socialistas no va a tener éxito, yo me atrevo aquí, en uso de mi convencimiento, a decir que el estatuto de los trabajadores que enuncia el apartado 2 del artículo 32 del texto contendrá un marco jurídico general de la relación de trabajo, el establecimiento de condiciones mínimas, y el establecimiento de condiciones personales para los trabajadores, y, si no, al tiempo.

El señor PRESIDENTE: Habiendo sido retirada la enmienda del señor Prado, resta la enmienda del señor Cela.

El señor Azcárate tiene la palabra.

El señor AZCARATE FLOREZ: Está retirada.

El señor PRESIDENTE: Resta votar la enmienda del Grupo Socialista del Senado.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 12 votos en contra y 11 a favor, con una abstención.

El señor PRESIDENTE: ¿Portavoz del Grupo Socialista?

El señor RAMOS FERNANDEZ-TORRECI-LLA: No la mantengo para el Pleno, pero

reservo mi derecho a modificar mi criterio, de acuerdo con lo que tengo discutido con la Presidencia.

El señor PRESIDENTE: La Mesa la da por retirada y también mantendrá su criterio. Vamos a votar el texto del Congreso.

Efectuada la votación, fue aprobado el texto del proyecto por 20 votos a favor, con cuatro abstenciones.

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO (López Henares): El apartado 2 del artículo 32 dice así: «La ley regulará un estatuto de los trabajadores».

El señor PRESIDENTE: Pasamos a las votaciones.

El señor PEDROL RIUS: Señor Presidente, yo tengo una enmienda «in voce» para un artículo 32 bis.

El señor PRESIDENTE: Tenga calma, señor Pedrol, que en su momento se tratará.

Vamos a votar el apartado 3, nuevo, de la enmienda del señor Xirinacs.

Efectuada la votación, fue rechazada la enmienda por 18 votos en contra, con siete abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿La mantiene el señor Xirinacs?

El señor XIRINACS DAMIANS: Sí, señor Presidente.

El señor PRESIDENTE: ¿La apoya el señor Pedrol?

El señor PEDROL RIUS: Naturalmente.

El señor PRESIDENTE: Se pone a votación la enmienda del señor Xirinacs proponiendo un apartado 4, nuevo.

Efectuada la votación fue rechazada la enmienda por 13 votos en contra y siete a favor, con cuatro abstenciones.

El señor PRESIDENTE: ¿La mantiene el señor Xirinacs?

El señor XIRINACS DAMIANS: La mantengo.

El señor PRESIDENTE: ¿La apoya el señor Pedrol?

El señor PEDROL RIUS: Desde luego.

El señor PRESIDENTE: La enmienda del señor Pedrol queda sobre la Mesa y será la primera que se discuta mañana por la mañana.

¿Acepta el señor Pedrol someterla a votación sin debate?

El señor PEDROL RIUS: Sí, señor Presidente.

Artículo 32 bis

El señor PRESIDENTE: Entonces, se votará. El texto es el siguiente: «Artículo 32 bis: Una ley regulará las peculiaridades propias del régimen jurídico de los colegios profesionales, con estructura y funcionamiento democráticos, y con respeto a las normas de adscripción y ejercicio hasta ahora vigentes».

¿Quedan impuestos los señores Senadores o la vuelvo a leer? (*Rumores.*) A la vista de lo anterior, procederá a una nueva lectura y a continuación abriré un turno de portavoces.

Leída de nuevo la enmienda, dijo

El señor PRESIDENTE: Se abre un turno de portavoces. (*Pausa.*) Tiene la palabra el señor Sainz de Varanda.

El señor SAINZ DE VARANDA JIMENEZ: Simplemente para decir que el Grupo Socialista solicitó la retirada de la frase «colegios profesionales» del párrafo primero del artículo 7.º no porque fuera contrario a la existen-

cia de los mismos, sino porque creía que no era aquél el lugar ni el tratamiento adecuados. El Grupo Socialista está en principio conforme con que se lleve a otro lugar, y entiendo que precisamente el artículo 32 bis sería el adecuado.

El señor PRESIDENTE: ¿Algún otro señor portavoz? (*Pausa.*) Vamos a proceder a la votación.

Efectuada la votación, fue aprobada la enmienda por 23 votos a favor, con una abstención.

El señor PRESIDENTE: La Mesa, tras deliberar durante la sesión, ha aceptado por unanimidad la sugerencia del señor Ramos, a la que se han adherido diversos portavoces, y UCD también.

Se entiende que la delegación habrá de ser expresa y escrita por sesión y comunicada a la Mesa en el momento de iniciarse la sesión.

Se comunica además que la Mesa tiene un criterio restrictivo, es decir, que esto es la excepción, que no es el carácter general el que todas las enmiendas se defiendan de esta manera. La Mesa ha decidido que esta norma entrará en vigor pasado mañana, para en aquellos enmendantes que hayan tomado una resolución tengan tiempo de hablar los portavoces con ellos y sepan a qué atenerse.

Ruego a los señores portavoces que estén mañana aquí a las diez y cuarto, porque la Mesa tiene que hacer una breve consulta con los mismos. La sesión se iniciará a las diez y media.

Se levanta la sesión hasta mañana.

Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.

Precio del ejemplar 50 ptas.

Venta de ejemplares:

SUCESORES DE RIVADENEYRA, S. A.

Paseo de Onésimo Redondo, 38

Teléfono 247-23-00. Madrid (8)

Depósito legal: M. 12.580 - 1961

RIVADENEYRA, S. A.—MADRID